

**Diagnóstico sobre las
condiciones de vida, el
ejercicio de los derechos
humanos y las políticas
públicas disponibles para
mujeres que constituyen la
población callejera**

2019

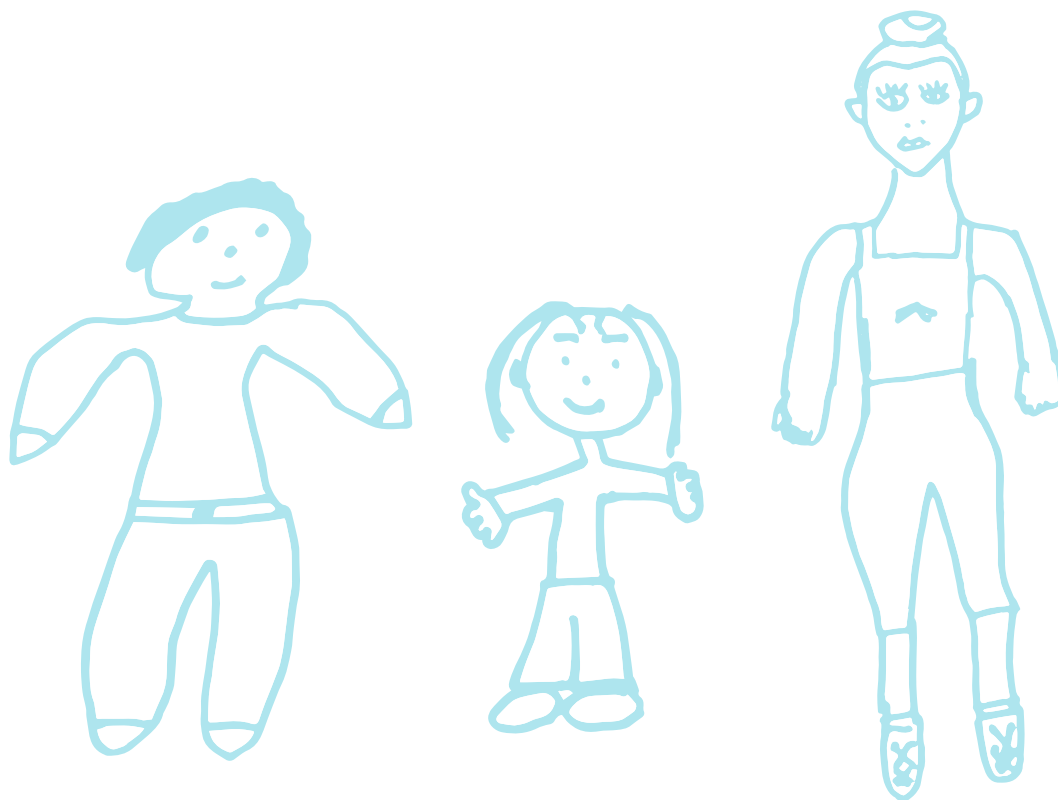


CNDH
M É X I C O

@elcaracol

Cuarta Visitaduría General

Diagnóstico sobre el ejercicio
de los derechos humanos y las
políticas públicas disponibles para
mujeres que constituyen
la población callejera
2019



DIRECTOR GENERAL

Luis Enrique Aguilar Hernández

DIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Gerardo Rodríguez Rivera

COORDINADORA EJECUTIVA

Alexia Itzel Moreno Domínguez

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Coordinadora

Myrna Salazar Álvarez

Diseño del instrumento

Mónica Berenice Martínez Jiménez

Alexia Itzel Moreno Domínguez

Ángel Soriano Ruiz

Marco normativo

Natalia Espinosa Trujillo

Sistematización y redacción

Gustavo Alonso Barrios de la Cruz

Dení Herrera Flores

Israel López Pliego

Mónica Berenice Martínez Jiménez

Myrna Salazar Álvarez

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

Todas aquellas mujeres que confiaron en nosotros para compartir sus experiencias
Otilia Arellano Fonseca y Patricia Lomas Herrera (Amigos Trabajando en los Cruceros)

Antonio Iturbe Salazar (Un Nuevo Día en Luz A. C.)

Carlos Enrique Reyes Valentín (RIA-ODDENAP)

Danielle Strickland

Ricardo Fletes

Adriana Romano Ocampo (Presidenta DIF Acapulco)

Índice

1. Introducción	5
• Evolución conceptual	
• Ausencia de información	
• Género y calle	
2. Apuntes metodológicos	13
• Metodología	
• Contexto de las ciudades y mapas de los recorridos	
3. Derechos	21
1. Identidad	23
2. Educación	37
3. Trabajo	51
4. Salud (física, sexual y mental)	63
5. Vida libre de violencia	81
6. Acceso a la justicia	97
7. Derecho a la vida	113
4. Conclusiones: propuestas y recomendaciones	121
5. Referencias	130

Introducción

Evolución conceptual

Los términos *niños de la calle*, *chavos de la calle*, *vagabundo*, *indigente*, *sin techo*, *persona en situación de calle*, *pordioseros* y *borrachos*, son denominaciones que se reconocen a través de los medios de comunicación o de las charlas cotidianas, pero también en la confección de políticas públicas y en las propuestas de organizaciones de la sociedad civil. Dichos términos recaen sobre las personas que habitan las calles e inciden en la manera en la que son abordados, representados y en la forma en la que se experimentan a sí mismos. Es decir, las expresiones a través de las cuales describimos el mundo y a las personas no son neutrales, tienen un efecto sobre aquellos que son nombrados.

Reconocer la historicidad de estos términos nos permite ubicar la mirada desde la cual han sido representados e intervenidos tanto por la sociedad civil como por las instituciones públicas y no solo eso, sino también posibilita entender la complejidad de relaciones semánticas que perpetúan la desigualdad y exclusión para estos conjuntos sociales.

En el presente informe, se propone denominarles *poblaciones callejeras* en tanto dicha noción remite a la pluralidad de sujetos que experimentan la vida en la calle. Pues no se conceptualiza a un sujeto unívoco o un monolito sino a una multiplicidad de actores con distintas trayectorias, formas de subsistencia, rangos etarios, origen étnico y género.

La reflexión contemporánea sobre las personas que habitan las calles comienza en el México de la década de los 80 del siglo pasado, influenciado en buena parte por los eventos macroeconómicos que en América Latina se desencadenaban como la aplicación de políticas de corte neoliberal.

De acuerdo con Mónica Martínez:

La proclamación de 1979 como el *Año Internacional del Niño*, por parte de la Organización de las Naciones Unidas, también contribuyó a posicionar el fenómeno en la agenda internacional y ubicó la cuestión en un parteaguas temporal dentro de la promoción del desarrollo de investigaciones dirigidas a esta población. Del mismo modo, la celebración en 1984 del *Primer Seminario Regional Latinoamericano sobre Alternativas Comunitarias* para Niños de la Calle, organizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) destacó la creciente preocupación por el notable incremento en los niños y las niñas que reconfiguraban el espacio público (2018: 19).

En 1989 UNICEF publica el informe llamado “Nuevas alternativas de atención para el niño de y en la calle de México” a través del cual podemos observar cómo se comienza a interpretar la mendicidad y el trabajo infantil como un fenómeno social que debe ser abordado desde una perspectiva de derechos humanos que garantice el bienestar de los menores.

Es en este momento que se traza una primera distinción entre niños *en la calle* y niños *de la calle*. Los primeros son concebidos como aquellos que pasan la mayor parte del tiempo en el espacio público pero cuentan con soporte familiar y regresan a un domicilio para pernoctar. Los segundos, en cambio, se encuentran en la calle tanto durante el día como en la noche pues no presentan lazos familiares (aunque no se debe omitir que establecen otro tipo de lazos).

A diferencia de los adultos, la figura del niño posee mayor eficacia simbólica en cuanto a la necesidad de una intervención inmediata. En tanto fenómeno social lo podemos identificar como producto del “fracaso de las políticas de ajuste, retiro del Estado, la deuda externa y las resonancias de crisis económicas foráneas [que] lanzaron a las calles a las franjas más vulnerables de la población: niños y adolescentes, *meninos de rua*, chavos de la calle [...]” (Makowski, 2010).

Posteriormente, de acuerdo con Danielle Strickland (2012), se adoptó el término “menores en situación de calle” para poder incluir ambas clasificaciones. Después, el término menor

fue cambiado al ser considerado invalidante, asimismo se incluyó a los adolescentes y una breve conceptualización desde la perspectiva de género, de tal suerte que el nombre llegaría a ser “niñas, niños y adolescentes en situación de calle”. Sin embargo, la complejidad y persistencia del fenómeno ha impulsado, finalmente, referirse a *población callejera*:

Desde 2007, algunas organizaciones [civiles] en la ciudad de México han usado la noción de “poblaciones callejeras”, que abarca a todas las personas que trabajan o viven en la calle. Por un lado, simplifica y facilita el problema de la terminología y, por otro, diluye las distinciones entre estas poblaciones. [...] Hoy en día, en ámbitos académicos, de gobierno y de la sociedad civil es aceptada la clasificación general de “poblaciones callejeras” (Strickland, 2012: 108).

De este modo, como Juan Martín Pérez sostiene:

Con el término de poblaciones callejeras se refiere la existencia de un grupo de personas que, pudiendo pertenecer a diversos grupos de población, comparten una situación de exclusión económica y social, y experiencias de apropiación de la calle y el espacio público que utilizan como principal área de socialización y obtención de recursos materiales y simbólicos para su existencia. (Citado en CDHDF, 2014)

Asimismo, de acuerdo con el *Informe especial. Situación de los derechos humanos de las poblaciones callejeras* en el Distrito Federal 2012-2013:

Apelar al uso de la categoría poblaciones callejeras permite reconocer el carácter activo de las personas excluidas de la estructura social y tener un acercamiento a una demografía diversa y cambiante que obliga a repensar nociones como la infancia, la discriminación, la tutela, la exclusión, la demografía, la cultura, la democracia y la identidad. (2014: 11)

Las condiciones de vida que manifiestan estas poblaciones suelen no ajustarse a las normas sociales tanto de uso del espacio público como de prácticas cotidianas diversas. De tal suerte que esta percepción negativa ubica a las poblaciones callejeras en posiciones de desventaja en el acceso a los sistemas de salud, justicia, laborales y educación en el país pues tanto la sociedad como

las autoridades se vinculan con ellas a través de la discriminación y la exclusión social, lo cual deviene en serios impedimentos para el goce y ejercicio de sus derechos humanos.

A pesar de los avances e identificación de causas macro, meso y microestructurales que propician el fenómeno de vida en la calle, persiste la creencia más simplista y común que adjudica una debilidad moral, individualiza la problemática social y a la vez invisibiliza los patrones de desigualdad e injusticia que históricamente han negado a las poblaciones callejeras el ejercicio de sus derechos.

De acuerdo con María Cristina Bayón: “La pobreza puede ser entendida como una acumulación de formas interrelacionadas de exclusión que se extienden a diversas áreas de la vida individual y colectiva, separando a los sectores desfavorecidos de los patrones de vida socialmente aceptados” (2015: 19). De tal modo que las formas de exclusión experimentadas por las poblaciones callejeras se manifiesten a través de las maneras en cómo las autoridades y la sociedad consideren a la pobreza como un problema de moral individual y no una cuestión estructural. Son representados como “promiscuos, irresponsables, tramposos violentos y delincuentes, dependientes de los programas sociales y con una débil ética del trabajo” (Bayón, 2015:20). Sin embargo, las representaciones de las poblaciones callejeras entonces coinciden con esta experiencia de la pobreza.

Ahora bien, al responder a una demografía diversa y cambiante, las personas que integran las poblaciones callejeras poseen experiencias diferenciadas de la calle. Las mujeres se enfrentan a un doble estigma por pertenecer a estas poblaciones, es decir, tanto al estigma que recae en ellas por habitar las calles como al de ser una mujer que no corresponde con los estereotipos de género: de lo que una mujer debe ser y hacer.

Se propone nombrar a este segmento de la población: **mujeres que integran o que constituyen la población callejera**. Lo cual permitirá acceder a un espectro de la experiencia de vida en la calle escasamente abordado, y

posibilitará comprender el diferencial de la situación de exclusión económica y social que viven las mujeres, reconociendo sus distintas experiencias de apropiación de los espacios y sus problemáticas particulares.

Ausencia de información

Las poblaciones callejeras son invisibilizadas a través de distintos mecanismos, no solo al ser retiradas de sus lugares de pernocta, socialización y trabajo, sino también al no reconocerles voz propia, lo cual se entiende como exclusión de la producción simbólica. A lo anterior se puede sumar su omisión en los censos y el diseño de políticas públicas. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no cuenta con información detallada sobre estas poblaciones aun cuando detalla la población que habita en los alojamientos de asistencia social, es decir, se encuentran sub-representados en las estadísticas oficiales a nivel nacional, lo que impide conocer quiénes son, dónde se encuentran o qué hacen, lo que obstaculiza un diseño eficiente de las políticas públicas que les incluya.

El recuento de las personas que habitan las calles puede identificar el año 1992 como aquel en el que se realizó un censo para conocer la numeralia de los niños callejeros en la **Ciudad de México**. Llevada a cabo por la Comisión para el Estudio de los niños callejeros (COESNICA), se ubicaron 11 172 de ellos con labores en las calles, de los cuales solo 1 020 vivían en ellas. Para 1995 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) identificó 13 373 niños en la calle, mientras que 1 850 se contabilizaron como de la calle. Posteriormente, para el año 2000, a través del estudio realizado de manera conjunta entre el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia del entonces Distrito Federal (DIF-DF) y Unicef, se contabilizaron 14 322 niños y adolescentes que desarrollan sus actividades en la calle, en tanto 7% de ellos pernoctaban en las calles. (Makowski, 2010).

En la primera decena de nuestro siglo, el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) despliega el *Censo de personas en situación de calle de la Ciudad de México “Tú también cuentas”* 2008-2009 que

arroja una cifra de 2 759 personas viviendo en las calles, donde el 81% son hombres y el 19% mujeres. Este conteo permitió volver a dimensionar el fenómeno no solamente como uno experimentado por niños y adolescentes sino en buena medida por adultos, pues presentó la notable suma de un 79% de personas en situación de calle cuyas edades oscilaron entre los 18 y 59 años (IASIS, 2009). Los censos elaborados posteriormente, por la misma institución, muestran que la cifra fue en aumento. En 2009-2010 se contabilizaron 401 mujeres y 2 648 hombres y, posteriormente, en 2010-2011 se detectaron 508 mujeres y 3,283 hombres. Mientras que para el cuarto censo de 2011-2012 los números fueron: 4 014 personas, de las cuales 3 467 fueron hombres y 547 mujeres.

La metodología para estos cuatro censos encabezados por el IASIS se denomina “punto en el tiempo”, en donde el conteo se realizó en una fecha fijada previamente encuestando a quienes se encuentren bajo las características que identifican a las personas en situación de calle:

Carecen de alojamiento fijo, regular y adecuado para pasar la noche, y encuentran residencia nocturna en albergues dirigidos por entidades públicas o privadas que brindan albergue temporal. [Además,] se entenderá por persona en situación de calle a toda persona que se halle pernoctando en lugares públicos o privados, sin contar con infraestructura tal que pueda ser caracterizada como vivienda, aunque la misma sea precaria. (IASIS, 2012)

El último censo realizado en la Ciudad de México, *Diagnóstico Situacional de las Poblaciones Callejeras 2017-2018* mostró que el total de personas integrantes de las poblaciones callejeras ascendió a 6 754 de las cuales 4 354 se encontraron en el espacio público y 2 400 en albergues públicos y privados; donde el 87.27% correspondió al género masculino y el 12.73% al género femenino. En cuanto a las edades de esta población las mujeres de 18 a 59 años representaron el 11.29 % del universo. La alcaldía Cuauhtémoc concentró a 1 303 personas.

Las representaciones numéricas de las personas integrantes de las poblaciones callejeras en otras ciudades del país tienen un recorrido similar, donde se privilegió hacia finales del siglo XX

el conteo de los niños, niñas y adolescentes omitiendo las cifras de los adultos y adultos mayores. En **Guadalajara**, el último censo que incluyó a los adultos en sus reflexiones se fundamentó en la metodología de barrido, es decir, observar en intervalos regulares a un grupo de personas, registrando las características de éstas en un momento determinado para contarlas como población callejera. Los criterios para considerar a alguien susceptible de ser entrevistado fueron:

(a) Evidentes características de indigencia [comprendida dentro de esta categoría a las personas con un ingreso insuficiente para cubrir la canasta básica de alimentos, vestimenta, etc.], (b) Personas encontradas en la calle sin realizar actividad específica y (c) Personas que se encuentran realizando alguna actividad de supervivencia en calles o cruceros de manera informal (MAMA, 2019: 12)

En este documento se abordó la zona centro de la ciudad donde registraron 1 082 personas de las cuales 258 son mujeres, lo que representa el (23.7%) y 824 hombres, es decir, el 76.3%. Sin embargo, las condiciones de vida y el número de personas que habitan las calles se conocen solo a través de las organizaciones de la sociedad civil pues no existe ningún diagnóstico oficial, solo se cuenta con información del aumento de los usuarios en la Casa Albergue Permanente de Desarrollo Integral para Personas en Situación de Indigencia (Cadipsi), dependiente del DIF municipal, que se señala un incremento entre 2011 y 2012 del 40% (MAMA, 2019: 8-15).

Para la ciudad de **Tijuana** la cifra no es clara, un estudio sobre El Bordo (zona de extrema pobreza donde habitan algunas personas que integran las poblaciones callejeras) elaborado por El Colegio de la Frontera Norte (Colef), arroja 401 personas solo en dicha zona. Las autoras explican su metodología: “Para la realización de la estimación del número de habitantes se realizaron seis recorridos para contabilizar viviendas y número de habitantes por vivienda, así como tres recorridos por áreas donde duermen a lo largo del Bordo. Todos ellos, a la misma hora, en distintos días, durante un mes.” (Velasco y Albicker, 2013: 3). Pese a la interesante reflexión con base en dicho estudio, pues arroja información novedosa, no se cuenta con un censo sobre cuántas personas

integrantes de las poblaciones callejeras habitan Tijuana, el fenómeno es abordado fragmentariamente por asociaciones civiles e institutos de investigación, sin haber esfuerzos similares por los organismos gubernamentales, lo que impide observar y analizar la amplia gama de características sociodemográficas de esta poblaciones así como sus trayectorias, experiencias y necesidades. Ciertamente un censo no agotaría todos los atributos y a todas las personas por la complejidad metodológica que representa una población de elevada movilidad, sin embargo, de contar con un estimado del número de personas así como de sus relatos sobre la vida en la calle, podría proporcionar mejores herramientas para poder abordar las experiencias y necesidades de las personas que integran las poblaciones callejeras.

Por otro lado, en la ciudad de **Puebla** se realizó en 2013 una encuesta a “personas en situación de calle” por el Cabildo de la localidad junto con el Centro de Investigación sobre Opinión Pública (CISO) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Dicha encuesta ubicó a 616 personas, de las cuales 65.4% fueron hombres y 34.6%, mujeres, donde el 85.5% correspondía a la población adulta y el 77% tenía como medio de subsistencia el comercio informal. Además, 22.4% indicó haber sufrido algún tipo de maltrato o explotación, mientras que el 36.7% desconoce las entidades públicas o privadas a las cuales acudir para recibir algún tipo de apoyo o acompañamiento.

En cuanto a los censos y encuestas en la ciudad de **Acapulco**, el DIF local reconoce que no cuentan con una clara cifra de las personas que habitan las calles en la ciudad. Pese a no contar con reportes oficiales sobre estas poblaciones en específico, se hallan investigaciones realizadas por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) y por la CNDH. En éstas, los resultados arrojan que el principal lugar donde las mujeres encuentran discriminación es en la calle (45.3%), mientras que 56.4% de las mujeres señalan que el espacio donde se ejerce la violencia es en la calle en su forma física o psicológica por los ciudadanos. Además, se considera que a 4.7% de las mujeres

no se les respetan los derechos humanos por pertenecer a lo que se categorizó como *adictas a las drogas/ personas en situación de calle y trabajadoras sexuales*. (Donoso, 2016)

En las ciudades recorridas no se cuenta con suficientes herramientas metodológicas para abordar la diversidad de las poblaciones callejeras. En su lugar, observamos información escasa, dispersa y cargada de estereotipos en los medios de comunicación que con diferentes agendas contemplan en sus redacciones la vida de estas personas. Esta cuestión no es menor, las representaciones sociales configuradas a través de los medios de comunicación tienen una repercusión en las formas en que tanto la sociedad como las autoridades abordan a estos sujetos; es decir, desde una agenda de limpieza social: como delinquentes, como enfermos, como desechables. También en el Informe especial. *Situación de los derechos humanos de las poblaciones callejeras*, se ha señalado el severo impacto de estas formas de interpretar e intervenir:

Mientras que las dictaduras militares latinoamericanas buscaban la eliminación física de aquellas personas que incurrieran en comportamientos contrarios al orden social existente o de poblaciones que vivían con el estigma de ser consideradas personas de segunda categoría –personas indígenas o niñas y niños en situación de calle–, las nuevas formas de la limpieza social se auxilian del desalojo forzoso, el reordenamiento urbano y el uso de la fuerza pública para expulsar a estos grupos de ciertos territorios o internarlos contra su voluntad en instituciones para el control de adicciones. (CDHDF, 2014: 112)

Justamente allí radica la importancia de desarrollar un conteo que no solo incluya la abstracción de lo que es una persona a través de un número, sino que analice las particularidades sociales, culturales, políticas y económicas; así como las expectativas de vida y problemáticas a nivel individual pero también como comunidad o grupo. Es fundamental entender al sujeto como un ente biopsicosocial para evitar simples reduccionismos y poder abordarles desde la multiplicidad de relaciones que configuran su existencia.

A este respecto, es necesario continuar con las redes de trabajo entre instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil para comprender la complejidad del fenómeno con base en el aporte de censos cada vez más sofisticados que incluyan metodologías mixtas de recopilación y análisis de datos. De seguir con los conteos puramente cuantitativos se corre el riesgo de simplificar la problemática de la vida en la calle, omitiendo otros fenómenos álgidos que transforman la experiencia de las poblaciones callejeras y que se han evidenciado a través de observaciones recientes, como lo es el papel que juega la delincuencia organizada (considerando las redes tráfico de personas y narcomenudeo) o el abuso en el consumo de sustancias (alcohol, diversos estimulantes, solventes), fenómenos que inciden diferencialmente por zona geográfica, edades y género, entre otras configuraciones políticas, sociales y económicas.

Género y calle

Nuestro país ha firmado y ratificado diversas convenciones y tratados internacionales que lo obligan a llevar a cabo acciones para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. La Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 eleva a rango constitucional los Derechos Humanos que se derivan de los tratados internacionales suscritos por México, lo que genera obligaciones a las autoridades de todos los niveles y órdenes de gobierno para garantizar su cumplimiento.

Entre ellos encontramos:

- La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) representa para el Estado Mexicano un compromiso para desarrollar políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres así como para prevenir y eliminar la discriminación y violencia hacia mujeres y niñas.
- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC)

Al garantizar sus derechos se superaría un modelo meramente asistencialista, tutelar y de institucionalización de las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras pues se les reconocería como sujetos plenos de derecho y como agentes sociales que cuentan con la capacidad de construir y reconstruir su mundo.

Espacio público

Soporte de las relaciones económicas, políticas y sociales, en el espacio público confluyen múltiples y diversos intereses, experiencias y escenarios. Es también lugar de disputa por los sentidos: sobre qué o quiénes pueden ser legibles y legítimos o qué prácticas deben realizarse en él y de qué maneras. Como señala Amalia Signorelli: “en cada época histórica, si la ciudad representa una oportunidad, lo es para unos más que para otros; si representa un riesgo, tal riesgo es para algunos marginal, para otros amenazador” (citada por Duhau y Giglia, 2008: 32).

Es en este escenario que se observa el papel que representan las mujeres que habitan las calles, y las violencias que experimentan, las estrategias que despliegan y las utopías que diseñan. Desafortunadamente al hallarse en el espacio público, bajo una economía y construcción de subjetividades neoliberal, androcéntrica y heteronormada, las mujeres en la calle son imaginadas también como propiedad pública. De allí que se enfrenten a las tensiones entre lo privado y lo público donde los agresores pueden ser transeúntes desconocidos, familiares, autoridades o personas del mismo grupo donde se insertan. Es decir, si bien es cierto que, en general, las poblaciones callejeras se encuentran en diversas situaciones de vulnerabilidad, conjuntos de personas dentro de estas poblaciones presentan un grado aun mayor no solo por pertenecer a estas poblaciones sino también porque esto les impacta de manera agravada. Dentro de estos subgrupos se observa a: mujeres, niños, niñas, adultos mayores y discapacitados.

Interseccionalidad

En el caso del presente informe esta conjunción de factores se comprende desde la noción de *interseccionalidad*. Dicho concepto ha transformado el pensamiento feminista desde que Kimberlé Crenshaw lo propusiera en 1989, puesto que ha permitido comprender la complejidad de las prácticas, discursos e instituciones que crean las desigualdades sociales. Los sistemas de exclusión incluirían entonces un cruce entre categorías estigmatizadoras que decantan en un diferencial respecto del acceso a servicios, representaciones sociales, etc. Este cruce se realiza con base en el género, la orientación sexual, la religión, estrato socioeconómico, edad, raza e incluso discapacidad, y no solo mantiene sino que refuerza las desigualdades que sufren las mujeres.

En el caso de las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras, es posible notar que se insertan en sus cuerpos construcciones sociales de los roles de género que les atribuyen labores como el trabajo doméstico o la crianza de los hijos y se espera que se desenvuelvan principalmente en espacios privados. Estas construcciones no solo incluyen ser interpretadas desde el exterior, sino también implican que las propias mujeres observen dichas labores y roles como naturales y sintiéndose responsables de llevarlas a cabo, de cumplir con las expectativas que sobre ellas se fijan.

Así, las mujeres que habitan las calles se enfrentan a la mirada de los otros, y asumen como su responsabilidad innata el cuidado de los hijos y el trabajo como fuente de ingreso familiar. No solo los estereotipos de género son los introyectados y aceptados sino también la discriminación por habitar las calles, estar en situación de pobreza, por su color de piel y por su edad.

Son signadas como “malas mujeres”: adictas empedernidas, no aptas para ser madres, irresponsables, promiscuas, ignorantes, peligrosas, criminales, incapaces de tomar decisiones, o bien que suelen tomar malas decisiones, de modo que esto se ve reflejado en el

discurso, representaciones y prácticas de buena parte de los sujetos que interactúan con ellas. El efecto de esto es pernicioso: incumplimiento por parte de los funcionarios públicos de las funciones que habrían de desempeñar para con ellas pues son interpretadas como una causa perdida, o bien, que merecen ser castigadas.

Maternajes diversos

Las mujeres se enfrentan en las distintas ciudades de México a intervenciones estatales que no adoptan las medidas especiales de protección creadas para garantizar su acceso a una vida libre de violencia, aun cuando parece que las autoridades tanto sanitarias (como los hospitales en los que estas mujeres dan a luz) como de desarrollo (como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia) intentan cubrir con sus funciones, realizan éstas a discreción, tal y como ha sido documentado por El Caracol A. C. en su *Diagnóstico sobre condiciones de vida de mujeres que viven en las calles de la CDMX* (2018), en donde se evidencian los altos grados de violencia que viven las mujeres a manos de autoridades de gobierno, familia, pareja, grupo y comunidad.

Al respecto, Nisaly Brito observó los efectos de las representaciones sociales de los servidores públicos en salud frente a las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras y encontró que:

Estas representaciones sociales negativas sostienen la idea de que el Estado mexicano no debe asumir responsabilidad con esta población; pues según los médicos, las hace “más conchudas”. Esta idea fortalece una vez más las acciones de indiferencia y desatención durante la consulta médica, pues ellos, como servidores públicos y empelados del Estado, colaboran para que el aparato estatal plasme su nula obligación con este segmento de la población. (Brito, 2012: 161)

El retiro de infantes, así como la detención de las madres, amenazas y violencia psicológica, se han vuelto práctica común bajo el supuesto de cumplir con sus funciones. Estas prácticas son realizadas por autoridades y encubren la discriminación y los estereotipos de género que subyacen a tales acciones, donde la mujer es entendida como apta si cubre una serie de requerimientos morales y económicos. Un modelo de madre se erige por encima de los múltiples maternajes posibles, siendo que las experiencias de las mujeres que viven en las calles no las descalifica automáticamente de ser un apoyo y un referente afectivo para sus hijos. Se debe por lo tanto considerar no solo el interés superior de la infancia sino el principio de unidad familiar y el de excepcionalidad de la detención, para poder garantizar los derechos tanto de las mujeres como de los niños.

Se tiene que garantizar, antes de determinar la separación de la madre, la implementación de todos los mecanismos y esfuerzos posibles para asistir a la familia en un adecuado cuidado, protección y crianza del niño o niña. Donde la separación sea el último recurso y se considere de forma temporal y excepcional.

Apuntes metodológicos

Metodología

Para desarrollar el presente “Diagnóstico sobre las condiciones de vida, el ejercicio de los derechos humanos y las políticas públicas disponibles para mujeres y niñas que constituyen población” se plantearon los siguientes objetivos:

Objetivo general

Conocer las problemáticas específicas que enfrentan las mujeres que viven en calle.

Objetivos específicos

- a. Mostrar a partir de evidencia empírica las principales violaciones a derechos humanos que enfrentan las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras.
- b. Identificar los tipos de obstáculos que enfrentan las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras para acceder a programas y políticas públicas que les permitirían mejorar sus condiciones de vida.
- c. Elaborar una serie de recomendaciones que faciliten la construcción y mejora de programas y políticas públicas de atención a mujeres de poblaciones callejeras susceptibles de ser atendidas por el Estado mexicano.

Para lograr los objetivos la metodología empleada fue de corte cuantitativo/cualitativo, consistiendo en un análisis comparativo a partir de la información documental y la evidencia empírica que se recopiló. En específico, se realizó un ejercicio de contraste con un análisis de los programas y políticas públicas enfocadas en la atención de mujeres y testimonios de mujeres que viven en calle cinco ciudades del país: Acapulco, Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Tijuana.

Las ciudades fueron seleccionadas con base en 3 criterios:

- a. Antecedentes de limpieza social en poblaciones callejeras.
- b. Existencia de mujeres integrantes de las poblaciones callejeras en el municipio.
- c. Contrapartes de la Sociedad Civil que colaboran en la defensoría de derechos de las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras.

El proceso de elaboración del estudio tuvo cinco etapas en la recopilación y análisis de la información: 1) Recopilación de la información estadística, documental y normativa disponible/vigente sobre las poblaciones callejeras; 2) Construcción y aplicación de Encuesta para mujeres en situación de calle; 3) Análisis de la información documental obtenida en los portales de transparencia; 4) Análisis de la información recopilada de la Encuesta para mujeres en situación de calle y 5) Propuestas y recomendaciones de política pública (Ver Figura 0).

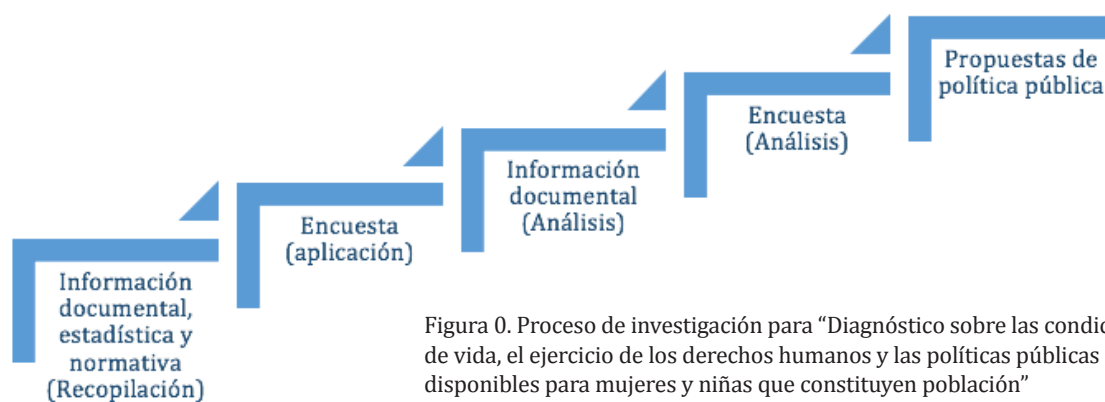


Figura 0. Proceso de investigación para “Diagnóstico sobre las condiciones de vida, el ejercicio de los derechos humanos y las políticas públicas disponibles para mujeres y niñas que constituyen población”

En la primera etapa, se recopiló toda la información estadística y documental, así como el marco normativo vigente sobre el fenómeno de las poblaciones callejeras a nivel internacional, nacional y local. Se realizó un proceso de depuración de dicha información, dejando a disposición aquella que contenga un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Para la segunda fase se desarrolló una herramienta metodológica de encuesta. En cada una de las ciudades fue aplicada la encuesta con la finalidad de conocer las condiciones de vida de mujeres que vive en las calles. Para este punto cabe aclarar que no se cuentan con datos demográficos sobre las poblaciones callejeras, por lo cual es complejo realizar un estudio muestra o censal, de tal modo que el levantamiento de datos fue aleatorio a partir de recorridos en calle en diferentes puntos de las ciudades elegidas. La aplicación de la encuesta cuenta con la experiencia de 15 años de la organización no gubernamental El Caracol A.C. levantando encuestas con dichas poblaciones.

Posteriormente se comenzó el análisis de la información otorgada por los portales de transparencia para identificar el nivel de viabilidad de las políticas públicas y programas de gobierno que existen para atender a las mujeres que viven en calle identificar aquellos derechos donde no se cuente con algún mecanismo para facilitar su garantía. En principio, se realizó un diagnóstico de políticas existentes de atención y servicios. Para ello, se emplearon las plataformas de transparencia lo que permitió recabar información sobre las políticas públicas y programas de gobierno de los estados y ciudades elegidas para este estudio.

Dichas solicitudes pretendieron conocer la existencia de políticas, sus reglas de operación e información cuantitativa para determinar si dentro de su cobertura se han atendido a mujeres que viven en las calles. Este análisis cuantitativo/cualitativo buscó mostrar la presencia o ausencia de atención que, por ley y facultades, tiene el gobierno ante este fenómeno social -tanto a nivel nacional como local- y así plantear recomendaciones de política pública.

En el siguiente momento se realizó un análisis de las encuestas aplicadas y se contrastaron con la información pública obtenida para conocer si hay concordancia entre las propuestas gubernamentales y el efectivo ejercicio de los derechos de las mujeres que viven en las calles. Al respecto, tras la aplicación de este instrumento se consideró pertinente complementar la información de las encuestas con el contexto sobre las características de cada ciudad en la que se aplicó esta herramienta.

Finalmente, se construyeron propuestas y recomendaciones para mejorar la atención estatal hacia mujeres integrantes de las poblaciones callejeras y generar el primer diagnóstico a nivel nacional sobre este fenómeno social.

De esta forma, el presente estudio servirá para la identificación de los retos del Estado Mexicano en el cumplimiento de su deber de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas viviendo en las calles, poniendo énfasis en que las condiciones de pobreza, inequidad social y violencia contra las mujeres son factores que interfieren con el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

Contexto de las ciudades

En la experiencia de aplicación de las encuestas se hizo evidente que las mujeres suelen acceder con mayor facilidad a las peticiones de información sobre su experiencia cotidiana si una organización (especialmente no gubernamental) previamente se ha acercado a ella para colaborar pues se ha generado empatía y ellas mismas han podido observar que hay transformaciones en sus condiciones materiales de existencia además del establecimiento de vínculos afectivos y nuevas redes de apoyo.

Esto sucedió en las ciudades de Tijuana, Ciudad de México, Guadalajara. En el caso de Acapulco la vinculación primaria se estableció a través del DIF municipal. Mientras que en Puebla se pudo notar la ausencia de trabajo gubernamental y no gubernamental con las mujeres y niñas que viven en las calles.

La percepción en torno a su condición se transforma también cuando una organización de la sociedad civil o gubernamental interviene, pues, al sensibilizar a la población sobre sus derechos, se les informa y forma en salud, muestra otras opciones de acceder a servicios pero no solo esto, sino también a otras formas de vida, lo cual decanta en el desarrollo de conciencia social a la vez que se acrecienta la perspectiva sobre las formas de participación social.

De allí que sea necesario repensar las reformas del Estado donde el eje de análisis se coloque en el encuentro entre las ONGs y gobierno donde se ubiquen compartiendo terrenos comunes de acción y puedan colaborar fomentando la participación social y la garantía en el ejercicio de los derechos humanos de las poblaciones vulnerables.

Por otro lado, al ser una población con dinámicas de movilidad dentro de la ciudad no claramente discernibles a primera vista, e incluso al conocer sus pautas de movilidad puede no hallárseles en los puntos de trabajo y pernocta habituales, pues una de sus características es la contingencia.

En los casos de las ciudades como Acapulco, Guadalajara y Puebla se observa un reducido número de mujeres en la vía pública y sorprendentemente ninguna niña. Se puede intuir que al ser ciudades con una actividad económica enfocada en el sector turístico sus gobiernos históricamente se hayan enfocado en el mantenimiento de las principales avenidas, incluyendo como parte de esto operativos de limpieza social con una aplicación reforzada por la legislación en lo tocante a la cultura cívica y los programas de renovación de los espacios públicos.

A continuación se presentan los contextos específicos de cada ciudad para poder mostrar un panorama general de las características (sociales y económicas) en las que se desarrollan las vidas de estas mujeres en los estados que habitan. Se aborda el papel de la discriminación, pobreza y los eventos de limpieza social registrados. Considerando que la cantidad de personas en México en situación de pobreza para 2018 representó el 41.9% de la población del territorio nacional; cuyos indicadores no solamente incluyeron pobreza por ingreso sino también por grado de rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, acceso a la alimentación, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos de vivienda, grado de cohesión social, grado de accesibilidad a carretera pavimentada. (CONEVAL, 2018)

Ciudad de México

Limpieza social. Al tener un gobierno centralizado, la capital de la República Mexicana cuenta con una mayor oferta de servicios públicos que otras ciudades del país. No solo ello, sino que socioculturalmente se asume como una ciudad cosmopolita y abierta a la diversidad, evidenciada a través de sus políticas públicas progresistas. Sin embargo, es un microcosmos que representa al país en su totalidad donde se pueden observar problemas tales como la pobreza o la discriminación que se mantienen como tópicos importantes en la agenda pública local. La diversidad sociocultural se manifiesta también en las poblaciones callejeras, pues estas se componen de diferentes rangos etarios, orientaciones sexuales, discapacidades, entre otras.

Por otro lado, las prácticas de “limpieza social” en la ciudad tienen larga data, al menos se tiene registro que:

En 1998, trabajadores del entonces Departamento del Distrito Federal soldaron las tapaderas de las alcantarillas de La Alameda con 17 niños de la calle adentro; en julio de 2002, la Arquidiócesis de México y el gobierno capitalino habrían desalojado y encerrado en una bodega durante dos semanas a unos 250 indigentes para evitar que la gente los viera durante la visita del Papa Juan Pablo II. [...] De 2009 a 2012, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) documentó 65 quejas por violaciones a los derechos humanos de las poblaciones en situación de calle. En el mismo lapso emitió 6 Recomendaciones por hechos relacionados con abuso policial, discriminación, maltrato, faltas al deber de cuidado y trata de personas con fines laborales. (Sin embargo, 2013)

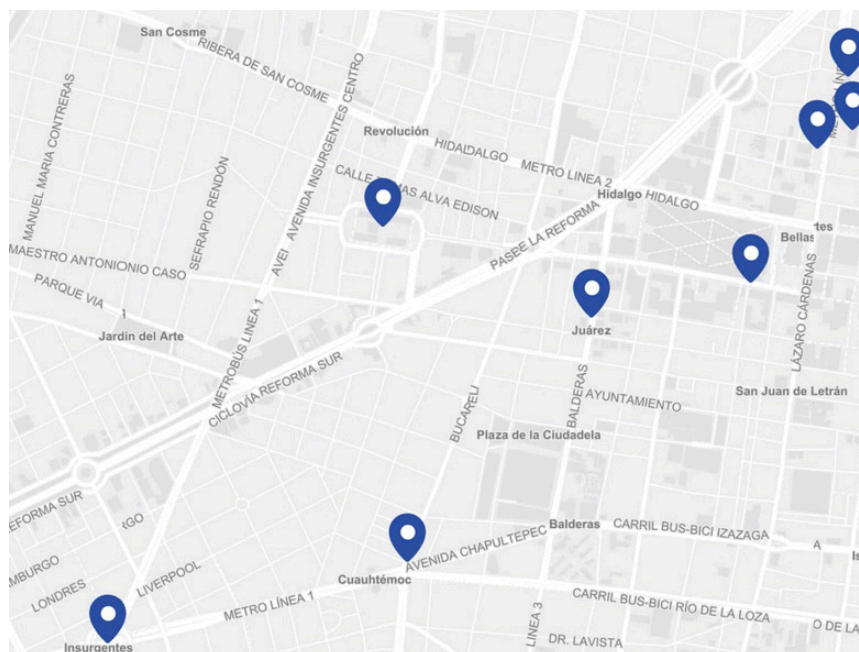
Recientemente, desde el año 2012 se han realizado diversas estrategias para retirar a las poblaciones callejeras de los espacios públicos ya sea debido al Programa de Rescate de Espacios Públicos, de la visita del Papa o bien por la aplicación discrecional de la Ley de Cultura Cívica, negando una serie de derechos entre ellos el derecho a la ciudad.

Discriminación. Mientras que el 23.7% de la población de 18 años y más declaró haber sufrido algún tipo de discriminación (ENADIS, 2017).

Pobreza. Finalmente, en la dimensión de la pobreza, la Ciudad de México tiene un 27% de mujeres en situación de calle esto representa a 1 270 644 mujeres, aunque las acciones estatales para atender a esta población manifestadas a través de los programas sociales solo representaron un 5.9% de total (CONEVAL, 2018)

Mapa: En el Mapa 1 se presentan los puntos de la Alcaldía Cuauhtémoc que se recorrieron caminando para poder encontrar mujeres integrantes de las poblaciones callejeras.

Mapa 1 Puntos visitados en CDMX



Fuente: Elaboración propia con datos de geolocalización

Guadalajara

Pobreza. El 32.6 % de las mujeres se encuentran en situación de pobreza en la entidad, lo cual implica que 1 348 068 mujeres viven en pobreza, pese a esta cifra el gobierno emplea solo un 1.5% de los programas sociales a este fenómeno. (CONEVAL, 2018)

Discriminación. En el estado de Jalisco habitan 7 844 830 de personas, mientras que específicamente en la ciudad de Guadalajara 1 460 148. De total de habitantes, el 21.3% (ENADIS, 2017) consideran haber sufrido discriminación de algún tipo.

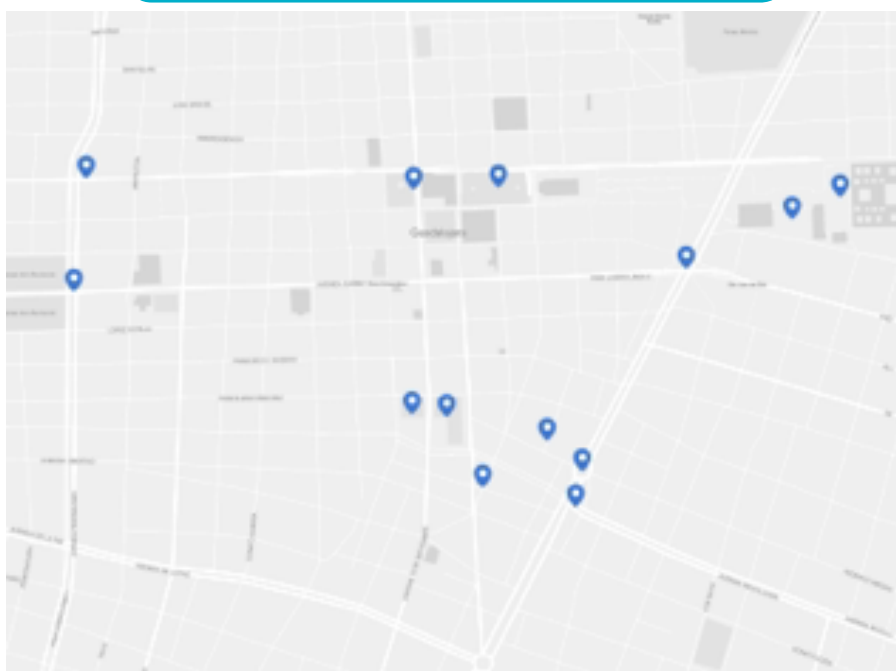
Limpieza social. Los registros de “limpieza social” en este municipio muestran que en 2011:

Con motivo de la celebración de los Juegos Panamericanos, organizaciones civiles como el Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados (Mama, AC) denunciaron un plan de Reordenamiento Humano para “retirar” a las poblaciones callejeras del primer cuadro de Guadalajara previo y durante la realización de la justa deportiva. (Sin embargo, 2013)

Mapa. En el Mapa 2 se presentan los puntos recorridos para ubicar a las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras. Cabe destacar que a través del recorrido se pudo observar que la ciudad se encuentra en una transformación urbana que desplaza hacia las orillas a las personas que habitan las calles, algunas personas buscan refugio en casas abandonadas en el colindante municipio de Tlajomulco de Zúñiga que se encuentra aproximadamente a hora y media del centro de Guadalajara, y las estrategias de supervivencia incluyen viajar diariamente al centro para trabajar y regresar por las noches al municipio colindante para pernoctar. La población callejera que permanece en la ciudad suele ser reclutada por el narcotráfico a través de la extorsión o el secuestro.

No se cuenta con Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajen particularmente con las mujeres que integran las poblaciones callejeras y los programas sociales se enfocan en las infancias y las comunidades indígenas.

Mapa 2 Puntos visitados en Guadalajara



Fuente: Elaboración propia con datos de geolocalización

Puebla

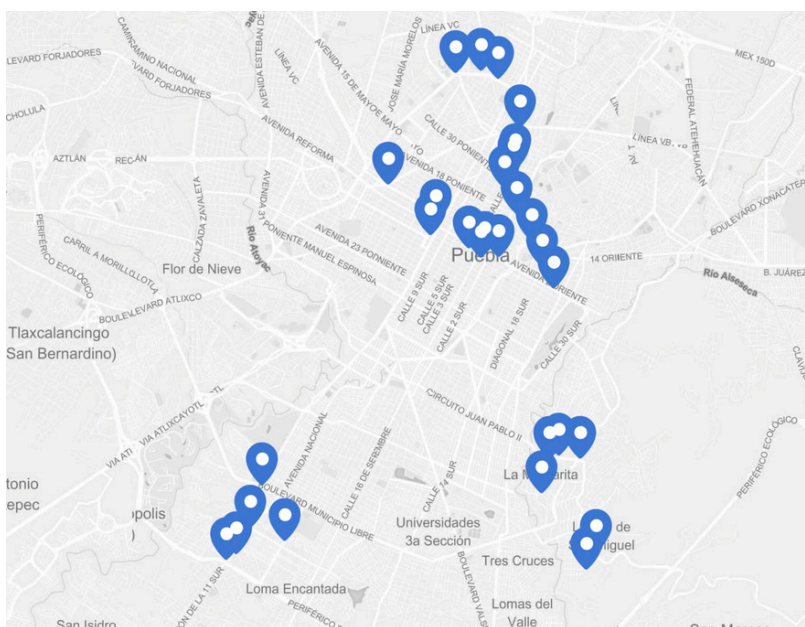
Discriminación. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 una de las 5 entidades con más alta prevalencia de discriminación es el estado de Puebla, aquí 28.4% de personas mayores de 18 años aseguraron haber sufrido discriminación por diversos motivos, entre los que se encuentran la apariencia (forma de vestir o arreglo personal, peso o estatura y tono de piel), a nivel federal la apariencia fue el principal motivo de discriminación siendo las mujeres discriminadas por esto un 56.5% de las veces, en comparación con los hombres quienes manifestaron un 51.3%. Es decir, las mujeres suelen tener una relación diferencial con la discriminación en comparación con sus pares varones, y en el estado que se presenta esto es pronunciado.

Limpieza social: La limpieza social en esta ciudad se manifiesta a través de los programas sociales de mejoramiento del espacio y de promoción turística, las autoridades retiran de los espacios a las personas integrantes de la población callejera aunque eventualmente regresan a pernoctar principalmente a las afueras de la catedral.

Pobreza: En la entidad se manifiesta una cifra elevada de mujeres en situación de pobreza: 1 958 000, lo cual representa el 59.7% de la población femenina. Del total de programas sociales destinados a la población de la entidad, 11.1% atienden a las mujeres. (CONEVAL, 2018)

Mapa. Se presenta en el Mapa 3 el recorrido realizado para ubicar a las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras, cabe destacar que algunas no se asumen como tales frente a las peticiones de entrevista en tanto han sido violentados por los funcionarios públicos, y debido a que también son reclutados o secuestrados por el crimen organizado, hubo zonas donde varios informantes habían referido que se halla dicha población pero dichas zonas tenían un alto nivel de peligrosidad al registrar asesinatos y no pudieron ser recorridas.

Mapa 3 Puntos visitados en Puebla



Fuente: Elaboración propia con datos de geolocalización

Tijuana

Limpieza social. El esfuerzo en Tijuana, como en las otras ciudades abordadas por volverla una ciudad turística suele ir acompañado de las mismas estrategias de limpieza social, de modo que se borre del espacio público de todo aquel sujeto que resulte indeseable aplicando desigualmente el reglamento sobre la vía pública del Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Tijuana, además de implementar programas de rescate de los espacios públicos que incluyen y en sus casos más extremos empleando los centros de rehabilitación de las adicciones para eliminar a los jóvenes, financiando escuadrones de la muerte (Cajas, 2012)

Discriminación. Personas que han sufrido discriminación 16.5% (ENADIS, 2017)

Pobreza. En la entidad se manifiestan 413 267 mujeres en situación de pobreza lo cual representa el 23.2% de la población femenina. Del total de programas sociales destinados a la población de la entidad 13% atienden a mujeres. (CONEVAL, 2018)

Mapa. En el Mapa 4 se presentan los puntos recorridos en Tijuana donde la población callejera habita históricamente. Entre las problemáticas características de la ciudad encontramos un alto número de migrantes nacionales e internacionales y connacionales deportados, un abuso en las sustancias estimulantes, y un aumento en la prevalencia del VIH, así como altos niveles de violencia, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal señala que 2018 se registraron 2,640 homicidios y una tasa de 138.26 muertes por cada 100,000 habitantes. (CCSPJP, 2018)

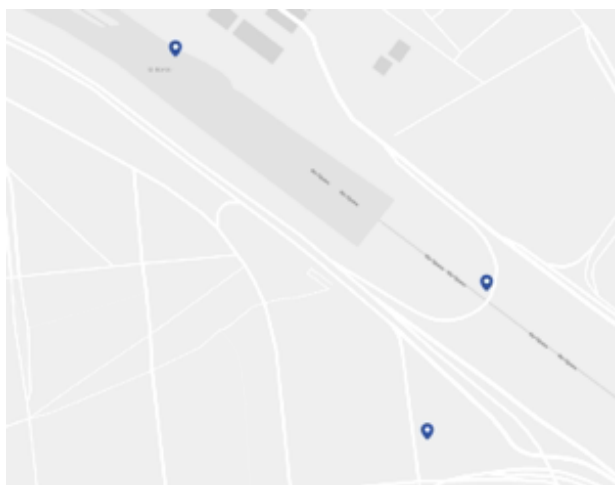
Una de las características de la población que habita las calles en Tijuana es, al ser una ciudad fronteriza, contar con deportados connacionales que esperaban regresar en algún momento a Estados Unidos, migrantes centroamericanos y mexicanos que esperan poder cruzar la frontera norte pero que al no contar con los recursos económicos ni redes de apoyo se quedan las

calles, específicamente se concentran en una zona denominada “El Bordo” donde se pueden encontrar tiendas de campaña y otras estrategias para habitar las calles.

Otra cuestión que particulariza las condiciones de vida es que hay un consumo de sustancias marcado:

Los sentimientos de dolor por la separación de sus familias al haber sido deportados a México, así como la experiencia de exclusión y exilio ante las condiciones de vida actuales, son el principio de una precarización que se manifiesta, entre otros factores, en el consumo de drogas. Es así que [...]el 71% [de la población encuestada] expresó haber consumido en algún momento de su vida heroína, cristal, alcohol y/o marihuana; de esta población, el 69% es consumidor activo y el 20% comenzó a utilizar drogas en el Bordo. (Velasco y Albicker, 2013: pp. 10-11)

Mapa 4 Puntos visitados en Tijuana



Fuente: Elaboración propia con datos de geolocalización

Acapulco

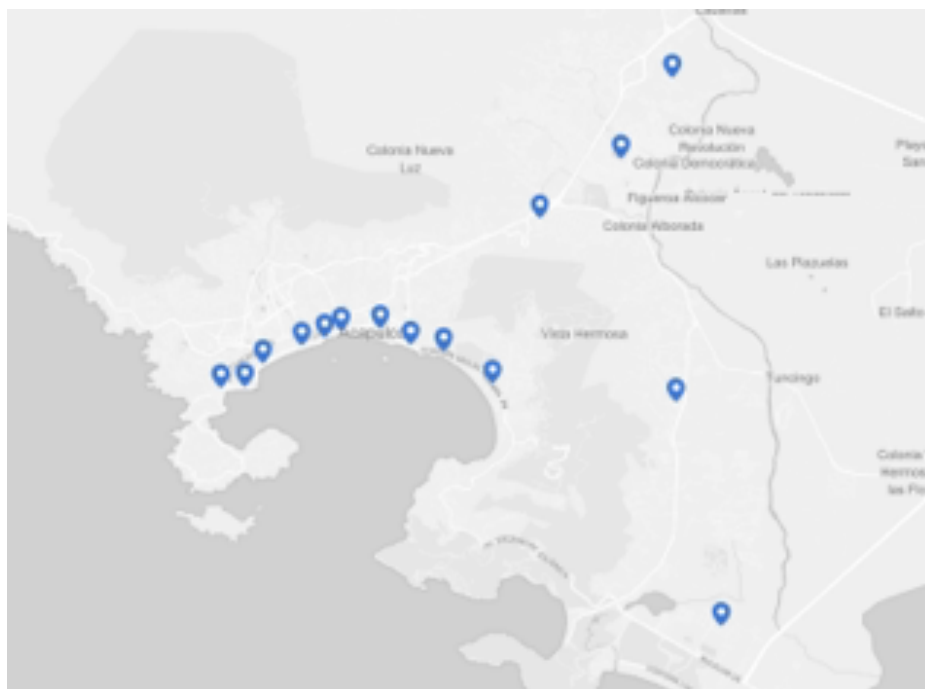
Discriminación. Mientras que en el total del territorio nacional las personas que han sufrido discriminación 25.1% de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2017.

Pobreza. Del total de la población de mujeres en la entidad, 64.5 % se encuentran en situación de pobreza, lo que equivale a 1 212 200 mujeres, sin embargo las acciones estatales para atender a

esta población manifestadas a través de los programas sociales solo representaron un 6% de total (CONEVAL, 2018)

Limpieza social. Aquí no solo la dura implementación de los programas turísticos y de mejora de los espacios públicos ha desaojado a las poblaciones callejeras sino también, “al ser una playa turística ha involucrado a grupos civiles en la identificación y agresión a poblaciones callejeras, a través de la llamada ‘patrulla ciudadana’” (Concha, 2012)

Mapa 5 Puntos visitados en Acapulco



Fuente: Elaboración propia con datos de geolocalización

Derechos

Derecho a la identidad legal

Desde niña, Martha Verónica ha vivido en la Plaza de la Soledad, frente a la Parroquia de la Santa Cruz, junto con sus padres. A sus 15 años, a la familia se sumó Aurelio, su hijo, quien ya ha cumplido cuatro años. Martha trabaja por las tardes recolectando basura y por las mañanas acude al INEA en donde está a punto de terminar la primaria, ella quiere seguir estudiando y que su hijo también lo haga, y así cambiar sus condiciones de vida. Con esa intención, Martha tuvo que emprender un intrincado camino durante al menos los últimos dos años. En ese entonces, Martha y Aurelio no contaban con acta de nacimiento, ni con algún otro documento que demostrara su identidad legal, pero ella se propuso obtenerlos a como diera lugar pues intuía que el primer paso para transformar su vida era inscribirse a la escuela. El proceso para tramitar sus documentos no fue sencillo, ni ágil, ni gratuito.

Al intentar inscribirse a la escuela, una persona le ofreció acompañarla a Santo Domingo para conseguir su acta de nacimiento, solo tenía que hacer dos cosas: decidir los datos que quería que aparecieran en ella y pagar mil pesos, Martha aceptó y en un par de horas obtuvo el primer documento con su nombre, que comprobaba su identidad. Así fue como, a partir de esos datos y documentos, pudo tramitar su certificado de estudios y boleta de calificaciones. Sin embargo, ni su comprobante de identidad ni el de estudios eran legales.

Al emprender de nuevo el proceso para tramitar sus documentos de identidad Martha conoció a Ofelia, la trabajadora social de la escuela nocturna a la que acudía. Ofelia decidió acompañarla en el proceso e investigó los requisitos para realizar un registro extemporáneo en la Ciudad de México. Esto implicó visitar al menos tres espacios diferentes: el registro civil, el IASIS y un ministerio público, e intentar reunir un cúmulo de documentos inexistentes y emprender cada vez más trámites. No sólo se trataba de conseguir documentos que comprobaran su identidad —fe

de bautizo, carné de citas, boletas escolares, actas de nacimiento de madre y padre, identificaciones, etcétera— sino acudir a diferentes espacios para hacer los trámites necesarios.

El proceso se tornó extenuante e infructuoso tras seis meses de investigación y visitas a espacios de gobierno. Entonces Ofelia leyó una noticia que hablaba del derecho a la identidad de las poblaciones callejeras y mencionaba una organización de la sociedad civil. Con el acompañamiento del Caracol, primero acudieron al centro de salud para abrir un expediente y solicitar una hoja de gratuidad con su nombre y edad exactos, enseguida a la delegación para tramitar una hoja de residencia, después al Registro Civil para solicitar una constancia de no registro, posteriormente a la agencia del Ministerio Público para realizar una denuncia de hechos en donde se manifestara que en ningún momento había sido registrada y que no contaba con su acta de nacimiento y finalmente regresaron al Registro Civil con todos los requisitos.

Después de más de tres meses de proceso, y una inversión de casi dos mil pesos, en abril del 2019, Martha finalmente obtuvo su acta de nacimiento. La emoción fue inmensa. No se trataba de un papel, con esa acta de nacimiento ahora podría acceder a otros derechos: tramitar su INE, registrar a su hijo, ingresar a la escuela, conseguir un empleo formal y afiliarse al seguro popular para atender su salud y la de su hijo. Actualmente, Martha cuenta con todos sus documentos de identidad, está por ingresar a la secundaria abierta y ha concluido el registro de su hijo quién también está en proceso de entrar a preescolar.



Marco normativo

Comúnmente reconocido como un derecho llave, la identidad legal incluso es concebido como “el derecho a tener derechos”. Sin embargo, ante las constantes y sistemáticas violaciones a diversos derechos que experimentan las mujeres que integran a las poblaciones callejeras, contar con documentos de identidad pareciera menor. Sin embargo, la falta de reconocimiento de la personalidad jurídica y la titularidad de derechos es una de las problemáticas transversales que enfrentan hombres y mujeres que integran a las poblaciones callejeras y que les afecta de formas diferenciadas. Así, los límites en la garantía de la identidad legal, como derecho habilitador de otros, condena a un espiral descendente de inequidad e injusticia.

Para convertirse en una realidad palpable en la vida cotidiana, el derecho a la identidad ha transitado desde la enunciación como una cualidad irreductible del ser humano hasta ser plasmado en la normatividad internacional y local, para finalmente instalarse en las agendas internacionales y gubernamentales como tema de atención prioritaria. Dicho lo anterior, a continuación, se lista y describe el marco jurídico internacional que reconoce y garantiza el ejercicio del derecho a la identidad en sus variadas derivaciones:

- Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 6, 12, 15, 16, 18, 19, 20 y 21);
- Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (artículos 12, 18.1, 19.2, 24.2, 24.3 y 25);
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 15);
- Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 3, 11.1, 13.1, 17, 18, 20 y 23);

- Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 5, 7, 8, 12, 13, 14, 16 y 17);
- Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes (artículos 14, 15, 17, 18, 19, 20 y 21);
- Protocolo de San Salvador (artículos 15 y 16);
- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículos 7, 8, 9, 14 y 15);
- Convención de Belém do Pará (artículo 4, incisos e, h, i y j);
- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 29);
- Carta Democrática Interamericana (artículo 6);
- Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (artículos 1, 2 y 3);
- Observaciones Generales números 16. Derecho a la privacidad, artículo 17 (párrs. 1, 3 y 4), 17. Derechos del niño, artículo 24 (párrs. 7 y 8); 19. Derecho a la Familia, artículo 23 (párrs. 3 y 5 y 9); 25. Participación en asuntos públicos y el derecho al voto, artículo 25 (párrs. 3, 4, 5, 6, 8, 11 y 12), 34. Libertad de opinión y libertad de expresión, artículo 19 (párrs. 2, 4, 7 y 19);
- Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión (principios 1 y 2);
- y Resolución 59 (1) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

A partir del conocimiento de los retos multidimensionales que se enfrentan en la región, los Estados deberán tomar las medidas legislativas, administrativas y operativas pertinentes con la finalidad de abarcar a la totalidad de la población. Dichos instrumentos se distinguen por contemplar los siguientes derechos y reforzar el marco normativo que ampara su protección y garantía:

Tabla 1.1 Obligaciones y normatividad en materia de identidad

Derecho humano	Obligaciones reforzadas en el marco del principio de igualdad y no discriminación	Elementos normativos/obligaciones
A la identidad y al nombre	<ul style="list-style-type: none"> a) Facilitar la obtención de documentos de identidad. b) Realizar campañas permanentes de registro. c) Respetar y reconocer de manera legal, a partir de un proceso accesible, el establecimiento de lazos familiares entre integrantes de las poblaciones callejeras (filiación y parentesco). 	<ul style="list-style-type: none"> a) Establecimiento de mecanismos o procedimientos accesibles que faciliten a las poblaciones callejeras obtener documentos de identidad; b) Realización de campañas de registro dirigidas a las poblaciones callejeras y mecanismos para el reconocimiento de lazos familiares entre sus integrantes.
Al reconocimiento de la personalidad jurídica	<ul style="list-style-type: none"> a) Eliminar aquellas prácticas que invisibilicen a las poblaciones y les obstaculicen ejercer sus derechos y contraer obligaciones voluntarias. b) Reconocer a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para su ejercicio. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Realizar campañas de sensibilización para eliminar la discriminación en contra de grupos de población específicos
A tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones	<ul style="list-style-type: none"> a) Eliminar obstáculos que impidan que estas poblaciones participen en consultas y procesos de participación ciudadana, foros o eventos en general. b) Atendiendo sus condiciones de vida, generar mecanismos accesibles y aceptables que faciliten su participación en aquellas decisiones que les afecten. c) Establecer mecanismos que de manera accesible proporcionen información a efecto de que puedan formarse una opinión libre que asegure dar su consentimiento informado en consultas. d) Facilitar la participación de las mujeres en situación de calle en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo en todos los niveles. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Generar mecanismos que faciliten la participación de las poblaciones atendiendo a sus condiciones de vida; b) Incorporar de manera específica la participación de las poblaciones callejeras en consultas o audiencias públicas; c) Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres
A la libertad de reunión y asociación	<ul style="list-style-type: none"> a) Facilitar la celebración de foros, audiencias y canales de comunicación permanentes para que estas poblaciones manifiesten sus problemáticas 	<ul style="list-style-type: none"> a) Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, en la ejecución de los programas estatales.
A las libertades de pensamiento, creencias y expresión	<ul style="list-style-type: none"> a) Respetar las manifestaciones de voluntad de las poblaciones callejeras. b) Brindar opciones e información que les permitan tomar decisiones sin coartar sus libertades. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Garantizar que las acciones o programas dirigidos a poblaciones callejeras cuenten con la participación y asesoría de OSCs; b) Garantizar el respeto de las manifestaciones de su voluntad.
A la información	<ul style="list-style-type: none"> a) Asegurar su acceso a información comprensible sobre los derechos y servicios que proporciona el Estado y los mecanismos para acceder a ellos. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Difundir información comprensible de los derechos de las poblaciones callejeras; b) Asegurar el acceso de las poblaciones callejeras a información sobre servicios del Estado y las formas para acceder a ellos.
A la honra y la dignidad	<ul style="list-style-type: none"> a) Eliminar normas que por su contenido discriminatorio condicionen o vulneren la dignidad, libertad o seguridad de las poblaciones callejeras. b) Garantizar su dignidad. c) Asegurar la implementación de medidas para protegerlas contra injerencias arbitrarias o ilegales. d) Adoptar medidas para evitar la explotación de imagen o prácticas que dañen su dignidad. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Eliminar prácticas o acciones del Estado contrarias a la dignidad de las poblaciones callejeras

Fuente: Elaboración propia a partir de los instrumentos listados.

En concordancia con este entramado, a nivel nacional e incluso local, estos derechos humanos (nombre; reconocimiento de la personalidad jurídica; igualdad de acceso a las funciones públicas; participar en los asuntos públicos; libertades de reunión y asociación, pensamiento, creencias y expresión; información; honra y dignidad) asociados y dependientes de la garantía del derecho a la identidad legal son contemplados en distintas reglamentaciones. A continuación, se listan algunas de estas.

Tabla 1.2 Marco nacional en materia de identidad

Estados Unidos Mexicanos				
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1°, 2°, 4°, 6°, 7° y 24°); Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2°, 3° y 9°); Ley General de Desarrollo Social (3° y 11°); Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (4° y 6°); Ley General Para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres (17°); Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (49°); Ley de Asistencia Social (4°); Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (19°); Ley General de Desarrollo Social (7° y 8°).				
Ciudad de México	Guerrero	Baja California	Jalisco	Puebla
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal; Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal; Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal; Código Civil del Distrito Federal; Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal; Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Distrito Federal; Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal; Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal; Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal; Ley de Albergues Privados para Personas Adultas Mayores del Distrito Federal.	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; Código Penal; Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación.	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; Ley Orgánica del Registro Civil del Estado de Baja California; Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación; Ley de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social para el Estado de Baja California; Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California; Ley de Asistencia Social para el Estado de Baja California; Ley sobre la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California.	Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco; Constitución Política del Estado de Jalisco; Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres; Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco; Ley Estatal para la igualdad entre hombres y mujeres.	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla; Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.

En términos generales, los esfuerzos de la comunidad internacional en materia de identidad pretenden garantizar a todos los habitantes de América Latina el ejercicio de ese derecho a través de un documento que acredite su personalidad jurídica, siendo éste, preponderantemente, el acta de nacimiento. Asimismo, el Estado Mexicano, en su reciente reforma al artículo 4to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), manifiesta que “[...] toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos

derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.” [Diario Oficial de la Federación, 17 de junio de 2014].

Con base en esta reforma constitucional el registro de nacimiento debe ser garantizado con base en tres criterios: su universalidad, puesto que incluye a todas las personas; la inmediatez, ya que éste debe efectuarse en tiempos cercanos al nacimiento; y la gratuidad, ya que la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento deberá expedirse sin costo. A este respecto sobresalen dos normatividades nacionales que disponen temporalidades de registro de nacimiento contradictorias:

Tabla 1.3 Disposiciones en torno al registro de nacimiento

Instrumento	Artículo
Código Civil Federal¹	55°. Tienen obligación de declarar el nacimiento, el padre y la madre o cualquiera de ellos, a falta de éstos, los abuelos paternos y, en su defecto, los maternos, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que ocurrió aquél.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes²	103°. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las siguientes: [...] II. Registrarlos dentro de los primeros sesenta días de vida.

Fuente: Elaboración propia a partir de los instrumentos listados.

Así, aunque consta el deber del Estado como garante del registro y la acreditación de la identidad de cada uno de los individuos que integran su población, así como de proporcionarles los medios idóneos para que esta identidad sea reconocida por terceros, con el fin de que el Estado pueda cumplir con esta obligación, resulta fundamental contar con sistemas de registro que sean eficientes, accesibles y confiables en el manejo de la información y, en consecuencia, proporcionen un documento que le permita a cada individuo hacer prueba plena de su identidad, como queda estipulado en la legislación nacional.

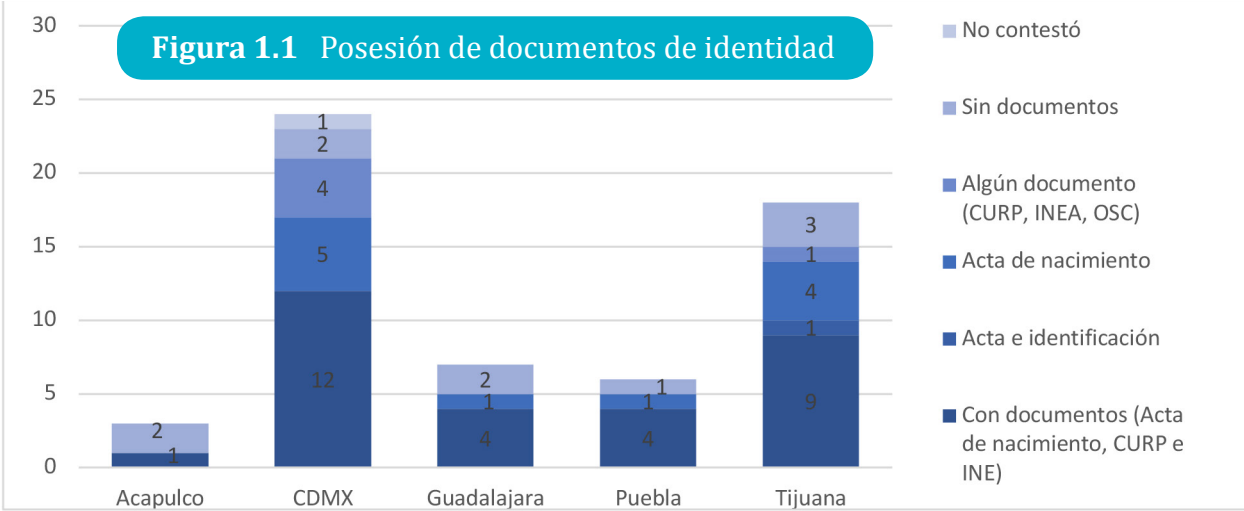
Sin embargo, en México la identidad legal carece de un instrumento único como la Cédula de Identidad Nacional o el Documento Nacional de Identidad que es instrumentado en diversos países. En nuestro país pareciera existir un acuerdo implícito alrededor de tres medios que son los de mayor reconocimiento y uso para la comprobación y garantía del derecho a la identidad: el acta de nacimiento, la Clave Única de Registro Poblacional y la credencial de elector.

En el primer caso, el registro de nacimiento constituye la constancia oficial de existencia ya que su inscripción reconoce al sujeto ante la ley, le dota de personalidad jurídica, nombre y establece algunos de sus vínculos iniciales, como los familiares y nacionales, entre otros derechos. La CURP, por su parte, a partir de la implementación del Programa de Modernización Integral del Registro Civil (PMIRC) se encuentra vinculada al registro de nacimiento; y la credencial de elector establece como uno de sus requisitos intransferibles la comprobación de nacionalidad, constatable por medio del acta de nacimiento o de la carta de naturalización. De este modo, el registro y expedición del acta de nacimiento se posiciona como el procedimiento de comprobación de identidad de mayor importancia a nivel nacional.

¹ Publicado, en cuatro partes, en el Diario Oficial de la Federación, los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928 [Texto vigente]. Últimas reformas publicadas en el Diario Oficial Federación el 24 de diciembre de 2013.
² Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2018.

Testimonios recopilados en encuestas

Respecto al ejercicio de este derecho, han sido consultadas 58 mujeres que viven en calle, provenientes de diversos contextos del territorio nacional, a través de la *Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle* (El Caracol A.C., 2019), se obtuvo lo siguiente:



Aunque en términos generales las mujeres encuestadas contaron casi en la mitad de los casos con documentos como el acta de nacimiento, la credencial de elector y la CURP (52%), también es de destacar que al menos 1 de cada 4 (26%) mujeres integrantes de las poblaciones callejeras no cuentan con documentación, o en su caso se trata de identificaciones provistas por el INEA, organizaciones de la sociedad civil o solamente la CURP.

Tabla 1.4 Posesión de documentos de identidad

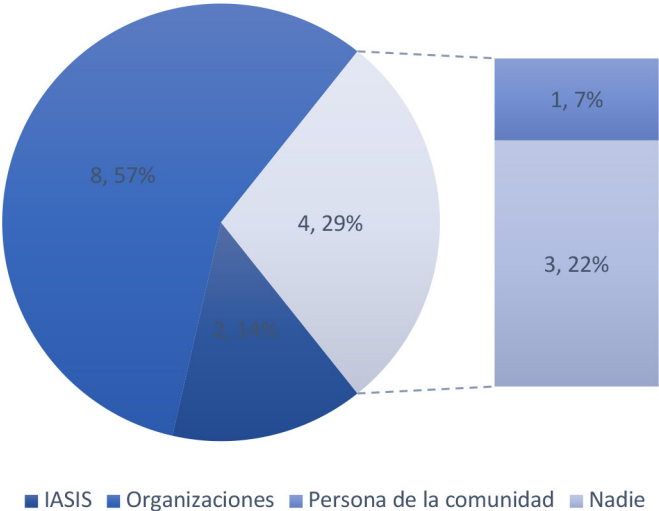
Documentos y lugar	Acapulco	CDMX	Guadalajara	Puebla	Tijuana
Con documentos (Acta de nacimiento, CURP e INE)	1	12	4	4	9
Acta e identificación	0	0	0	0	1
Acta de nacimiento	0	5	1	1	4
Algún documento (CURP, INEA, OSC)	0	4	0	0	1
Sin documentos	2	2	2	1	3
No contestó	0	1	0	0	0
Total	3	24	7	6	18

Fuente: Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol, 2019).

Ante este panorama se ha obtenido que al menos 10 de las 58 mujeres refieran no contar con acta de nacimiento, lo que las coloca en una situación de indocumentación total. Asimismo, alrededor de 47% de las mujeres encuestadas no cuenta con una “INE” para tramitar su seguro popular, acceder a un trabajo formal o a programas de gobierno, entre muchas otras posibilidades. Por ello no es de sorprender que sólo tres mujeres encuestadas sean beneficiarias de algún tipo de programa o beneficio social. En su caso, solamente 12 mujeres han intentado realizar algún trámite de obtención o recuperación de documentos de identidad, tales como credencial de elector o acta de nacimiento. No obstante, los resultados han sido desfavorables pues sólo en uno de los casos se da cuenta de estar en proceso de

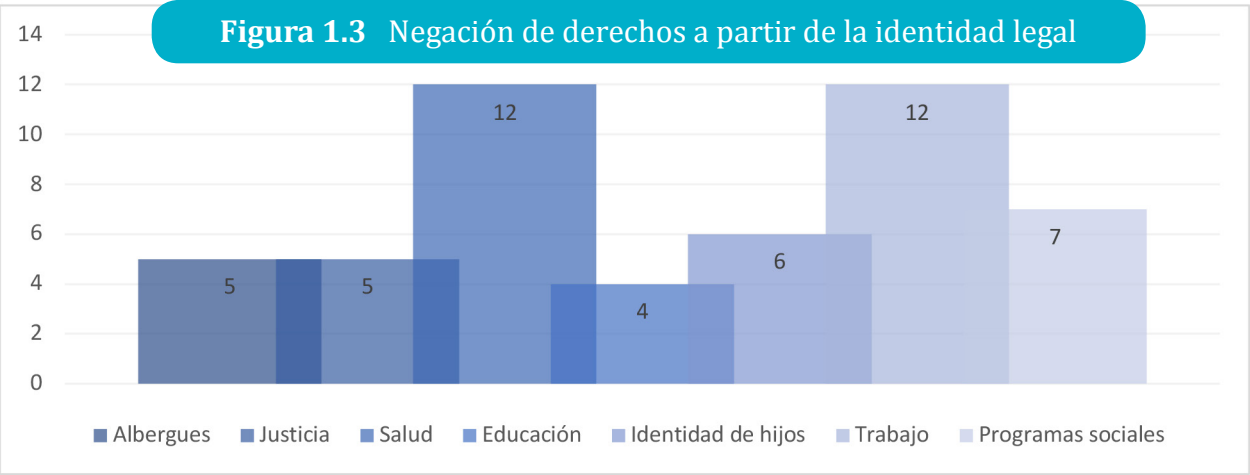
trámite; en al menos tres casos la obtención del documento ha sido negada; mientras que en cinco casos se desconoce el estatus del proceso y esa información sólo la saben quiénes les han proporcionado ayuda. Este mecanismo de intermediación es recurrente en muchos de los testimonios de las mujeres que viven en calle puesto que sólo a través del acompañamiento o la facilitación por parte de terceros les es posible acceder a su documentación. En estos casos, el principal apoyo ha sido por parte de organizaciones de la sociedad civil.

Figura 1.2 Intermediación

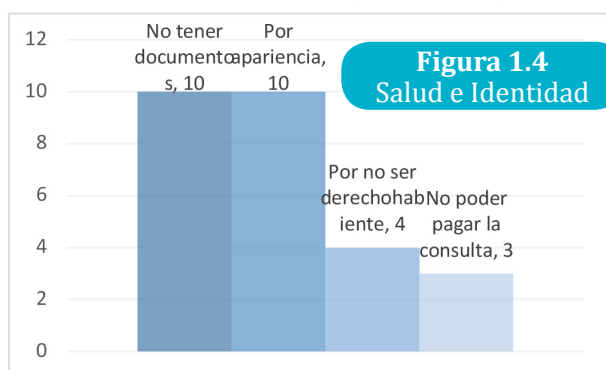


Esta problemática es trascendente por diversas causas que van desde la limitación del autoreconocimiento y la pertenencia social, pero que sin duda implican la obstaculización del acceso a diversos derechos y la transmisión intergeneracional de la situación de indocumentación. Aunque la relación no es obvia, la carencia de la documentación de existencia legal impacta en el ejercicio de muchos otros derechos, entre los cuales se encuentra el acceso a albergues, justicia, salud, educación, registro de hijos, el trabajo o el beneficio de los programas sociales, como se muestra en los testimonios de las mujeres:

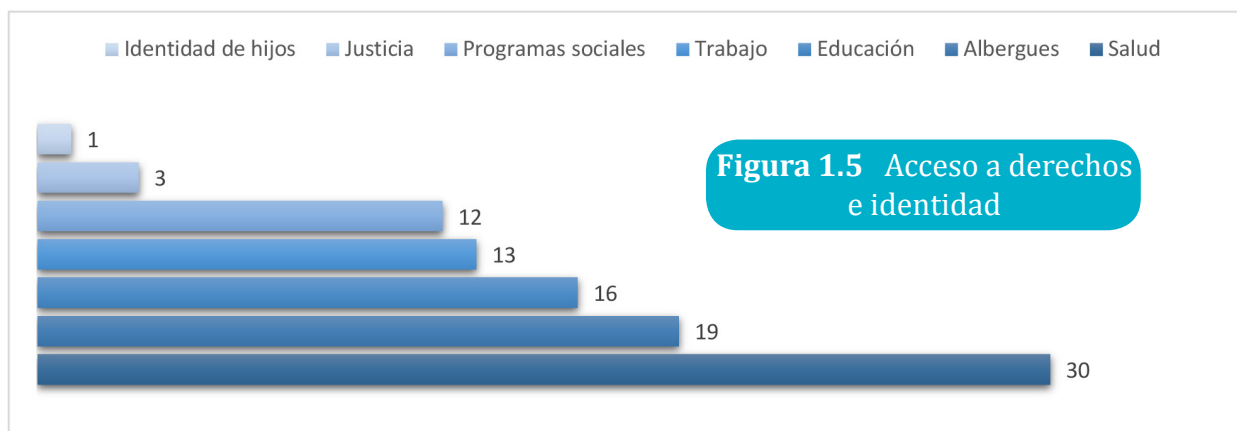
Figura 1.3 Negación de derechos a partir de la identidad legal



Sin embargo, casos específicos como son el derecho a la salud o el acceso a la justicia se distinguen por la relación que mantienen con la comprobación documental. De lo anterior dan cuenta las respuestas proporcionadas por las entrevistadas al indagar sobre el proceso de denuncia ante la violación de algún derecho. Pues de los 11 casos en los que se intentó presentar una denuncia, en al menos cuatro ocasiones se negó el proceso por no contar con documentos de identidad, en otras dos menciones dicho proceso fue obstaculizado por no contar con los datos del denunciado y no contar con testigos. Por su parte, en relación con la garantía del derecho a la salud se ha manifestado que al menos una de cada 3 (33%) encuestadas han visto obstruido el acceso a servicios de salud o atención médica. De éstas 19 mujeres, la mitad menciona como uno de los principales motivos el no haber contado con documentos de identidad (identificación o acta de nacimiento), con 10 menciones; a la par de su apariencia; y seguida en menor grado por no ser derechohabiente o no contar con recursos económicos para pagar una consulta.



Finalmente, en reconocimiento a la importancia de la posesión de documentos de identidad, las mujeres manifiestan que así como la negación de derechos se encuentra vinculado con la ausencia de documentación, también existe una relación directa y positiva en el sentido contrario puesto que ante la obtención o recuperación de documentación se relaciona con el acceso a la salud, la posibilidad de ingresar a albergues, obtener educación, trabajo o el beneficio de programas sociales, y en algún grado también con el acceso a la justicia y la posibilidad de registrar a sus propios hijos.



Diversos testimonios de mujeres que viven en calle narran cómo la falta de documentos les ha impedido acceder a servicios de salud, ya sea porque los servicios ambulatorios de emergencia se niegan a atenderlas o no se les permite el acceso a clínicas u hospitales al no contar con una identificación. También están los no pocos casos de aquellas que han gestado y dado a luz en calle pero que, ante la falta de comprobantes de identidad, su mayor temor es recibir atención médica por la posibilidad de ser separadas de sus hijos ante la imposibilidad de demostrar jurídicamente su filiación materna. Y ni qué decir de aquellas mujeres que pretenden realizar su propio registro extemporáneo, pero se encuentran obstaculizadas por la saturación de requisitos incompatibles con sus problemáticas.

Solicitudes de información

Por lo anterior, en este abordaje ha sido fundamental conocer e incluso reconocer los esfuerzos institucionales en la garantía de los derechos humanos, en este caso a partir de la identidad legal. Con ese objetivo se enviaron solicitudes de información a las principales dependencias municipales, estatales y federales encargadas de su garantía. A este respecto es importante precisar que el envío de solicitudes de información fue dirigido a la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO), el Instituto Nacional Electoral (INE), las Secretarías de Gobierno local (Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Baja California y Guerrero), así como los ayuntamientos o alcaldías correspondientes. A continuación, se presenta la información provista por aquellas que dieron respuesta.

Sobre el **Instituto Nacional Electoral** es importante anotar que, respecto a la obtención de la credencial de elector por parte de miembros de las poblaciones callejeras, en marzo de 2015, se sentaron las bases para el establecimiento del “Procedimiento para la Expedición de la Credencial para Votar a Ciudadanos en Situación de Calle y que carezcan de un comprobante de domicilio” [Instituto Nacional Electoral, 2015]. A partir de éste, se incluyó en el *Manual de Procedimientos Operativos en los Módulos de Atención Ciudadana* la verificación de inexistencia de domicilio por parte del vocal del Registro Federal de Electores de las juntas distritales, como sustituto del comprobante de domicilio. Sin embargo, debido a su nula difusión y compleja implementación, este Procedimiento ha sido escasamente interpuesto. Con base en la solicitud de información respondida por esta dependencia se da cuenta de personas por entidad que han registrado un trámite y se les ha generado una credencial de elector perteneciendo a la categoría de “situación de calle” durante 2018:

Tabla 1.5 Posesión de documentos de identidad

Entidad	Hombre	Mujer
Baja California	2	0
Ciudad de México	9	2
Guerrero	1	0
Jalisco	3	0
Puebla	--	--
Fuente: Elaboración propia con información del INE, Folio Plataforma Nacional de Transparencia 2210000116219.		

La prácticamente nula expedición de credenciales de elector a miembros de las poblaciones callejeras no es una sorpresa cuando se considera que algunos de los requisitos fundamentales para su obtención son la presentación de documentos tales como constancia de nacionalidad (acta de nacimiento), medio probatorio de identidad (identificación) y, en efecto, comprobante de domicilio. Considerando que la “situación de calle” es incompatible con la posesión de éste último y que, a pesar de la existencia de mecanismos que eximen de su presentación, esta información no es de conocimiento público, puesto que: “en actividades inherentes a la Dirección de Difusión y Campañas Institucionales no se ha solicitado la difusión y/o comunicación de campaña que dé a conocer el procedimiento para la expedición de la credencial para votar a ciudadanos en situación de calle...”, dichos resultados no son de sorprender.

En el caso de los gobiernos estatales y municipales, se cuenta con información de los estados de Jalisco y Puebla. El primer caso, el gobierno del **Estado de Jalisco** manifiesta contar con mecanismos para abatir el subregistro de nacimientos, a través de campañas de registros extemporáneos. Sin embargo, no se da cuenta de información específica, proporcionada por organismos públicos, para poder asegurar que las mujeres integrantes de la población callejera, aun siendo consideradas en estado vulnerable, han sido beneficiarias de estas campañas. Y conforme a la solicitud de información respondida por la Secretaría General del Registro Civil de Guadalajara, se tiene en cuenta que:

Las campañas de registros extemporáneos, matrimonios y reconocimiento de hijos, son totalmente gratuito, esta campaña tiene una duración de un mes, ya que todos los municipios que comprenden el estado de Jalisco llevan a cabo dichas campañas, por tanto tenemos una temporalidad de 30 días, la población objetivo es las personas que se encuentra en un estado vulnerable y por la misma situación es complicado cumplir los requisitos, por tanto en esas campañas se pretende regularizar el estado civil de la persona [...] sin que se haga una estadística respecto de la situación de calle, o callejeras o indigencia. (Sic, Plataforma Nacional de Transparencia DTB4494/2019 Folio 03733919)

De este modo, los municipios que cuentan con campaña de registros extemporáneos, en la entidad son 15, mientras que 31 carecen de ésta. En cuanto al municipio de Guadalajara, se manifiestan 215 registros extemporáneos durante 2018, a través de la “Campaña anual de registros extemporáneos, matrimonios y reconocimiento de hijos” implementada del 2 de mayo al 6 de junio, aunque se carece de estadística respecto de la situación de calle.

En el **Estado de Puebla**, por su parte, se manifiesta que “la Dirección General no cuenta con la información que solicita relativa a las campañas para abatir el subregistro de nacimientos en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018”. Sin embargo, se establecen “veintidós ‘Caravanas de Prevención y Participación Ciudadana’, con el fin de dar a conocer los servicios que se ofrecen a través del Registro Civil, incluida la promoción a la cultura del Registro Civil”. Dichas Caravanas se llevaron a cabo durante un día en 22 municipios de la entidad; en específico el 22 de agosto de 2018 en la capital del estado. Asimismo, se da cuenta que “el Registro Civil del Estado a través de la Unidad Móvil, participa juntamente con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), en campañas o jornadas de servicios en el interior del Estado”, en 21 localidades; y se abrieron cinco Juzgados del Registro Civil en la capital de Puebla. No obstante, “no se tiene la certeza, si con estas

acciones se ha beneficiado a mujeres en riesgo social, condición o situación de calle, callejeras o indigencia” (INFOMEX 00756019).

Acciones y programas de atención

En complemento con esta información, se han investigado y analizado algunas de las principales acciones, programas y trámites que se encuentran disponibles en los portales gubernamentales de las entidades en cuestión: Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Baja California y Guerrero; así como los ayuntamientos o alcaldías correspondientes: Cuauhtémoc, Puebla, Guadalajara, Tijuana y Acapulco, con el propósito de dilucidar la factibilidad por parte de las mujeres miembros de las poblaciones callejeras de acceder a la garantía de su identidad legal.

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

En la búsqueda de información sobre los programas y acciones llevadas a cabo para la garantía de este derecho se han encontrado al menos las siguientes tres acciones o trámites emprendidos por parte de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, que corresponden a los procesos habituales para la obtención del registro de nacimiento extemporáneo, así como algunas medidas llevadas a cabo para facilitar su proceso:

Tabla 1.6 Ciudad de México

Ampliación de horarios de atención en registro civil	Asesoría y atención jurídica a la población en situación de vulnerabilidad y/o en situación de calle	Búsqueda de antecedentes registrales del estado civil de las personas.
Esta medida se implementó a partir del 28 enero 2019, con el propósito de facilitar los trámites de las personas que trabajan entre semana. Así el Registro Civil de la Ciudad abrirá cinco juzgados 42,43,45,46 y 48, los 365 días del año, ubicados en clínicas y hospitales.	Servicio para gestionar la obtención de su acta de nacimiento, y CURP. Aunque se establece como gratuito, se solicita la presentación por parte del interesado de constancias de inexistencia de registro de nacimiento, de matrimonio, fotografías tamaño infantil y comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.	Proporcionar el nombre del titular o titulares del acta a buscar, nombre de los padres del mismo y fecha en la que se dio el acto registrado (en caso de nacimiento el presente apartado se refiere a la fecha del nacimiento y no a la de registro), con un costo de \$71.70 pesos.
Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México (2 de agosto de 2019, consultado). Disponible en: [https://consejeria.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/se-amplian-horarios-de-atencion-en-registro-civil] .	Secretaría de Desarrollo Social (2 de agosto de 2019, consultado). Disponible en: [https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/ts/710/9] .	Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México (2 de agosto de 2019, consultado). Disponible en: [https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/] .

Aun considerando la existencia de campañas y procesos de registro extemporáneo de nacimientos, es notorio que el diseño de estas acciones es incompatible con la realidad y la problemática que enfrentan hombres y mujeres que viven en las calles de la Ciudad de México. Incluso el servicio de “Asesoría y atención jurídica a la población en situación de vulnerabilidad y/o en situación de calle”, destaca por su incongruencia al requerir presentar ante el IASIS (ahora IAPP) constancias de inexistencia de registro de nacimiento y matrimonio, comprobante de domicilio y fotografías tamaño infantil. Aunque se presenta como un trámite gratuito, los costos vigentes de la Secretaría de Finanzas suman que la recopilación de estos requisitos implica un gasto de al menos \$286.80 pesos. Así pues, a pesar de que el trámite en sí mismo es considerado como gratuito, los costos asociados lo contradicen. Esto sin mencionar la incoherencia de solicitar un comprobante de domicilio, con una antigüedad no mayor a tres meses, en un trámite destinado a población “en situación de calle” y requerir los documentos compilados en las oficinas de atención del IASIS una vez que han sido obtenidos de forma autónoma en el Registro Civil, sólo para esperar la respuesta del Instituto que intermediará.

Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero

Tabla 1.7 Acapulco, Guerrero

Semana del Registro Infantil	Gestión ante la dirección de registro civil el estado civil de las personas	#10xLaInfancia
Campaña de registros de nacimiento gratuitos para menores de 8 años en cinco localidades de las zonas suburbana y rural del puerto.	Programa de gestión ante la Dirección del Registro Civil los registros de nacimientos, registro de niños y extemporáneos, así como matrimonios de quien por sus condiciones de pobreza no cuentan con el recurso suficiente para su tramitación, a partir de brigadas mensuales en colonias urbanas, suburbanas y zona rural del municipio para también realizar campañas masivas anuales. Se solicitan, además de requisitos habituales y expediente de vida, constancias de inexistencia, cartas de pobreza y comprobante de domicilio.	Sistema operativo #10xLaInfancia, consistió en una jornada de trabajo para la garantía de la identidad jurídica en beneficio de niños y niñas del estado de Guerrero.
Gobierno de Acapulco (2 de agosto de 2019, consultado). Disponible en: [https://acapulco.gob.mx/2019/05/realizara-gobierno-de-acapulco-la-semana-del-registro-infantil/] .	DIF Acapulco (2 de agosto de 2019, consultado). Disponible en: [http://difacapulco.gob.mx/servicios-y-programas/enlace-de-registro-civil/] .	Coordinación Técnica del Registro Civil Guerrero (2 de agosto de 2019, consultado). Disponible en: [https://es-la.facebook.com/registrocivilgro/] .

En el caso específico del gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Acapulco, resalta que desde ambos niveles de gobierno no se contempla a la población que vive en calle de forma específica, ni se concibe de forma diferenciada a los grupos que la integran, por lo que las mujeres que viven en calle no tienen lugar en sus políticas de atención. Sin embargo, siguiendo una lógica tutelar y paternalista, los gobiernos locales dirigen sus campañas al registro extemporáneo de niños y niñas e ignoran la problemática de subregistro de personas adultas y mayores.

Además, consideran dentro de los requisitos de solicitud la sobresaturación de documentación para integrar un expediente de vida (fe de bautismo, cartilla, constancias escolares, etcétera), aún con lo contradictorio y cíclico que resulte solicitar documentos que para su expedición requieren la presentación del acta de nacimiento. Por otro lado, destaca la solicitud de cartas de pobreza como parte del trámite, cuando no debiera ser requisito comprobar o argumentar la precariedad económica en un proceso que debe garantizarse como gratuito.

Ayuntamiento de Tijuana, Baja California

En Baja California, por su parte, se contempla el registro de nacimiento gratuito, pero sólo en los casos de que se trate de menores de cinco años, y el proceso se realice en los lugares y horarios establecidos con tal fin. Así, tratándose de personas adultas, menores de edad que hayan superado este límite de edad o de quienes no hayan nacido en el municipio de registro, serán merecedores del pago del registro.

Incluso, a diferencia de otras entidades en donde se identifica la existencia de sanciones económicas por registro extemporáneo de nacimiento, en Baja California, además de los costos económicos media la figura jurídica de “demanda de jurisdicción voluntaria de inexistencia de registro de nacimiento”, por lo que se prevé proporcionar asesoría legal a las personas de escasos recursos que lo soliciten, a partir de la aplicación de un estudio socioeconómico, la presentación de constancias de inexistencia y comprobantes de filiación, entre otros. Esta obstaculización económica, procedimental y administrativa sólo exhibe la desprotección en la garantía del ejercicio de la identidad legal, en donde mujeres adultas que viven en calle son uno de los grupos más afectados, al intersectarse su sexo, edad, precariedad económica, condiciones de vida y situación de indocumentación, relativa o absoluta.

Tabla 1.8 Tijuana, Baja California

Expedición de actas del estado civil de las personas	Exención de costo de registro de nacimiento	Jurisdicción voluntaria de inexistencia de registro de nacimiento.
En el caso del registro de nacimiento de menores de cinco años de edad (ordinario) se encuentra exento de costo, salvo en los casos en que haya ocurridos fuera del municipio, o extranjero, o sea extemporáneo.	Registro después de los primeros cinco años de nacimiento en "campaña colectiva" de registros. Registro en instituciones de salud, en el módulo de registro civil. Registro en instituciones públicas o privadas de salud por enfermedad infantil o maternal Registro de nacimiento (ordinario) en horas hábiles dentro de las oficinas.	Proporcionar defensa jurídica, patrocinio, asesoría y representación legal a personas de escasos recursos económicos que se presenten a la defensoría pública, a fin de interponer una demanda de jurisdicción voluntaria de inexistencia de registro de nacimiento. Se solicita estudio socioeconómico, constancias de inexistencia, documento filial y testigos en juicio.
Ayuntamiento de Tijuana (2 de agosto de 2019, consultado). Disponible en: [http://www.tijuana.gob.mx/Dependencias/RegistroCivil/tramites.aspx].		Gobierno de Baja California (2 de agosto de 2019, consultado). Disponible en: [http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/tramitesyservicios/busqueda.jsp].

Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco

En cuanto al gobierno de Jalisco, es interesante identificar que la gratuidad del proceso de registro de nacimiento se encuentra limitado a la realización del trámite dentro de los primeros 180 días a partir del nacimiento, y que de forma similar a lo que ocurre en diversas entidades, este proceso implica la presentación de una lista innumerable de documentos comprobatorios de identidad y filiación, e incluso un comprobante de domicilio.

Como se puede suponer, en muchas ocasiones dichos requisitos son incompatibles con la realidad y la problemática de las poblaciones callejeras. Por ello sorprende que, en el caso del registro de nacimiento extemporáneo se sumen a estos, la obtención de constancias de inexistencia, que implican gastos adicionales, junto con el pago de multas, el informe al ministerio público y el trámite de resolución ante el Director del Registro Civil, el cual supone además de un pago, la presentación de cartas de recomendación. Por su parte, las campañas anuales de registro de nacimiento que en el municipio de Guadalajara se realizan para abatir el subregistro de nacimiento sólo eximen del pago del trámite y de las multas anticonstitucionales que siguen vigentes, sin embargo operan sin considerar las características de exclusión y precariedad económica de la población en calle y, mucho menos de los diversos grupos que la componen como son las mujeres.

Tabla 1.9 Guadalajara, Jalisco

Registro de nacimiento	Resolución del Director del Registro civil	Campaña anual de Matrimonios colectivos, registros extemporáneos y reconocimiento de hijos
En este estado el registro debe realizarse dentro de los 180 días a partir del nacimiento y presentar certificado de nacimiento, acta de nacimiento de los padres, identificación, comprobante de domicilio y testigos. En caso de extemporáneo, se debe dar vista al ministerio público, además del pago de multa y constancias de inexistencia.	Con un costo de \$73.04 pesos, este trámite permite iniciar el registro extemporáneo de nacimiento, en el que es necesario presentar, entre otros: constancia de inexistencia, comprobante de domicilio, constancia médica de nacimiento o denuncia, actas de nacimiento de los padres, identificaciones, expediente de vida de familiares y dos cartas de recomendación.	Es necesario presentar diversa documentación dependiendo de la edad de la persona a registrar, incluyendo: certificado de nacimiento de la persona a registrar, incluyendo certificado de nacimiento o dos testigos, comprobante de domicilio, identificación oficial, acta de nacimiento o de matrimonio de los padres, constancia de inexistencia municipal y estatal, expediente de vida y cartas de recomendación.
Gobierno de Jalisco (2 de agosto de 2019, consultado). Disponible en: [https://sgg.jalisco.gob.mx/acerca/areas-de-la-secretaria/registro-civil/registro-nacimiento].	Ayuntamiento de Guadalajara (2 de agosto de 2019, consultado). Disponible en: [https://guadalajara.gob.mx/tramites/registro-de-nacimiento-extemporaneo].	DIF Guadalajara (2 de agosto de 2019, consultado). Disponible en: [https://guadalajara.gob.mx/noticias/campana-2018-matrimonios-colectivos-registros-extemporaneos-reconocimiento-hijos].

Finalmente cabe señalar que, como resultado del Programa de Modernización Integral del Registro Civil, una de las estrategias emprendidas para la recuperación de la copia certificada del acta de nacimiento ha sido la implementación de la plataforma “Soy México. Tu acta de nacimiento en línea”, lanzada el 10 de enero de 2018. En ésta se puede consultar, e imprimir en papel bond, copias certificadas de las actas de nacimiento de todo el país, sin necesidad de acudir a la oficina del Registro

Civil donde se hizo el registro original. Cada acta emitida por esta plataforma es un documento válido para cualquier trámite, certificado mediante un código QR. Sin embargo, es de notar que a pesar de ser una estrategia estandarizada y tratarse del mismo trámite, se observan diferencias notables entre entidades y, en algunos casos, variaciones significativas de un año a otro, las cuales parecen carecer de sustento, excepto la discrecionalidad estatal.

Tabla 1.10 Costos en línea ³

Entidad	2017	2018	2019
Baja California	168.00	172.00	180.00
Ciudad de México	Gratuita	68.00	71.70
Guerrero	84.00	89.00	90.00
Jalisco	71.00	73.00	76.00
Puebla	135.00	145.00	110.00
Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaría de Gobernación.			

³ Costos consultados en *El Excelsior* (2017), "Así puedes imprimir tu acta de nacimiento desde tu casa", Nacional. Disponible en: [<https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/27/1179447>], 27 de noviembre de 2017; en Secretaría de Gobernación (2018), "Expedición de la copia certificada del acta de nacimiento en línea", *Trámites*. Disponible en: [<https://www.gob.mx/tramites/ficha/expedicion-de-la-copia-certificada-del-acta-de-nacimiento-en-linea/RENAPO187#costos>], última consulta: 4 de diciembre de 2018; y en Secretaría de Gobernación (2018), "Copia certificada del acta de nacimiento en línea", *Trámites*. Disponible en: [<https://www.gob.mx/actas>], Última consulta: 4 de febrero de 2019.

Derecho a la educación

Gabriela es una mujer alta de cabello castaño y una sonrisa contagiosa; trabaja arduamente pues, al ser madre soltera de una niña de 9 años y un niño de 12 tiene que garantizar el sustento de los tres. Cursó toda la educación primaria pero no cuenta con certificado de estudios, ya que a los 12 años tuvo que dejar la escuela para comenzar a trabajar: su familia lo necesitaba; razón por la cual, ha sido complicado desde la juventud encontrar un trabajo formal para mejorar sus condiciones laborales y de vida.

Gaby, como le gusta que le digan, no tuvo opciones para planear su vida, dado que su nula educación sexual no le permitió conocer los distintos métodos anticonceptivos. Es por ello que no supo cómo prevenir sus embarazos y tampoco tuvo la información necesaria para su elección de concebirlos o no.

En la actualidad sus hijos tampoco han podido ingresar al sistema escolarizado debido a la falta de información sobre su derecho a la educación. La niña trabaja vendiendo dulces en el Metro y el niño limpiando parabrisas para ayudar a salir adelante a la familia completa. Son un gran equipo; a pesar de ser agotador y a veces fastidioso, los tres trabajan sabiendo que es por el bienestar de ellos. Al finalizar la jornada laboral se reúnen en el Metro y caminan juntos a cualquier hotel cercano que les alcance con lo destinado para su hospedaje.

Gaby está consciente que es su deber el bienestar de sus hijos y ha pensado en meterlos a la escuela, pero no sabe cómo hacerlo; piensa que será difícil porque ellos nunca han asistido a una y porque

cuando ella era pequeña le dijeron que estudiar era solamente para gente rica.

Lo que Gaby debe saber es que no importa la edad que tenga, ni la edad que tengan sus hijos, tampoco su nivel socioeconómico; es importante que esté consciente que por el simple hecho de ser seres humanos tienen el derecho a la educación y que el Estado mexicano tiene el deber de garantizárselos.

Es por ello que en el siguiente apartado se mostrará la importancia de recibir una educación de calidad e integral, y la trascendencia de esta; los avances que han existido en materia legislativa y la situación actual sobre su garantía para las mujeres pertenecientes a la población callejera en México. •



Marco Normativo

Los problemas financieros, estancamiento económico, desigualdad social, violencia social y criminal y degradación del medio ambiente son fenómenos reconocidos como parte del complejo escenario mexicano. Esto afecta directa e indirectamente a los miembros de la sociedad, limitando el acceso a la educación integral y saludable de muchas personas, causando privaciones en su desarrollo como seres humanos libres, capaces de satisfacer sus necesidades y desplegar todo su potencial. Por lo tanto, se observa un círculo vicioso que no permite que miles de personas puedan sumar esfuerzos para hacer frente a las principales problemáticas que aquejan al país y lograr una mejora en su calidad de vida.

Por ello es importante que se proporcione educación universal y que se erradique el analfabetismo. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura al menos 750 millones de jóvenes y adultos no saben aún leer ni escribir, mientras que 250 millones de niños carecen de capacidades básicas de lectoescritura y cálculo. Esto conlleva la exclusión tanto de niños, jóvenes y adultos quienes no logran integrarse a las dinámicas económicas y sociales. De igual manera, es importante reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito académico, laboral y social; ya que estas últimas tienen todavía más obstáculos que los primeros para ejercer su derecho a la educación (16 millones de niñas probablemente no asista nunca a la escuela), y con ello obtener un documento que lo avale y beneficiarse de este, pues se enfrentan a dificultades estructurales y culturales, por ejemplo la pobreza, el aislamiento geográfico, el matrimonio forzado, el embarazo precoz, la violencia de género y las actitudes tradicionalmente machistas relacionadas con el papel de las mujeres (UNESCO, 2019).

Distintos organismos internacionales han creado mecanismos e instrumentos para proteger y

garantizar los Derechos Humanos de todas las personas; entre ellas las mujeres, en general y las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, en particular. Es por ello que en el presente informe se enlistan los documentos y acuerdos internacionales más importantes en la materia:

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 14)
- Protocolo de San Salvador (arts. 10, 13 y 16)
- Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 23, 24, 28 y 29)
- Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 26)
- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 10)
- Declaración Mundial sobre Educación para Todos (art. 3)
- Declaración y Plan de Acción de Viena (párrafos 33 y 80)
- Observación General núm. 11. Planes de acción para la enseñanza primaria (artículo 14; párrafos 1, 2, 4-11)
- Observación General núm. 13. El derecho a la educación (artículo 13, párrafos 1, 6, 31 y 32)
- Carta de la Organización de Estados Americanos, artículos 34 y 49
- Declaración Americana, artículos VII y XII
- Carta Democrática Interamericana, artículo 16
- Protocolo de San Salvador, artículos 13 y 16
- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General núm. 18: El Derecho a la Educación, párrafo 1

- Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, artículo 1
- Agenda Mundial en Educación 2030

El Estado mexicano tiene obligaciones que asumir frente a la discriminación y la desigualdad que existe entre mujeres y hombres y entre diferentes niveles socioeconómicos dentro del país. Es necesario que el gobierno de México tome medidas para crear y formular acciones que permitan construir una sociedad más equitativa e inclusiva para todos y todas. En el siguiente cuadro se presentan dichas obligaciones y elementos normativos que México debe seguir como nación para lograr la garantía plena de los Derechos Humanos, especialmente en el ámbito educativo.

Tabla 2.1 Obligaciones y normatividad en materia educativa

Derecho Humano	Obligaciones reforzadas en el marco del principio de igualdad y no discriminación	Elementos normativos y obligaciones
A la educación	a) Facilitar el acceso a servicios educativos básicos e incluyentes, profesionales y técnicos que tomen en cuenta las condiciones de vida de las mujeres pertenecientes a la población callejera. b) Planificar programas que permitan acreditar los estudios que pudieran tener las mujeres en poblaciones callejeras y que permitan su inclusión en el sistema educativo. c) Generar programas educativos que establezcan lazos con fuentes de empleo para facilitar el tránsito de las mujeres pertenecientes a la población callejera hacia un trabajo estable y digno.	a) Garantizar acciones y mecanismos que favorezcan el adelanto de las mujeres en todas las etapas del proceso educativo b) Garantizar el derecho de las niñas y mujeres a la educación: a la alfabetización y al acceso, permanencia y terminación de estudios en todos los niveles, a través de la obtención de becas y otras subvenciones.
Al acceso en igualdad de oportunidades, obligatorio y gratuito a la educación	a) Garantizar la gratuidad en la enseñanza pública hasta donde la ley lo establezca y adoptar medidas para facilitar que las mujeres puedan culminar estudios superiores b) Ofrecer a las mujeres las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional y acceso a estudios en todos los ciclos de enseñanza, tanto en zonas rurales como urbanas c) Brindar las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios d) Dar las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación complementaria como los programas de alfabetización funcional y de adultos e) En necesaria la reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios f) Permitir el acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia g) Fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria o que no tengan su certificado	a) Definir en las políticas educativas los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres y el respeto pleno a los derechos humanos b) Desarrollar programas educativos, en todos los niveles de escolaridad, que fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres y el respeto a su dignidad c) Fomentar la incorporación a la educación y formación de las personas que en razón de su sexo están relegadas

Tabla 2.1 Obligaciones y normatividad en materia educativa

Derecho Humano	Obligaciones reforzadas en el marco del principio de igualdad y no discriminación	Elementos normativos y obligaciones
A recibir educación libre de estereotipos que discriminen y fomenten la desigualdad entre mujeres y hombres	<p>a) Eliminar cualquier forma de discriminación contra las adolescentes embarazadas y garantizar su permanencia en las escuelas hasta que culminen los estudios.</p> <p>b) Analizar y eliminar cualquier tipo de estereotipo que afecte negativamente el disfrute de las niñas y adolescentes al derecho a la educación.</p> <p>c) Establecer políticas y programas para desarrollar la educación intercultural, con especial atención a las barreras que pueden enfrentar las niñas y los adolescentes que se encuentran en situación particular de vulnerabilidad.</p> <p>d) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en cualquier nivel y formas de enseñanza, ejercicio que puede comprender la modificación de libros, programas escolares y métodos de educación.</p>	<p>a) Eliminar de los programas educativos los materiales que hagan apología de la violencia contra las mujeres o contribuyan a la promoción de estereotipos que discriminen y fomenten la desigualdad entre mujeres y hombres</p> <p>b) Promover que en las prácticas de comunicación social de las dependencias de la Administración Pública Federal, así como en los medios masivos de comunicación electrónicos e impresos, se eliminen el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente</p> <p>c) Incluir entre los fines del sistema educativo la formación en el respeto de los derechos y libertades, y de la igualdad entre mujeres y hombres, así como el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia y la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres</p>
Fuente: Elaboración propia con base en los instrumentos listados.		

Para hacer efectivos los compromisos que como Estado se han aceptado, el poder legislativo mexicano ha hecho reformas y ha creado leyes que han sido un avance muy importante para el cumplimiento de metas internas y a nivel internacional. A continuación se nombran algunas de las más importantes en el tema de educación.

Es importante mencionar que en la mayoría de los documentos no se hacen especificaciones sobre a qué grupo social van dirigidos, sin embargo es necesario recordar que los derechos humanos son universales; por lo tanto todas las leyes mencionadas en el listado alcanzan a cada una de las mujeres mexicanas, incluyendo a las

mujeres pertenecientes a la población callejera. Podría obviarse esta afirmación, sin embargo en las acciones y programas gubernamentales y sociales muchas veces no se ve reflejada dicha universalidad.

Por otro lado, los estados han homologado sus constituciones y elaborado leyes para tener una base jurídica que los guíe en el desarrollo de una sociedad equitativa y respetuosa. A continuación se presentan las normas respectivas.

Tabla 2.2 Marco normativo nacional en materia educativa

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1 y 3); Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (artículos 45, fracciones I, II, III, IV y XII); Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (artículo 9, fracción I); Ley General de Desarrollo Social (artículos 6 y 14, fracción I); Ley General de Educación (artículos 3 y 32); Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (artículo 57); Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (artículo 5, fracción IV, incisos a y b); Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (artículos 17, fracción X y XII; y 34, fracción II)

Acapulco	Tijuana	Guadalajara	Ciudad de México	Puebla
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, artículo 6, fracción II	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, artículo 7, ap. A Ley de Educación del Estado de Baja California, artículo 1, 3 y 10 Ley de Asistencia Social para el Estado de Baja California, artículo 4, fracción VII Ley del Instituto de la Cultura de Baja California, artículo 12, fracciones XIV y XXIX; y 13 Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California, artículo 6, fracciones II, X y XI Ley sobre la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, artículo 1 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 8, fracción III Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, artículo 47 Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación, artículo 15, inciso b	Constitución Política del Estado de Jalisco artículo 4 Ley Estatal para la igualdad entre hombres y mujeres artículos 14, 62, 63, 64 y 65 Ley de Educación del Estado de Jalisco artículos 2; 3; 7, fracción I y 195 fracción VIII Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco artículo 7, fracción II Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco artículo 6, fracción IV y XVI Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres artículo 8, fracción VII Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco, artículos 9; 23, fracción II; 29, fracción I.	Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, artículo 6, fracción I Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal, artículo 12, fracción II Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, artículo 1, fracciones II y VIII. Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal, artículo 10 Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, artículo 31 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal, artículo 5, apartado D, fracción III Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, artículo 5, fracción II	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículos 7; 17; 26, fracción XII; 118 y 123 Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, artículos 8, fracción VI; 14; 30; 32; 36, fracción V Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículos 12 y 14 Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, artículos 9 fracciones II y V; 18; 35, fracción II y VI; 38, fracción VII y 43.

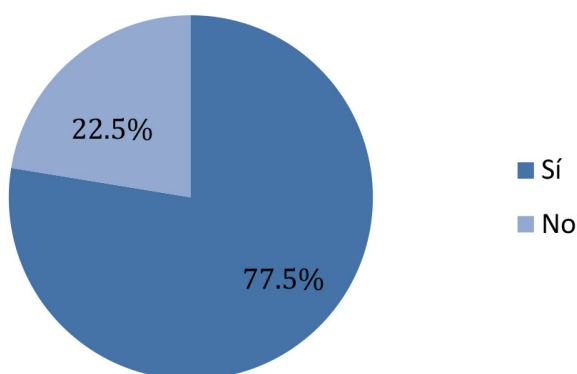
Testimonios recopilados en encuestas

El nivel de escolaridad de una población afecta la productividad, la movilidad social, la reducción de la pobreza, la construcción de la ciudadanía y la identidad, así como el fortalecimiento de la cohesión social. Sin embargo, en México hay una gran desigualdad en la distribución de la riqueza que provoca, al mismo tiempo, abismales diferencias en la calidad y nivel de estudios de la población. De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 21.2 millones de mexicanos y mexicanas viven en situación de pobreza alimentaria, mientras 11.3 millones concentran 38% del ingreso corriente nacional (INEE, 2012).

Las mujeres pertenecientes a la población callejera encuestadas por El Caracol A.C. (2019) tienen en promedio 36 años de edad, sin embargo, a través de la Figura 2.1 se puede observar que no todas saben leer y escribir, siendo excluidas de un conocimiento básico para poder realizar un sinnúmero de actividades de sobrevivencia así como de comunicación, defensa y desarrollo.

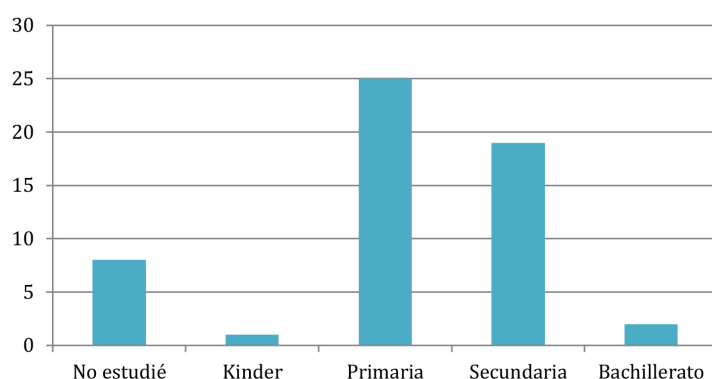
Cabe mencionar que el 93.6% de la población de 15 años y más en México es analfabeta (INEGI, 2015),

Figura 2.1 Leer y escribir



Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol A.C., 2019)

Figura 2.2 Grado de estudios

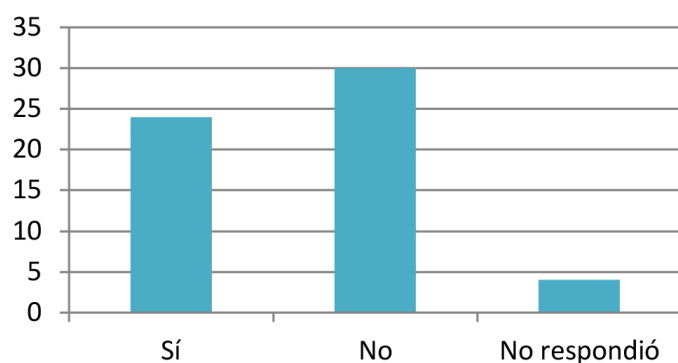


Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol A.C., 2019)

A través de la Figura 2.2 podemos observar la escolaridad de las encuestadas, donde la mayoría cuenta con la primaria concluida, mientras que el número decrece hacia el nivel medio superior. Podemos colegir que su formación académica es interrumpida por la precariedad y la violencia; es justamente en la etapa previa a la pubertad cuando la mayoría de las mujeres integrantes de la población callejera salieron de los núcleos familiares para buscar seguridad económica, física y emocional, muchas de ellas la hallaron entre las personas que habitan las calles, por lo cual dejaron la escuela para dedicarse al trabajo y poder sobrevivir.

Aun contando con un nivel escolar concluido, la mayoría de ellas no obtuvieron un certificado de estudios, sin el cual no es verificado su grado de estudios oficialmente, esto no solo afecta el posible ingreso al siguiente nivel educativo sino que impide acceder a empleos formales mejor remunerados o con mejores condiciones laborales que solicitan un comprobante de escolaridad.

Figura 2.3 Con certificado



Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol A.C., 2019)

Nivel preescolar

La educación preescolar en México es deficiente, ya que cuatro de cada 10 escuelas de nivel preescolar cuenta con solamente una educadora para atender a la totalidad de los niños en el aula, en ocasiones esta misma persona se hace cargo de la dirección del plantel, lo que resulta en una complejidad para la atención pedagógica de los niños y que a su vez se suman las demandas administrativas y de gestión que dan lugar al ausentismo del docente y a la consecuente suspensión de las actividades escolares.

Al igual que en las escuelas primarias y secundarias, muchas de las escuelas de preescolar no cuentan con los servicios básicos: Una de cada cuatro no cuenta con agua y una de cada seis no tiene energía eléctrica. La carencia de estos servicios se concentra en las zonas rurales y se agrava en los preescolares indígenas y comunitarios.

Nivel primaria

En México la educación primaria está compuesta por 14.9 millones de estudiantes, cerca de 574 mil docentes y casi 100 mil escuelas; el 78% son de tipo general, 1 de cada 10 son indígenas y 11% son comunitarias (INEE, 2012).

La calidad del espacio escolar es baja, ya que de acuerdo con los directores de las primarias, poco más de una quinta parte de ellas carece de agua y 20% de energía eléctrica; siete de cada cien no tiene baños y 2% no tiene salones de clases (Ibíd.). Una infraestructura escolar deficiente afecta negativamente el desempeño académico de los estudiantes y representa una seria barrera en el aprendizaje.

Finalmente, las primarias generales son las mejor dotadas ya que el 75% de ellas cuenta con cuatro de los servicios básicos, a diferencia de las escuelas indígenas, donde solo una cuarta parte cuenta con ellos, mientras que en las comunitarias, únicamente el 16% (Ibíd.).

Nivel secundaria

A nivel secundaria, existen un poco más de 36,500 escuelas, en las que estudian casi 6.2 millones de jóvenes. Este nivel se imparte en cinco tipos: telesecundaria, a la que corresponden la mitad de las escuelas; general, con 31% de los planteles; técnica (13%); comunitaria (6%) y las secundarias para trabajadores (1%). (Ibíd.)

En este nivel educativo tampoco se tiene la calidad esperada. En una de cada cinco telesecundarias, uno o dos maestros se hacen cargo de atender a estudiantes de los tres grados y, al mismo tiempo se encargan de la dirección. Cabe señalar que todas las secundarias comunitarias son unitarias.

Con información proporcionada por los directores se conoce que las telesecundarias son las que tienen mayores carencias en servicios e infraestructura básica, ya que de cada 100 escuelas, 28 no cuentan con servicio de drenaje y agua, nueve no tienen baños, cinco carecen de energía eléctrica y cuatro no disponen de salones de clases. (Ibíd.)

Así mismo, cinco de cada 10 profesores pertenecientes a las secundarias generales están contratados por horas, y en las técnicas son tres de cada 10, lo que provoca una deficiencia en su formación continua y desarrollo profesional. Del 2000 a la fecha se ha visto una disminución considerable en el número de docentes contratados por tiempo completo y la cantidad de los que

trabajan por horas han aumentado de manera significativa.

Por lo tanto la educación de las mujeres que sí han podido ingresar a los dos niveles básicos no significa que hayan tenido una enseñanza de calidad. Todo ello sin considerar sus condiciones de vida y privaciones de otros derechos que les obstaculizan su libre e íntegro aprendizaje.

Nivel Medio Superior

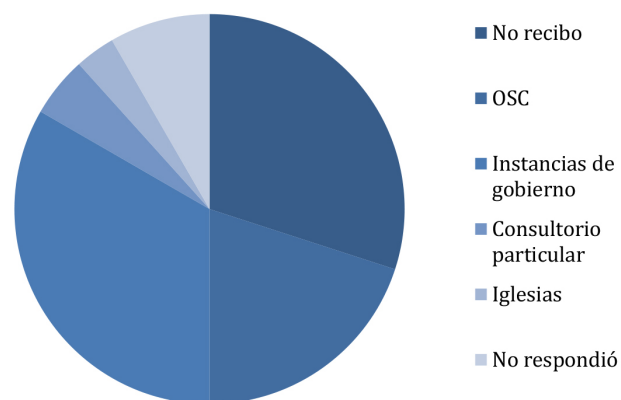
El nivel bachillerato se concentra en las zonas urbanas y gran parte de esas escuelas dependen del sostenimiento privado. Al menos la mitad de los directores de bachilleratos públicos tienen quejas sobre el equipo de cómputo insuficiente, pocas aulas, deficiente equipo de laboratorio y escaso acervo bibliográfico. (Ibíd.)

Los datos anteriores permiten notar la deficiencia y baja calidad educativa en México, mostrando una parte del contexto educativo en el territorio nacional siendo particularmente afectadas las personas vulnerables entre ellas las mujeres pertenecientes a la población callejera pues en su figura se anidan múltiples desigualdades que las tornan proclives al abandono de los estudios y ausentismo escolar.

Educación sexual y reproductiva

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 15 millones de mujeres jóvenes entre 15 y 19 años así como 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la organización reconoce que algunos de estos embarazos son deseados y planificados sin embargo buena parte de ellos se dan en un contexto de comunidades empobrecidas, poco instruidas y rurales (OMS, 2018). Se establece entonces que una de las causas más importantes del embarazo no planificado y precoz es la falta de educación sexual y reproductiva a nivel nacional y no solo ello sino que incide el costo de los anticonceptivos y los valores morales asociados con el pudor o la vergüenza para solicitar servicios anticonceptivos. De las mujeres encuestadas que afirmaron haber recibido en algún momento información sobre el uso y la variedad de

Figura 2.4. Información: Métodos anticonceptivos



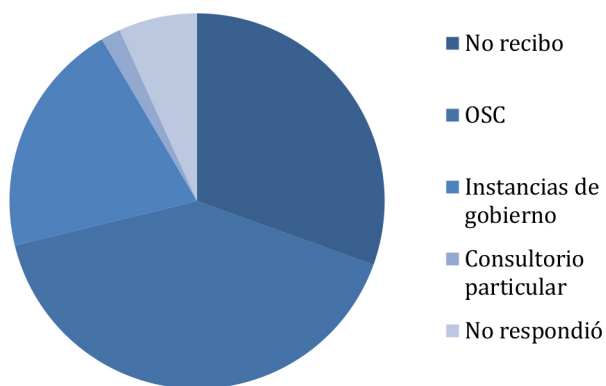
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol A.C., 2019)

métodos anticonceptivos, mencionaron que esta información fue proporcionada instancias de gobierno y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Un número similar reporta no haber recibido ninguna información a lo largo de sus vidas, lo cual evidencia dificultades en el acceso así como desconocimiento sobre la variedad de métodos anticonceptivos, además impide conocer efectos en la salud de prácticas sexuales de riesgo. En las Figuras 2.5 y subsecuentes se muestran las cifras de mujeres que han recibido información sobre educación sexual.

Por otro lado, entre las consecuencias de prácticas sexuales de riesgo podemos encontrar las enfermedades de transmisión sexual (ETS) como el VIH/SIDA y otras infecciones; también embarazos no planeados, y en algunas ocasiones no deseados desconociendo alternativas de acción como la interrupción legal del aborto (ILE).

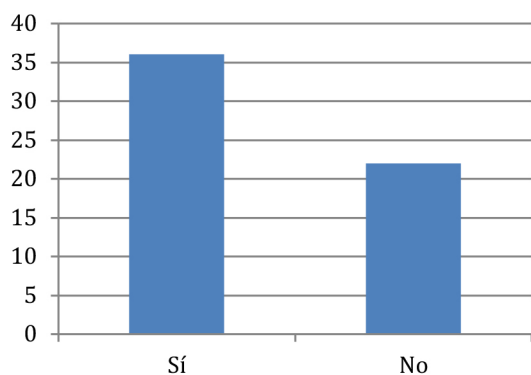
Se considera como prioritario que las mujeres cuenten con la información oportuna en lo tocante a educación sexual y sus derechos sexuales y reproductivos. Por lo tanto, se debe contar con mayores esfuerzos tanto gubernamentales como de la sociedad civil para favorecer y facilitar el acceso a esta; y que, a su vez, les sean brindados métodos anticonceptivos, anticonceptivos de emergencia así como información y práctica de la ILE por parte de las instituciones de salud pública.

Figura 2.5 Información: VIH/ETS

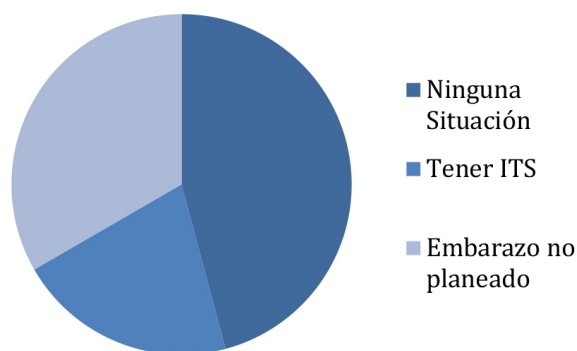


Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol A.C., 2019)

Figura 2.6 Uso de anticonceptivos



Consecuencias de no usar método anticonceptivo



Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol A.C., 2019)

Es necesario mencionar, que la mayoría de las mujeres que respondieron a la encuesta afirmaron utilizar métodos anticonceptivos en sus relaciones sexuales aun cuando asumieron como propia la decisión de no utilizarlos (lo cual puede ser entendido desde la naturalización de pautas de conducta violentas en la pareja), pero todavía algunas de las encuestadas no lo hacen y una gran parte ha sufrido afectaciones como infecciones o enfermedades de transmisión sexual y/o embarazos no planeados.

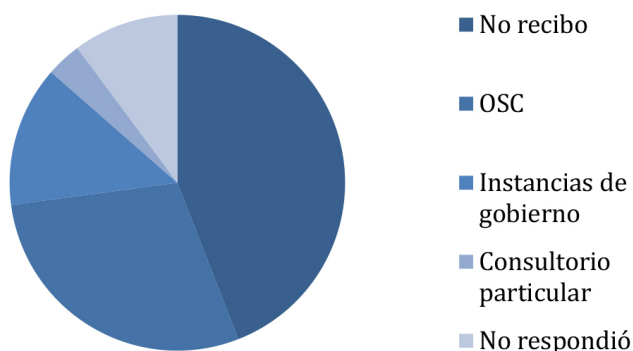
Así mismo, la planificación familiar es un tema que debe tratarse oportunamente, si bien es cierto que la educación sexual tiene como principales aristas el conocimiento de los métodos anticonceptivos y las ETS, también se deben desmotar valores morales asociado con la pobreza y con qué mujeres pueden tener hijos o no, es decir no se deben reproducir estereotipos de maternidades que sancionen a ciertas mujeres como aptas y a otras como no aptas, sino que, con base en programas de educación sexual progresistas se reconozca el derecho de las mujeres a procrear así como a abstenerse de ello, es decir que sus decisiones sean libres e informadas. De igual manera se considera que es necesario que sean informadas sobre los apoyos con los que cuentan al momento de decidir procrear para lograr el pleno desarrollo de sus hijos e hijas y de ellas mismas como mujeres. Sin embargo, la mayoría de las mujeres encuestadas reconocen que carecieron de las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas aunque esto no impidió que en el transcurso de sus maternajes desarrollaran las capacidades necesarias para darle sustento, afecto y educación a sus hijos, acordes con la situaciones particulares que experimentaban.

Se debe reconocer que las desventajas educativas para las madres representan una clara desventaja social que impide la mejora en la calidad de vida, y además representarán un obstáculo para la movilidad social de sus hijos, perpetuando las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de las que son herederos. México, al ser un país profundamente desigual reproduce en las generaciones subsecuentes las carencias de los progenitores y las justifica como falencias

individuales, mientras que muestra los privilegios de los que unos pocos pueden gozar como méritos justamente ganados en vez de condicionantes altamente decisivas debidas a la posición social de nacimiento.

Como se muestra en la Figura 2.7, muchas de ellas no han recibido ese tipo de información, y quienes principalmente se encargan de elaborar métodos de enseñanza para una adecuada planificación familiar mostraron ser las OSC que han reconocido la problemática en sus múltiples dimensiones, por lo tanto el gobierno debe crear acciones tomando como base las buenas prácticas que ya se han llevado a cabo previamente por estas instancias y buscar que sus servidores públicos sean capacitados y sensibilizados en la atención a grupos vulnerables, reflexionando sobre los prejuicios desde los que habían partido para atender a la ciudadanía.

Figura 2.7 Información: Planificación Familiar



Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol A.C., 2019)

La educación debe ser integral y adecuada con el contexto del país y de las zonas a las que se asista, ya que sin un conocimiento previo de las situaciones particulares que enfrenta cada comunidad o segmento poblacional se complica una enseñanza calidad y contextualizada, considerando que las necesidades educativas dependerán de las características socioculturales de las regiones del país. Es por ello que se requiere la elaboración de políticas públicas con base en investigaciones específicas e idóneas para cada uno de los contextos que existen en el país; así como mejorar las condiciones de los espacios educativos, tanto de la infraestructura como de la calidad de la enseñanza.

Acciones y programas de atención

Para hacer frente a los problemas de educación en adultos y adultas en México, el país cuenta con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el cual trabaja para reducir la tasa de analfabetismo del 4 al 3.8% para fines del 2019 entre la población joven y adulta de 15 años y más. Para lograr la meta acordada el instituto cuenta con distintas estrategias específicas y diferenciadas para atender los requerimientos de cada grupo social en todo el país. Una de las estrategias de dicho instituto es el programa educativo Modelo: Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), el cual atiende a 900 mil personas al mes en nivel básico, primaria y secundaria. Ha sido un esfuerzo que ha dado grandes frutos, sin embargo no ha alcanzado a toda la población objetivo pues su difusión es escasa.

Ciudad de México

Nombre del Programa	Alfabetización	Primaria	Secundaria
Descripción del programa	Los jóvenes o adultos que no sepan leer y escribir o que deseen incorporarse al nivel inicial podrán formar parte de los servicios de alfabetización otorgados por el INEA.	El INEA de la Ciudad de México brinda clases en línea para personas adultas a nivel primaria.	El INEA de la Ciudad de México brinda clases en línea para personas adultas a nivel secundaria.
Requisitos	<p>Presentar acta de nacimiento o documento legal equivalente (copia fotostática legible), y/o CURP. (Se acepta como documento válido para la Inscripción y Certificación).</p> <p>*Se da atención a los educandos que requieran el servicio y que no cuenten con documentos, pero ante esta situación, no se les otorga la Constancia de Alfabetización.</p>	<p>Presentar original y copia legible de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acta de Nacimiento o Documento legal Equivalente, y/o CURP. - Boleta(s) de grado(s) aprobado(s) del sistema escolarizado (sólo si cuenta con ellas). - 2 fotografías tamaño infantil reciente, de frente, con el rostro descubierto, en blanco y negro o a color, con fondo blanco, ropa clara e impresas en papel mate (una será utilizada para la credencial y otra para el certificado). 	<p>Presentar original y copia legible de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificado de Primaria - Acta de Nacimiento o Documento legal Equivalente, y/o CURP. -Boleta(s) de grado(s) aprobado(s) del sistema escolarizado (sólo si cuenta con ellas). - 2 fotografías tamaño infantil reciente, de frente, con el rostro descubierto, en blanco y negro o a color, con fondo blanco, ropa clara e impresas en papel mate (una será utilizada para la credencial y otra para el certificado).
Fuente consultada	http://cdmx.inea.gob.mx/RequisitosInscripcion.html		

Tijuana

Nombre del Programa	Primaria	Secundaria
Descripción del programa	Se brindan cursos en línea con realización de exámenes presenciales para personas mayores de 15 años que no hayan concluido o no tengan el nivel primaria. Se entrega un certificado con validez oficial al finalizar los cursos.	Se brindan cursos en línea con realización de exámenes presenciales para personas mayores de 15 años que no hayan concluido o no tengan el nivel secundaria. Se entrega un certificado con validez oficial al finalizar los cursos.
Requisitos	<ul style="list-style-type: none"> -Original y copia del acta de nacimiento o CURP. -Fotografía tamaño infantil (con camisa blanca). 	<ul style="list-style-type: none"> -Original y copia de tu certificado de Primaria -Original y copia del acta de nacimiento o CURP. -Fotografía tamaño infantil (con camisa blanca).
Fuente consultada	http://bajacalifornia.inea.gob.mx/termina-tu-primaria-o-secundaria/	

Puebla

Nombre del Programa	Programa operativo anual (POA)	Programa de Certificación (PEC)	Alfabetización, primaria y secundaria
Descripción del programa	Reduce la desigualdad educativa en la población hispanohablante de 15 años o más -Brinda servicios educativos a grupos prioritarios que se encuentran en desigualdad educativa Costo: Gratuito	El programa pretende reconocer, y en su caso acreditar y certificar los conocimientos adquiridos de manera autodidacta o por experiencia laboral de las personas mayores de 15 años o más en rezago educativo en primaria o secundaria. Costo: Gratuito	El programa busca generar habilidades básicas de lectura, escritura y cálculo escrito, como herramientas para poder enfrentar situaciones elementales de su vida cotidiana para personas mayores de 15 años que no saben leer y escribir, que no completaron el nivel primaria o que no completaron el nivel secundaria.
Requisitos	Acta de nacimiento o CURP -2 Fotografías tamaño infantil -Formato de Registro del Beneficiario	Para Nivel Primaria: -Formato de registro del Beneficiario -Evaluación de aprendizajes no formales -2 Fotografías digital -Ejercicio diagnóstico PEC Para Nivel Secundaria: -Formato de registro del Beneficiario -Evaluación de aprendizajes no formales -Fotografía digital -Ejercicio diagnóstico PEC -Certificado de Primaria (Para Secundaria)	-Acta de nacimiento original y copia -CURP original y copia -2 fotografías tamaño infantil, blanco y negro en papel mate adherible -Identificación oficial Alguno de los siguientes documentos puede utilizarse como identificación oficial: - INE - Cartilla o Precartilla de Servicio Militar - Documento de Transferencia del estudiante migrante - Ficha señalética expedida por el Director del Centro de Readaptación Social - Carta de naturalización - Pasaporte Costo: Gratuito
Fuente consultada	http://puebla.inea.gob.mx/poa.html	http://puebla.inea.gob.mx/pec.html	http://puebla.inea.gob.mx/

Acapulco

Nombre del Programa	Alfabetización	Primaria	Secundaria
Descripción del programa	Los jóvenes o adultos que no sepan leer y escribir o que deseen incorporarse al nivel inicial podrán formar parte de los servicios de alfabetización otorgados por el instituto.	El instituto brinda clases presenciales para personas adultas a nivel primaria.	El instituto brinda clases presenciales para personas adultas a nivel secundaria.
Requisitos	<p>Presentar acta de nacimiento o documento legal equivalente (copia fotostática legible), y/o CURP. (Se acepta como documento válido para la Inscripción y Certificación).</p> <p>*Se da atención a los educandos que requieran el servicio y que no cuenten con documentos, pero ante esta situación, no se les otorga la Constancia de Alfabetización.</p>	<p>Presentar original y copia legible de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acta de Nacimiento o Documento legal Equivalente, y/o CURP. - Boleta(s) de grado(s) aprobado(s) del sistema escolarizado (sólo si cuenta con ellas). - 2 fotografías tamaño infantil reciente, de frente, con el rostro descubierto, en blanco y negro o a color, con fondo blanco, ropa clara e impresas en papel mate (una será utilizada para la credencial y otra para el certificado). 	<p>Presentar original y copia legible de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificado de Primaria - Acta de Nacimiento o Documento legal Equivalente, y/o CURP. - Boleta(s) de grado(s) aprobado(s) del sistema escolarizado (sólo si cuenta con ellas). - 2 fotografías tamaño infantil reciente, de frente, con el rostro descubierto, en blanco y negro o a color, con fondo blanco, ropa clara e impresas en papel mate (una será utilizada para la credencial y otra para el certificado).
Fuente consultada	Mediante llamada telefónica al Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (Tel. 744 441 5822)		

Guadalajara

Nombre del Programa	Alfabetización	Modelo pedagógico para adultos (MPEPA)	Modelo de educación para la Vida (MEV)	Secundaria abierta para adultos
Descripción del programa	Propicia en los adultos el desarrollo de habilidades elementales de matemáticas básicas, lectura y escritura, que les permitan en forma continua y permanente, mejorar sus competencias comunicativas.	-Propicia el desarrollo de competencias en el adulto, que le permitan apropiarse en forma continua y autónoma de los conocimientos de la primaria para adultos	-Propicia en los adultos el desarrollo de habilidades elementales de matemáticas básicas, lectura y escritura, que les permitan en forma continua y permanente, mejorar sus competencias comunicativas.	Proporciona a las personas jóvenes y adultas con primaria terminada, los contenidos de la secundaria que rigen el Sistema Educativo Nacional.
Requisitos	Presentar: -Clave Única de Registro de Población (CURP) -Copia certificada y fotostática del acta de nacimiento o documento alterno.	Presentar: -Clave Única de Registro de Población Presentar copia certificada y fotostática del acta de nacimiento o documento alterno. *En caso de que el educando no cuente con la copia certificada del acta de nacimiento, el instituto estatal deberá inscribirlos siempre y cuando el adulto firme una Carta-compromiso temporal, en la cual se responsabilice a realizar el trámite correspondiente para obtenerla. La fecha límite para la entrega de la copia certificada del acta de nacimiento será antes de la presentación del último examen del módulo para certificar ya sea la educación primaria (nivel intermedio) o la educación secundaria (nivel avanzado), según corresponda. -Llenar ficha del educando	Presentar: -Clave Única de Registro de Población (CURP). - Presentar copia certificada y fotostática del acta de nacimiento o documento alterno.	Para cubrir los requisitos, los jóvenes y adultos podrán contar con la orientación y apoyo del asesor y el técnico docente, personal de la coordinación de zona o del instituto estatal.
Fuente consultada	http://www.oocities.org/ineajalisco/alfa.html	http://www.oocities.org/ineajalisco/mpepa.html	http://www.oocities.org/ineajalisco/mev.html	http://www.oocities.org/ineajalisco/secab.html

Derecho al trabajo y derechos de la trabajadora

Carla es una mujer de 37 años de edad oriunda de Guerrero que vive en las calles de la Ciudad de México. Salió de su hogar cuando tenía 12 años por temor a ser agredida nuevamente por su tío, que abusaba de ella constantemente. Tomó el valor de dejar todo lo que conocía para aventurarse en un nuevo mundo. Lo hizo con ayuda de su vecina, que al darse cuenta de la situación de violencia física, psicológica y sexual por la que pasaba la apoyó para que pudiera llegar a la capital del país, sin embargo no le dio seguimiento a su vida, dejándola sin un sistema de apoyo que le garantizara un desarrollo integral.

Al encontrarse sola se vio obligada a trabajar limpiando parabrisas en las caóticas avenidas y calles de la ciudad. Como era una niña pequeña, la gente le daba dinero, dulces, comida, entre otras cosas, casi sin problema; pero con el paso del tiempo, conforme fue creciendo ya no la miraban igual, dejaron de obsequiarle. Las personas no solamente la ignoraban y rechazaban, sino que había ocasiones que la insultaban y la agredían, ocasionando que se deprimiera y no supiera qué hacer con su vida.

Reconoce que fue un periodo difícil pero considera que supo superarlo. Cuando entró a la adolescencia comenzó a vender productos en la vía pública y en el metro para obtener los recursos económicos necesarios que le permitan comprar su alimento al día, ropa, cosas personales y en ocasiones drogas. Sin embargo pagar una renta o encontrar un espacio en donde dormir le fue imposible, considerando que la Ciudad de México

es la ciudad más cara para vivir en América Latina (Encuesta Mundial de Costo de Vida, 2019).

Carla expresó que sí ha intentado encontrar trabajos formales pero que por la falta de algunos documentos de identidad, de la escolaridad requerida, y por el horario inflexible que no le permite atender y cuidar a sus dos hijos, no los ha podido conseguir.

Lo que más le disgusta de trabajar informalmente en calle es que los policías la desalojen y no la dejen trabajar en paz, que la vean como si estuviera haciendo algo malo; y que a veces cuando la van a llevar estén cinco o seis personas alrededor viéndola como si se fuera a fugar. Todo ello la hace sentir humillada y culpable de cosas que desconoce.

Ha aprendido a disfrutar de su trabajo, en las pequeñas victorias que este le concede: su trabajo no tiene un jefe o autoridad que le diga qué hacer y a qué hora entrar, cuándo parar o seguir, más allá de los ritmos propios de la ciudad y de sus obligaciones. Le gusta ser independiente y tomar sus propias decisiones, como lo ha hecho desde pequeña. •



Marco normativo

El trabajo es indispensable para que las personas se desarrollen en otros aspectos de su vida; es un rol básico que desempeñan los seres humanos para satisfacer sus necesidades económicas por un lado y para sentirse útiles por el otro, por lo tanto es considerado un Derecho Humano prioritario, dado que sin éste muchos otros derechos se verían bloqueados.

A su vez, las personas dentro de un campo laboral tienen derechos que les permiten asegurar su estabilidad en otras áreas (Ej. Familia, esparcimiento), les reconoce un trabajo justo con remuneración justa, les previene de peligros que puedan afectar su salud, entre otras garantías.

Las mujeres en el transcurso de la historia han luchado por sus derechos laborales, en busca del disfrute pleno de sus capacidades y deseos, y por un cambio del paradigma social que avala y defiende los estereotipos de género que limitan la vida plena de las féminas. Como consecuencia de dichas luchas sociales se han obtenido logros que permiten avanzar a un mundo más equitativo y justo.

Por su parte, las instituciones internacionales han expresado su interés por proteger la dignidad humana de las personas y trabajadoras mediante la creación de instrumentos que hagan valer sus derechos. Enseguida se enlistan algunos esfuerzos de organismos internacionales:

- Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) (artículos 17, 22, 23 y 24).
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), (artículos 6, 7, 8 y 9).
- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), (artículos 11, 13 y 14).
- Protocolo de San Salvador, (artículos 6, 7 y 8).
- Observación General núm. 17. Derechos del niño, (artículo 24, párr. 3).
- Observación General núm. 18. Derechos al trabajo, párrafos. 23 a 26.

- Convenio núm. 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, (artículo 3).
- Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, (artículos 1 y 6).
- Carta de la OEA, (artículos 34, 45 y 46).
- Carta Democrática Interamericana, (artículo 10)
- Declaración Americana, (artículos 14, 15, 16, 21, 22 y 23).
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), (artículo 8).
- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 18: El Derecho al Trabajo; Observación General 16: La Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer al Disfrute de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) No. 111
- Convenio sobre igualdad de remuneración No. 100
- Convención de Belém do Pará, artículo 2b
- Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189)

Las mujeres pertenecientes a las poblaciones callejeras experimentan ciertos obstáculos para poder gozar de los derechos que les pertenecen, entre ellos obtener un empleo justo en el cual se respeten el resto de sus derechos laborales y se les garantice el bienestar propio y de quienes las rodean; en la Tabla 1 se presentan las obligaciones específicas que tiene el Estado para satisfacer los derechos humanos de las poblaciones callejeras en general y de las mujeres en particular, con respecto al tema laboral.

Tabla 3.1. Obligaciones y normatividad en materia de trabajo

Derecho humano	Obligaciones reforzadas en el marco del principio de igualdad y no discriminación	Elementos normativos y obligaciones
Al trabajo	<p>a) Respetar la libre elección de su ocupación.</p> <p>b) Otorgar distintas posibilidades de empleo que les permitan dejar la calle. (fuentes de recursos dignos)</p> <p>c) Vigilar que las personas que forman parte de las poblaciones callejeras reciban todas las prestaciones laborales a las cuales tienen derecho.</p>	<p>a) Implementar acciones para facilitar la incorporación a empleos formales.</p> <p>b) Establecer medidas para la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres</p> <p>c) Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia</p>
A la propiedad individual y colectiva	<p>a) Facilitar el acceso a prestaciones familiares y a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero.</p> <p>b) Facilitar la organización de grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena.</p>	<p>a) Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el uso y aprovechamiento de los derechos reales de propiedad, así como el uso, goce y disfrute de la tierra, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios.</p> <p>b) Diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza con perspectiva de género.</p>
A la previsión y seguridad sociales		Impulsar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no discriminación de mujeres y de hombres en materia de trabajo y previsión social.
Al trabajo en condiciones de igualdad y no discriminación	<p>a) Analizar mediante un escrutinio estricto y de forma pormenorizada las leyes, normas, prácticas y políticas públicas que en su texto establezcan diferencias con base en el sexo, o que en la práctica puedan tener un impacto discriminatorio en las mujeres en el ejercicio de su derecho al trabajo.</p> <p>b) Adoptar medidas legislativas para reconocer formalmente el trabajo no remunerado de las mujeres, y conceder beneficios similares al trabajo remunerado, en particular en el ámbito de la seguridad social.</p> <p>c) Adoptar políticas que tomen en cuenta la intersección de formas de discriminación en la esfera laboral por razón de factores de riesgo combinados. Adoptar medidas para ofrecer protecciones laborales en el marco normativo en beneficio de las mujeres que trabajan en el sector informal, las trabajadoras domésticas, las mujeres que laboran en las maquilas, entre otros grupos.</p>	<p>a) Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres.</p> <p>b) Establecer medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres.</p> <p>c) Promover la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores que relegan la incorporación de las personas al mercado de trabajo.</p> <p>d) Adoptar medidas orientadas a la creación de guarderías y salas cunas.</p>
A igual remuneración por igual trabajo	<p>a) Identificar y eliminar las causas subyacentes de las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres como concepciones equivocadas de que existen diferencias de productividad entre el hombre y la mujer.</p> <p>b) Adoptar las medidas necesarias – legislativas, políticas y programáticas – para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor, tanto en el sector formal como informal.</p>	
A la maternidad y paternidad	<p>a) Adoptar una política estatal integral para garantizar los derechos de las mujeres durante el embarazo, incluyendo la garantía de un mínimo de catorce semanas de licencia de maternidad pagada en los términos comprendidos en el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).</p> <p>b) protecciones contra el despido y otro maltrato laboral durante el embarazo; la adopción de leyes orientadas al periodo de lactancia</p> <p>c) adopción de licencias de paternidad y parentales.</p>	
A la asociación, reunión y huelga	Permitir a los hombres y a las mujeres que funden asociaciones profesionales para atender a sus problemas específicos, prestándose particular atención a los trabajadores domésticos, a las mujeres de las zonas rurales, a las mujeres que trabajan en industrias predominantemente femeninas, y a las mujeres que trabajan en el hogar.	
Al trabajo libre de violencia	<p>a) Garantizar la debida diligencia para que todos los casos de violencia por razón de género en el ámbito laboral sean objeto de una investigación oportuna, completa e imparcial, así como la adecuada sanción de los responsables y la reparación de las víctimas.</p> <p>b) Adoptar medidas legislativas para sancionar el acoso sexual – en el ámbito penal, civil y administrativo – y el acompañar estas medidas con regulaciones y la capacitación necesarias para los funcionarios encargados de implementar la ley.</p>	Diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo.

Fuente: Elaboración propia con base en los instrumentos listados.

México ha asumido responsabilidades internacionales para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadoras, así como de asegurar el empleo a su población activa; por lo tanto se han creado instrumentos nacionales y locales que fortalecen y guían a la sociedad mexicana a dichos objetivos. Algunos de ellos se enlistan a continuación:

Tabla 3.2. Marco normativo nacional en materia de trabajo

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1, 5, 6, 27 y 123); Ley General Para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres (artículo 17, fracciones IV y VIII; artículo 33, fracción V y artículo 34, fracción X); Ley General de Salud (artículo 77 bis.); Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (artículo 45, fracción IX y artículo 46 Bis, fracción I, II y IV); Ley Federal del Trabajo; Ley del Seguro Social				
Acapulco	Tijuana	Guadalajara	Ciudad de México	Puebla
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, art. 5, fracción XI y art. 6, fracción I	Ley de Asistencia Social para el Estado de Baja California, art. 4, frcc. VII y IX; art. 10, frcc. IX Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico para el Estado de Baja California, art. 4, frcc. II, incisos a, d, g, i y p; art. 10, frcc. III y IX; art. 13, frcc. I, esquema 4, 22 bis. Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California, art. 6, frcc. II, IX y XIV Ley de Población del Estado de Baja California, art. 42, frcc. XII	Constitución Política del Estado de Jalisco art. 4; art. 6 frcc. II inciso c Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco art. 7, frcc. VI; art. 16, frcc. III Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres art. 7 frcc. V, VIII, IX, XI, XVII, XIX y XXII Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco art. 8, art. 11, frcc. II y art. 32 frcc. I, II, III, IV y V Ley Estatal para promover la Igualdad, prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco art. 24 frcc. V; art. 30 frcc. II Ley Estatal para la Igualdad entre hombres y mujeres art. 14 y art. 52 frcc. I, II, IV y V	Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal artículos 6°, fracciones iii, iv y v; 25, fracciones ii y iii; y 32 fracción ix Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal artículo 12, fracción ii Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal artículo 1°, fracciones ii y viii) Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal artículo 6° Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal artículo 11, fracciones i y ii Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal artículo 5°, fracción iii Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal artículo 5°, fracciones v, xv y xvii.	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla art.7, 12 fr.XIII, 16, 123 Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla art.31,32,33,34,36 fr.IV,38 fr.I-II Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla art.3 fr.II, 6 bis, 12,13,16 Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla art. 14 fr.XI, 16 bis, 33 Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla art.9

Testimonios recopilados en encuestas

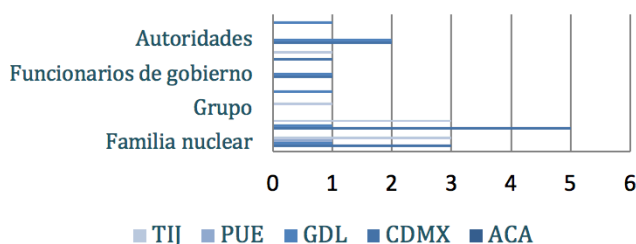
Diversos valores y normas practicados en la cultura mexicana impiden que las mujeres se desenvuelvan en el ámbito profesional, privándolas del estudio y del desempeño de un trabajo. Se reconoce que los roles de género en México han obstaculizado el desarrollo libre de sus capacidades.

Como resultado, México se encuentra en la posición 122 con respecto a las oportunidades económicas y laborales de las mujeres, de acuerdo con un estudio realizado por el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés). Lo anterior se ve reflejado en la tasa de desempleo del 9.1% en las mujeres, en comparación con el 6.3% en los hombres (OIT, 2013).

En este tenor se presentan los resultados de la Encuesta sobre Condiciones de Vida de Mujeres que Viven en la Calle (El Caracol A.C., 2019) realizada en cinco ciudades del país a mujeres pertenecientes a la población callejera, con las cuales se obtuvieron estadísticas e información sobre dichas privaciones.

En la Figura 3.1 se presentan los principales actores que se niegan directamente a que las mujeres que habitan las calles puedan gozar de su derecho a capacitarse, estudiar o emplearse. Cabe resaltar que dichas prohibiciones inhiben el desarrollo y el desempeño de mujeres con un alto potencial y capacidad de laborar, negándoles el derecho a vivir de forma independiente económicamente y formar su propio patrimonio.

Figura 3.1. Agentes que han prohibido estudiar o trabajar

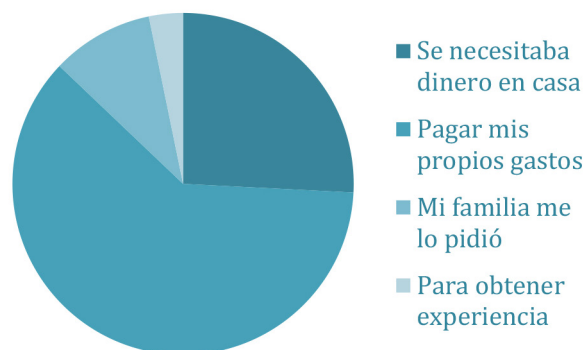


La cultura patriarcal combinada con el mercado de trabajo caracterizado por la flexibilidad, inseguridad en el empleo y una creciente precariedad también provoca que un sector importante de mujeres deba laborar en condiciones con alta vulnerabilidad y en puestos con bajo sueldo que no alcanza para solventar los gastos familiares (Bañales, 2019), entre ellas se encuentran las pertenecientes a la población callejera.

En el caso específico de las mujeres encuestadas, el 50% respondió que sí trabajaban. Debemos de considerar que el restante se dedica a la mendicidad, o a la economía subterránea. Por otro lado, a través de la Figura 3.2 podemos observar las razones presentadas por las cuales comenzaron a laborar; se encuentra a la cabeza “pagar los propios gastos” aunque le sigue la necesidad de dinero en sus familias, es decir, la demanda no solamente es individual sino que responde a la apremiante situación económica de los núcleos familiares que deciden enviarlas al mercado laboral a temprana edad y obstruyendo continuar con su preparación académica.

Se contó también con información sobre el destino del recurso económico obtenido por las labores realizadas, pues los gastos referidos no son exclusivamente individuales sino que las mujeres se muestran como el principal sostén económico

Figura 3.2. Motivos para trabajar

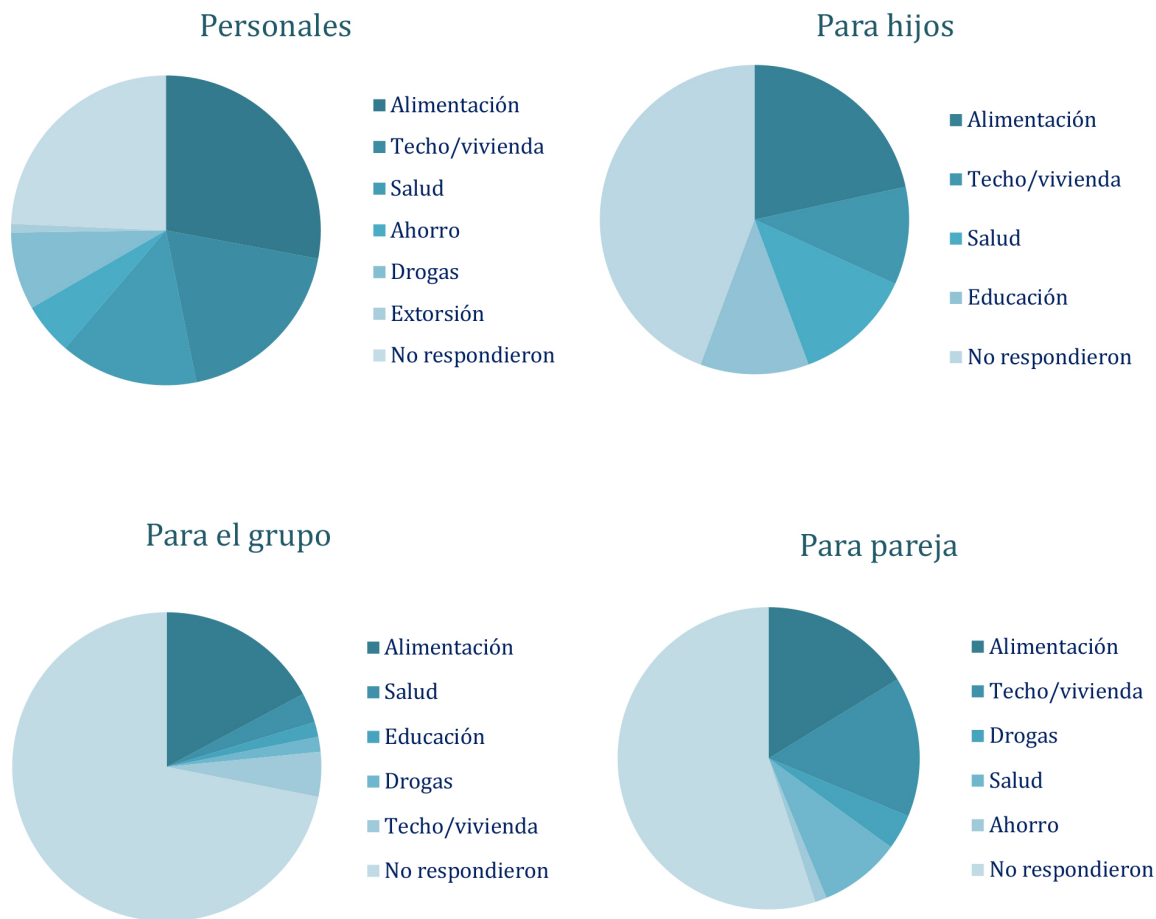


Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol A.C., 2019)

de sus familias, encargadas primordialmente de la manutención y cuidado de los hijos, lo cual precariza todavía más su situación social y económica pues al contar con un ingreso bajo tiene que ser distribuido entre los hijos, el grupo y la pareja. La mayoría de las mujeres encuestadas destina su dinero a la alimentación, seguida por el techo o vivienda (incluido en este rubro la renta de cuartos o habitaciones de hotel), en menor medida en la salud y muy pocas en drogas.

En la Figura 3.3 se muestran los resultados divididos en los cuatro tipos de gastos (personales, pareja, hijos, grupo), así como los productos y servicios que adquieren.

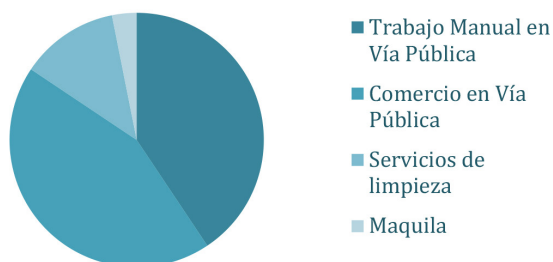
Figura 3.3. Gastos de las mujeres



Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol A.C., 2019)

La mayoría de las mujeres que viven y sobreviven en las calles en México trabajan en subempleos de bajo ingreso (OIT, 2013), es decir que sus ingresos son inferiores al mínimo legal, a pesar de trabajar en jornadas completas (limpiando parabrisas, realizando actividades de entretenimiento para los transeúntes y automovilistas, vendiendo productos en la vía pública o transporte público, haciendo servicio de limpieza en empresas o en casas habitación y en maquiladoras de acuerdo con la encuesta realizada mostrado a través de la Figura 3.4). Al mismo tiempo esos trabajos se clasifican en la categoría de empleo informal, entendido como la relación de trabajo, de derecho o de hecho, que no está sujeta a la legislación laboral nacional, el impuesto sobre la renta, la protección social o determinadas prestaciones relacionadas con él (OIT, 2013).

Figura 3.4. Principales trabajos



Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol A.C., 2019)

A partir de las inconsistencias que tiene el empleo informal se pueden desprender situaciones como el impago del salario, los despidos arbitrarios y sin compensaciones, la explotación laboral, la exigencia de trabajar horas y turnos extras y el nulo cumplimiento de los beneficios sociales, lo cual vulnera no solo sus derechos laborales sino el goce de otros derechos que se hallan concatenados como el acceso a la salud, la educación, la justicia, derecho a la vivienda y el derecho a la vida.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) estima que el 42% de las féminas que se emplean en empresas maquiladoras sufre violencia o acoso por parte de

sus empleadores, y reciben salarios 30% inferiores y trabajan 12 horas más de jornada semanal que sus compañeros hombres (Bañales, 2019).

Por otro lado, cuando el empleo es por cuenta propia, las mujeres se ven agredidas por no pagar impuestos o supuestamente molestar a las personas que se encuentran en el área de trabajo. En relación con este tipo de empleos, las respuestas más comunes que se dieron en la Encuesta sobre Condiciones de Vida de Mujeres que Viven en la Calle (El Caracol A.C., 2019) para responder lo que creían ellas que era necesario para que el desempeño en su trabajo no se viera afectado fueron: “Trabajar en la calle sin ser humilladas y agredidas”, “no ser discriminadas”, “contar con herramientas para el trabajo” y “no queremos más agresiones por parte de los policías”. Dichas declaraciones son importantes para detectar las faltas a sus derechos humanos (directas e indirectas) por parte de la sociedad y del gobierno.

Según ONU Mujeres (2015) las probabilidades de que las mujeres trabajen en el sector informal son más altas que las de los hombres, y dentro del contexto que viven las poblaciones callejeras la situación empeora. Las mujeres encuestadas consideraban necesario conseguir un empleo formal, ya que desean mejores condiciones laborales “para salir adelante” y la oportunidad de demostrar que lo pueden hacer, sin embargo se encuentran con muchas trabas jurídicas y con prejuicios para que las acepten en alguno.

Aunado a esto, las mujeres pertenecientes a la población callejera no solamente trabajan como pilar de la economía familiar sino que también realizan labores domésticas y de cuidados no remuneradas. Aun cuando estas labores representaron en 2017 el 23.3% del producto interno bruto, de acuerdo con las cifras de la *Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México* esto no se ve reflejado en la mejora de la calidad de vida de las mujeres; de acuerdo con el mismo documento, la población femenina dedica aproximadamente 76.7 horas en comparación con las 23.3 horas que dedican los hombres a las mismas labores (INEGI, 2018b)

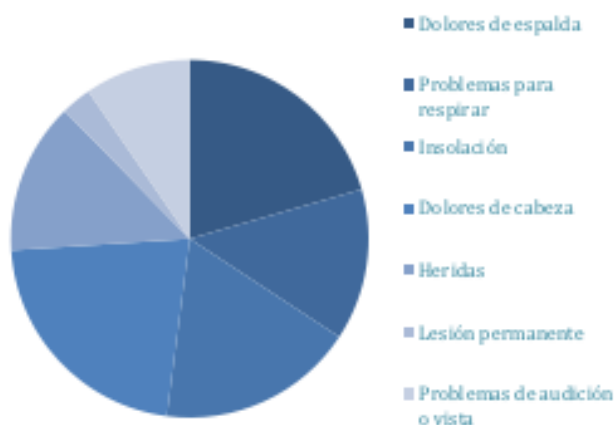
Consideremos que el trabajo que realizan las mujeres integrantes de la población callejera no solamente incluye labores en el hogar (que puede ser prestado, rentado, hotel, temporal o calle) sino también las compras de bienes de consumo, autoconstrucción, proporción de cuidados al grupo, servicio a su comunidad, apoyo a otras personas en sus labores, la alimentación de los hijos y otros miembros del grupo, así como de la limpieza y mantenimiento del espacio que ocupan, a diferencia de sus pares varones. Aun los estereotipos de género asocian estas actividades exclusivamente con lo femenino por lo cual en la calle y en los espacios de renta o préstamo ellas se asumen o son asumidas por los otros como las encargadas de dichas labores, lo cual señala la necesidad de equilibrar estas prácticas.

De acuerdo con Silvia Federici: “el diferencial entre mujeres y hombres [...] debía interpretarse como el efecto de un sistema social de producción que no reconoce la producción y reproducción del trabajo como una actividad socio-económica y como una fuente de acumulación del capital y, en cambio, la mistifica como una un recurso natural o un servicio personal, al tiempo que saca provecho de la condición no-asalariada del trabajo involuado” (2010: 16). De tal modo, que en el imaginario social el trabajo no asalariado no es reconocido como trabajo, esta concepción incluye a las propias mujeres quienes solo perciben el efecto en su salud aun sin reconocer la causa que sería el desgaste físico y emocional debido a las labores de cuidado, así como disminución de tiempo para realizar labores remuneradas y por tanto afectación en la economía individual o familiar.

Con base en los datos recabados a través de la encuesta se calculó que las mujeres pertenecientes a las poblaciones callejeras trabajan en promedio ocho horas y ganan 150 pesos diarios, sin embargo hay mujeres que pueden llegar a ganar solamente 50 pesos al día, e incluso no percibir ingreso. Las horas trabajadas en promedio por ellas entran en el rango normal establecido en las leyes mexicanas, pero por otro lado, el salario mínimo actual en el país es de 102.68 pesos, por lo que la mayoría de ellas viven con un sueldo que les alcanza para lo básico o que no les alcanza siquiera.

Por otro lado, el trabajo que desempeñan no respeta su dignidad como personas, ya que el exceso de esfuerzos físicos en el desempeño de sus empleos en condiciones poco favorecedoras y la falta de atenciones médicas provoca que desarrollen problemas de salud. Los más comunes son los dolores de espalda, la insolación, los problemas para respirar, los dolores de cabeza y las heridas y las lesiones permanentes, mostrados en la Figura 3.5.

Figura 3.5. Efectos en la salud derivados del trabajo



Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol A.C., 2019)

El trabajar en condiciones que les provocan daño a la salud es a su vez una vulneración a su derecho al trabajo seguro y un ambiente laboral saludable, establecido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en general y en el artículo 13 del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos (OIT, 2011) en particular para los y las trabajadoras domésticas.

Los problemas personales también son comunes en las mujeres pertenecientes a las poblaciones callejeras ocasionadas por el tipo de empleos que tienen, las condiciones de los mismos y las demandas que les son impuestas tanto por la sociedad como por sus pares. Con base en la encuesta se pudo observar (Figura 3.4) que las

consecuencias derivadas de su actividad laboral fueron: problemas con su pareja, con la justicia, conflictos con la familia y tuvieron que abandonar la escuela. Cada uno de esos problemas afecta la salud mental y emocional de las personas, complicando la estabilidad en sus vidas y provocando un deterioro de los lazos afectivos y sana convivencia con la sociedad. Además de que les impiden observar los patrones de conducta violentos en sus relaciones pues les son exigidas múltiples actividades y recursos como dinero, tiempo, afecto y cuerpo por parte de diversos miembros de su familia y grupo. Es necesario señalar que la violencia que experimentan las mujeres se ha tornado moneda corriente y generalmente se ejerce por parte de policías y desconocidos. En la Ciudad de México, en Tijuana y en Guadalajara se encontraron casos en los cuales algún miembro de su mismo empleo las agredió: tres mujeres refieren haber sido agredidas por alguna persona de su trabajo en la Ciudad de México, mientras que cuatro refieren la misma situación en Tijuana y dos en Guadalajara.

Acciones y programas de atención

Como parte de la investigación se analizaron los programas gubernamentales que buscan garantizar el bienestar de la población por medio del acceso al empleo, en las cinco ciudades. Cabe mencionar que no existe uno en el cual se tomen en cuenta las características específicas que las poblaciones callejeras tienen y los empleos que ellos desempeñan. Por ejemplo, la falta de documentos oficiales y los empleos informales, respectivamente.

En el caso de Acapulco, no se encontraron programas gubernamentales en la materia de trabajo que puedan garantizarles un acceso al empleo digno y libre a las mujeres pertenecientes a las poblaciones callejeras.

Enseguida se presenta la serie de cuadros en los cuales se encuentran los programas que pudiesen ser útiles a las mujeres que viven, sobreviven y laboran en las calles. Cada cuadro cuenta con el nombre de los programas, una explicación de lo que ofrece al beneficiario y los requisitos para formar parte del programa.

Tabla 3.3 Guadalajara

Nombre del Programa	Apoyo al Empleo	Empleo temporal para el Beneficio de la Comunidad	Hecho por mujeres en Guadalajara
Descripción del programa	<p>-El beneficiario recibe un apoyo económico equivalente a 1.5 salarios mínimos vigentes por cada día efectivo de capacitación en grupos de hasta treinta beneficiarios.</p> <p>-Apoyo para transporte al beneficiario por un monto de \$20.00 (veinte pesos 00/100 moneda nacional) por cada día efectivo que asista al curso.</p> <p>-Curso de capacitación</p>	<p>-Compensación económica al servicio temporal de la población desempleada, con la finalidad que desarrollen una actividad por tiempo determinado en el marco de proyectos estatales y/o municipales de carácter gubernamental en beneficio de la comunidad.</p> <p>-Población: Personas que tengan dieciocho años y más, que se encuentren desempleadas o subempleadas con interés en participar en una actividad de carácter temporal en el marco de proyectos sociales promovidos por las instituciones públicas y municipios del estado de Jalisco.</p>	<p>-Apoyo mensual a mujeres por 12 meses.</p> <p>-Plan de capacitación y acompañamiento a grupos de mujeres.</p> <p>-Apoyo único para capital de inicio o capital semilla desde 20 mil hasta 100 mil pesos</p>
Requisitos	<p>-Identificación Oficial</p> <p>-CURP</p> <p>-Comprobante de domicilio</p>	<p>-Identificación Oficial</p> <p>-CURP</p> <p>-Comprobante de domicilio</p> <p>-Dos fotografías recientes tamaño infantil</p> <p>-Documento expedido por una Institución Bancaria con vigencia no mayor a dos meses, que muestre "CLABE" (Clave Bancaria Estandarizada de 18 dígitos), solo en el caso en el que disponga de una cuenta bancaria.</p>	<p>-Identificación Oficial</p> <p>-CURP</p> <p>-Comprobante de domicilio</p> <p>-Documento expedido por una Institución Bancaria con vigencia no mayor a dos meses, que muestre "CLABE" (Clave Bancaria Estandarizada de 18 dígitos), solo en el caso en el que disponga de una cuenta bancaria.</p>
Fuente consultada	https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/apoyo/Apoyo-al-Empleo/662/2019	https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/apoyo/Empleo-Temporal-para-el-Beneficio-de-la-Comunidad/346/2019 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/requisitos_1572_Requisitos_Empleo_Temporal_para_el_Beneficio_de_la_Comunidad.pdf	https://guadalajara.gob.mx/hecho-por-mujeres/

Tabla 3.4 Tijuana

Nombre del Programa	Programa de Apoyo al Empleo	Bécate	Atención a Solicitantes de Empleo en Vinculación Laboral
Descripción del programa	Brinda atención a la población buscadora de empleo, mediante la prestación de Servicios de Vinculación Laboral y/o apoyos económicos o en especie, con la finalidad de facilitar su colocación en un puesto de trabajo o actividad productiva. La población potencial del PAE está representada por todas aquellas personas que, se encuentran en búsqueda de empleo	Busca integrar al sector productivo a personas desempleadas a través de cursos de capacitación para el trabajo.	-Brindar atención a solicitantes en búsqueda de empleo. -La atención de un consejero para la orientación y vinculación a opciones de trabajo dentro de las oficinas del Servicio Nacional de Empleo.
Requisitos	-Presentar una identificación oficial con fotografía. -Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).	-Copia de la CURP - Formato de registro SNE-01 -Original y copia del INE y comprobante de domicilio	CURP
Fuente consultada	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/data/file/441291/ROPAE_2019_DOF.PDF	http://mibc.bajacalifornia.gob.mx/tramites-y-servicios/subprograma-becate	http://201.140.167.15/retys/

Tabla 3.5 Puebla

Nombre del Programa	Asesoría jurídica y psicológica
Descripción del programa	Proporcionar asesoría y orientación jurídica y psicológica a mujeres en situación de violencia y casos de naturaleza civil y familiar; se les informa sobre sus derechos, las características de los procesos judiciales y las opciones legales, teniendo como prioridad promover el acceso a la justicia. Las atenciones se otorgan de forma presencial y telefónica.
Fuente consultada	https://tramitapue.puebla.gob.mx/web/fichaAsunto.do?op=23&opcion=0&asas_ide_asu=2122&empezarPorPagina=1&nocache=0.16198511733440069

Tabla 3.6 Ciudad de México

Nombre del programa	Programa Fomento al Trabajo Digno	Asesoría, orientación y capacitación integral a mujeres de la Ciudad de México
Descripción del Programa	Se otorga en el corto plazo apoyo económico y capacitación para el trabajo, acceso a proyectos de ocupación temporal en acuerdos institucionales, recursos para su movilidad o asistencia técnica, equipamiento y asesoramiento para consolidar proyectos de autoempleo, a la población desempleada y/o subempleada habitante de la Ciudad de México de 16 años y más que enfrenta problemas para obtener empleo, facilitando con ello su acceso al trabajo digno.	Asesorar, orientar y en su caso capacitar a las mujeres en temas de equidad de género, jurídicos, entre otros.
Requisitos	-CURP -Identificación Oficial actualizada - Comprobante de domicilio -Documento oficial que acredite su nivel máximo de estudios	-Copia de la CURP -Formato de registro SNE-01 - Original y copia del INE y comprobante de domicilio
Fuente consultada	https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/doc-convocatoria_fomento_trabajo_digno_gaceta_oficial-styfe-15032019.pdf	https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/ts/819/0

Derecho a la salud

Mariana es una joven de poco menos de 20 años, es bastante abierta al momento de hablar y ve el lado positivo de las situaciones, aunque si es necesario, es capaz de ser firme y buscar soluciones inmediatas a las problemáticas que vive, le disgusta de sobremanera que la quieran engañar o tratar mal. Ella vive en una casa de campaña (regalo de una organización), en un espacio de jardinería, con su hijo y otras familias que viven de manera contigua a ella.

Hace unos meses, tramitó su hoja de gratuidad, con la cual se siente más tranquila, ya que si se llega a enfermar ella o su hijo, cuentan con el servicio médico y el medicamento correspondiente de manera gratuita, lo cual implica un gasto menos en una economía tan variable como lo es aquella de los trabajos informales, que no brindan un seguro médico que le proteja.

Sin embargo, ella ha visto otro obstáculo que se presenta en el Centro de Salud al que acude, que como en muchos otros espacios, sucede con frecuencia a mujeres de poblaciones callejeras.

No me gusta ir al Centro de Salud porque te tratan mal: en una ocasión no me dejaron entrar, dijeron que ahí no me podían atender, eso me lo dijo la persona que recibe para las citas; en otra ocasión, me atendieron, pero el doctor me hablaba mal, me hablaba con mal tono, parecía que ni siquiera tenía ganas de atenderme, al final solo me vio, me preguntó que tenía y me recetó. No se acercó a verme para revisar bien qué es lo que tenía, todo atrás del escritorio.

Ante estas circunstancias, ella ha optado por asistir a otro espacio similar, donde sabe que los médicos que laboran la tratarán dignamente y sin que le hagan sentir que no pertenece a ese lugar o no está destinado para ella.

A pesar de ello, reconoce que es una ventaja que existan este tipo de espacios y de programas que apoyan para que no tengan que pagar, que le dan la tranquilidad de poder tener el grado de salud máximo tanto para ella como para su hijo, mientras continúa la búsqueda de una vida alterna a las calles.



Marco normativo

El derecho a la salud es básico para garantizar una vida plena. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esta última es entendida como un: “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 2013), por lo tanto, su atención debe ser integral, es decir, tanto a nivel individual, familiar y comunitaria desde la promoción (difusión de información), prevención (medidas para reducir riesgos, detener avance y/o reducir consecuencias de enfermedades), recuperación (atención, estabilización y canalización necesarias en urgencias o atendiendo el caso particular) y rehabilitación (restitución de salud del paciente, buscando su reinserción e independencia; además de estrategias ligadas a lo social y educativo para prevenir deficiencias en el tratamiento). (MSPAS, 2011)

Cada uno de estos puntos, requiere una serie de estrategias y acciones en las que se posibiliten su cumplimiento, las cuales tienen que ser implementadas y seguidas por los órganos gubernamentales correspondientes a nivel municipal, estatal y federal.

El gobierno mexicano ha firmado diferentes tratados internacionales, en los cuales se contemplan algunas garantías para el acceso a la salud, la normatividad abarca a la población en general y también proporciona obligaciones sobre población específica como las mujeres, jóvenes y madres. De estos, se destacan los siguientes:

- Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH): Artículo 25, párrafo 2.
- Convención sobre los Derechos del Niño (CSDN): Artículo 24.
- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW): Artículos 4 numeral 2 y 5; 10, incisos g, h; 11, numeral 2; 12 y 14.

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC): Artículo 12.
- Protocolo de San Salvador: Artículo 10.
- Declaración Americana, artículo VII y XI.
- Comité CEDAW, Recomendación General núm. 24. La mujer y la salud.
- Comité DESC, Observación General núm. 14.
- Comité de los Derechos del Niño, Observación General núm. 15.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Acceso a Servicios de Salud Materna desde una Perspectiva de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 69, 7 de junio de 2010.
- Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes: Artículo 25.

Tales marcos internacionales, cubren diversas temáticas alrededor del derecho a la salud: la promoción, con la cual la información sobre la atención médica llegue a todas las mujeres, tomando como referencia las características particulares de cada grupo, como lo puede ser el idioma, la cultura, la situación geográfica o condiciones socioeconómicas, y que ello sirva como una forma de prevención; la atención, que debe ser en condiciones de igualdad y libre de discriminación, brindando un trato digno y siendo gratuita; reconociendo el consentimiento informado como la capacidad de decidir de cada una sobre el aceptar o rechazar algún tratamiento; el seguimiento, brindando las especialidades y tratamientos necesarios para que la paciente tenga una buena calidad de vida en todas las esferas en las que se desenvuelve.

Cada una de estas condiciones requiere de herramientas o acciones específicas que los gobiernos tienen que posibilitar, las cuales, se pueden ver en la Tabla 4.1.

Tabla 4.1. Obligaciones y normatividad en materia de salud

Derecho	Obligaciones	Elementos
A la salud	a) Garantizar que los establecimientos y servicios de salud sean accesibles física y geográficamente para todas las personas. b) Garantizar atención de urgencia de manera gratuita y sin discriminación para las poblaciones callejeras. c) promover las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física	Garantizar el acceso sin discriminación a bienes y centros de salud de calidad; fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en las diferentes disciplinas deportivas, así como en la vida deportiva; incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y programas de salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de mujeres y hombres en materia de salud
A recibir atención básica en salud	a) Garantizar atención primaria básica, universal y gratuita para las poblaciones callejeras; b) Garantizar a las personas que viven y sobreviven en la calle el acceso a los servicios de salud sin discriminación. c) Establecer un sistema que amplifique la cobertura de servicios básicos en función de las condiciones de exclusión y desventaja de las personas	Obligación de brindar atención básica en salud
A recibir sin discriminación medicamentos esenciales	Garantizar el acceso a medicamentos esenciales	Acceso sin discriminación a medicamentos esenciales
A la salud sexual y reproductiva	a) Garantizar el acceso a la información en materia de salud sexual, reproductiva y planificación familiar. b) Garantizar el consentimiento libre e informado de las mujeres antes de ser sometidas a cualquier procedimiento. c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños;	Acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva; acceso a la información relacionada con la planificación familiar
A la salud materna	a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil; b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales; c) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella. d) Garantizar medicamentos y atención universal y gratuita durante el embarazo y la lactancia. e) Acceso a servicios de salud materna en condiciones de igualdad, libre de estigmatización y atendiendo a las necesidades particulares que se derivan de las condiciones de desventaja que enfrentan las personas.	Acceso a servicios de salud materna en condiciones de igualdad
A la salud y consumo de drogas	a) Prohibición del internamiento y tratamiento forzoso por uso y consumo de drogas. b) Garantizar que las personas expresen su consentimiento libre e informado antes de ser sometidas cualquier tratamiento de rehabilitación. c) Acceso a servicios de salud especializados para la atención del uso conflictivo de las drogas, basado en la autonomía de las personas.	Acceso servicios de salud para atención del uso conflictivo de las drogas

En México se ha generado y actualizado un marco normativo para contribuir al cumplimiento y garantía de las condiciones mínimas para que mujeres, niñas y adolescentes, tengan la atención en salud de calidad, siendo el marco legal nacional y de los cinco estados abordados, el siguiente:

Tabla 4.2. Marco normativo nacional en materia de salud

CPEUM, art. 4; Ley de Asistencia Social, artículos 6, 7, 8, 9; Ley General de Salud, artículos 1, 1bis, 2, 3, 23, 32,36, 37 fracción IV, 51,67, 68, 69, 70, 71, 77 bis, 167, 168; Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 46; Ley General Para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres, artículo 17, fr. XI y XIII; Ley de Asistencia Social, artículos 6, 7, 8, 9.				
Ciudad de México	Guerrero	Baja California	Jalisco	Puebla
Ley de Salud para el Distrito Federal, artículo 1o, 2o, 5o, 9o, 55, 52, 53, 67, 92 y 83. Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal, artículo 15 Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México, artículo 29, 30, 31, 35 Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, artículo 5o, apartado C, fracción ii y iv Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, artículo 5, 8, 10 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal, artículo 5o, 12. Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal (artículo 12, fracción ii).	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, artículo 6, fr. IV y e. Código Penal: Artículo 167; Artículo 170; Artículo 154; Artículo 159, Frac. I a la IV; Artículo 203, Frac. III; Artículo 171; Artículo 193 Código Civil: Artículo 26; Artículo 27; Artículo 27 Bis Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: Artículo 31, Frac. I a la IV; Artículo 50, Frac. I a la XIV Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: Artículo 55, Frac. VII Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación: Artículo 11, Frac. VI, VII y XIII.	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, artículo 7 ap. A, 8, fr. VI a), 106; Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California, artículos 1, 3, 4, 5, 7, 11 fr. VII a XII 12, 19 fr. III, 22, 26, 27, 32, 36, 105, 106 quáter fr. VI. Ley de Asistencia Social para el Estado de Baja California, artículos 3, 4, 10 fr. VIII 11, 12, 13, 14; • Código Penal: Artículo 132 y Artículo 136, frac I a la III Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: Artículo 6, frac VI Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: Artículo 16, frac VIII; Artículo 44, frac V Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación: Artículo 15, inciso g; Artículo 22, frac IV; Artículo 17, frac II, inciso d; Artículo 18, inciso i; Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California, artículo 6, fr. XIII; Ley Estatal del Deporte y la Cultura Física para el Estado de Baja California, artículos 1, 2 fr. V, 4, 29, 30; 45 Ley de Población del Estado de Baja California, artículo 40, fr. I y II;	Constitución Política del Estado de Jalisco art.4 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco, artículo 24 fr.II, 30 Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco art.7, fr.I Ley Estatal para la igualdad entre hombres y mujeres art.14, 50 Ley de Salud del Estado de Jalisco artículo 3 fr.II, 23 fr.III, 26 fr.III, 68-71, 78, 126 bis-129 bis Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres artículo 7 fr.XVIII	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla art.11, 12 fr.V,26 fr. XII, 27 fr.II, IV, 121;Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla art. 1, 2, 8 fr.V, 10 fr.XII, 36 fr. V, 38 fr. II ; Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla art. 3 fr.III, 6 bi fr. VI, XXXIII, 12, 13 fr.VIII, 16 fr. VI,X; Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla art.1, 4, 5 fr. III, 6 fr.XVI, 10 fr.VI, 45 ; Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla art.4 fr.I, 9, 15 fr.I.

Cabe notar que existen temáticas que no son contempladas en gobiernos locales, lo que deja sesgos en la atención, ya que no existe el respaldo necesario para que personas que lo requieren, lo tengan garantizado y esa brecha puede causar problemáticas futuras o presentes que van mermando a la población en general, siendo que la cobertura puede ser nula o escasa. Además, en cuestión de derechos humanos, dichas brechas dejan un campo de acción amplio, en las que se puede encubrir mala praxis o precariedad en la promoción y tratamiento en cada área no abordada.

Por otro lado, a pesar del amplio espectro de las dimensiones de la salud sobre las cuales se han generado diversos mecanismos para garantizar el derecho a la salud, la salud mental suele representar un vacío significativo. Esto puede devenir en serios problemas de salud pública al repercutir en bajos índices de bienestar individual y social, afectando gravemente las otras esferas de la vida, imposibilitando un bienestar integral. En contraste con la cantidad de elementos que pueden respaldar la atención, es constante notar que no se apliquen las condiciones idóneas para que las personas fortalezcan sus condiciones de vida.

Testimonios recopilados en encuestas

Los marcos normativos desde el nivel internacional hasta el local tienen como objetivo el cumplimiento de condiciones óptimas de salud para las mujeres en todo el territorio mexicano, sin embargo, al hablar de las mujeres se las debe de comprender como un grupo heterogéneo, pues ha de considerarse que las condiciones para que los

derechos sean efectivos son igualmente diversas, habiendo en gran número de casos incumplimiento y violaciones a los mismos.

En los datos recabados se obtuvo que de las 58 mujeres encuestadas, 34 cuentan con algún tipo de cobertura de salud, lo cual les ha permitido tener atención médica gratuita o a bajos costos, mientras la ciudad de Acapulco destaca porque de las mujeres encuestadas ninguna afirmó contar con cobertura sanitaria alguna. Por otro lado, en la Ciudad de México se presenta el mayor número de mujeres que cuentan con dicho servicio (ver Tabla 4.3).

Esto puede deberse a que en la Ciudad de México, se cuentan con dos tipos de coberturas en salud: la gratuidad, que brindan la Secretaría de Salud de la CDMX a personas que residen en la metrópoli y no cuentan con seguridad social como el que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto del Seguro Social de los Trabajadores del Estado (ISSTE) asegurando atención médica y medicamentos totalmente gratuitos, y el Seguro Popular, que es de competencia nacional. Mientras que en Tijuana, 10 mujeres afirmaron contar con algún tipo de cobertura. Del total de afiliadas, el 61%, cuenta con el Seguro Popular, el cual es un programa a nivel Nacional para:

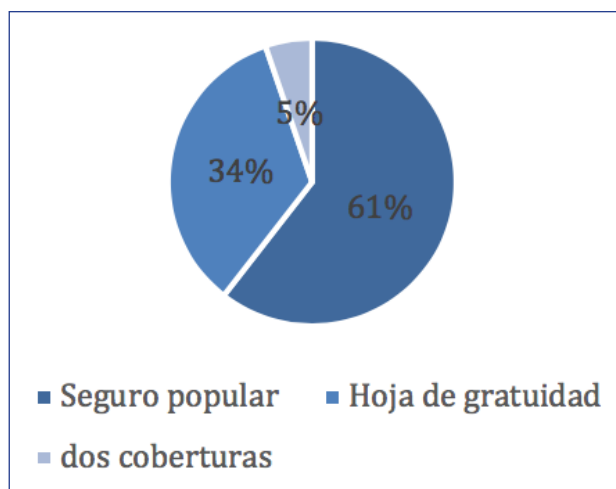
Brindar servicios de salud a todos las personas que estén inscritas en el **sistema de protección social en salud**, y tiene la capacidad de trabajar con distintos proveedores de servicios de salud tanto pública como privada en todos los estados de la República mexicana [...] buscando de este modo que todos los integrantes de las familias afiliadas al **seguro popular** tengan acceso a los servicios de salud, médicos, hospitalarios, farmacéuticos y quirúrgicos (Seguro Popular, 2019).

Tabla 4.3. Mujeres y cobertura de salud pública

Ciudad	Con cobertura	Sin cobertura	Total
CDMX	15	9	24
Acapulco	0	3	3
Tijuana	10	8	18
Guadalajara	5	2	7
	4	2	6
Total	34	24	58

Fuente: Elaboración propia con base en información pública.

Figura 4.1. Cobertura de Salud



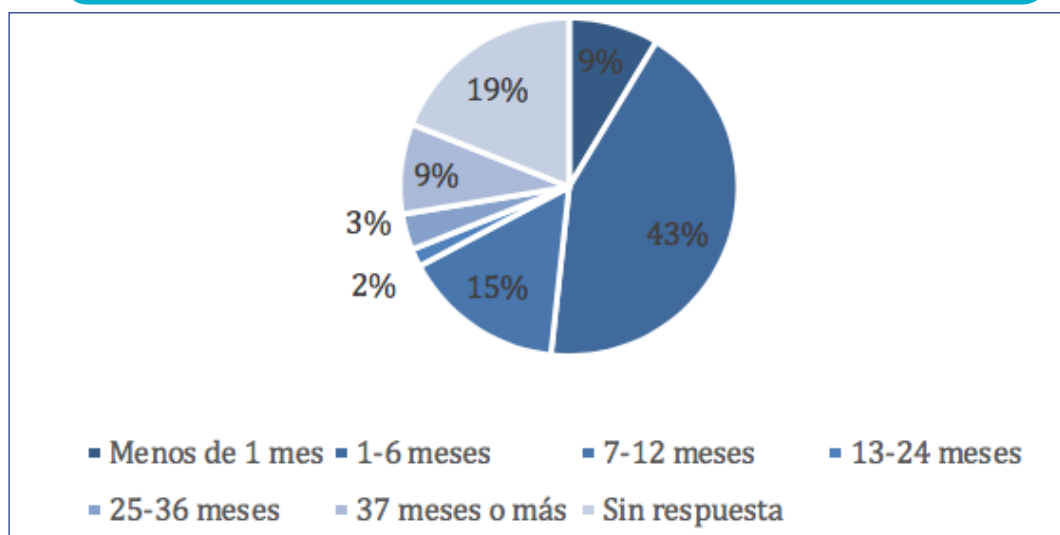
Fuente: Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol, 2019)

En cuanto a la hoja de gratuidad, el 34.2% de las encuestadas posee dicha cobertura, la cual solo tiene aplicación en la Ciudad de México. Estas afiliaciones son básicas, ya que a partir de ello, el derecho a la salud se ve garantizado para las mujeres de población callejera, atendiendo a las condiciones económicas. Es importante mencionar que solamente el 5.3% cuenta con ambas coberturas en salud, lo que da mayor probabilidad de la atención médica en las especialidades que se requieran.

En el país, el 16.3% de mujeres en condición de pobreza no cuentan con acceso a la salud (INMUJERES, 2018), y quienes cuentan con ello es de manera indirecta pues están afiliadas a través de la seguridad social que posee su pareja. A esto puede agregarse que en el conteo elaborado para la ENADIS, el 44.9% de las mujeres refirió no haber recibido atención médica o medicamento por motivo de su condición personal o por sexo (citado en INMUJERES, 2019). Si esto sucede en un marco nacional, la condición de las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras agrava esta situación y las vulnera no solo por ser mujeres sino además por su nivel socioeconómico pues no cuentan con garantía alguna en la atención en los diferentes niveles de salud de manera gratuita.

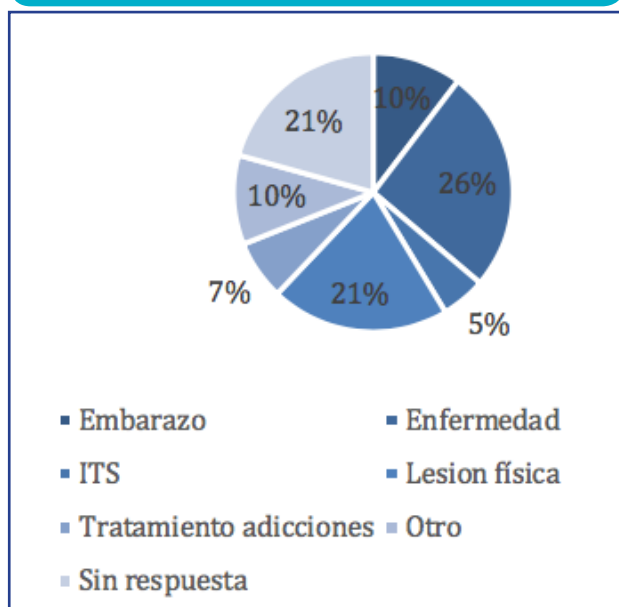
No solamente la discriminación al momento de asistir a un servicio de salud impide el desarrollo de prácticas de cuidado, sino también las condiciones de vida en calle aumentan la tolerancia al dolor por lo cual históricamente ha habido un bajo acercamiento a dicho servicio, sin embargo, a través de la influencia de Organizaciones de la Sociedad Civil y su labor pedagógica así como de defensoría en derechos humanos, las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras han aumentado sus actividades de autocuidado. Como se muestra en la Figura 4.2, el 43% de las mujeres encuestadas asistió por última vez a un

Figura 4.2 Última asistencia a espacio de salud



Fuente: Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol, 2019)

Figura 4.3 Motivo de asistencia



espacio de salud entre un mes y 6 meses antes de la fecha de aplicación de la encuesta, mientras que el 8.3% asistió dentro de los primeros 30 días, ello puede mostrar una búsqueda de atención oportuna en ascenso. Sin embargo, aun el 8.7% de estas mujeres no ha acudido a ningún espacio de atención en salud en 37 meses o más, un número elevado si consideramos que esto implica no haber realizado ningún estudio de tipo médico en más de año y medio. A pesar de que los dos primeros porcentajes sumados alcanzan el 50%, es de notar que el resto muestran una baja frecuencia en buscar las opciones médicas más cercanas.

De quienes han acudido a instancias de salud, el motivo más frecuente es por algún tipo de enfermedad (26%) y por debajo es por lesiones

físicas (21%). Ambos datos corresponden a la salud física, que se puede traducir en situaciones inmediatas, que requieren atención en promedio de 15 días para la recuperación. En cuanto a procesos largos, como en el embarazo o tratamiento en adicciones, resultan procesos de mayor duración, y son motivos poco frecuentes para acudir a centros para recibir la atención adecuada (10% y 7%, respectivamente). En cuanto a la salud sexual, representada en el motivo de ITS, también resulta de baja frecuencia, ya que solo 5.2% acude por dicha razón.

Ahora bien, en la dimensión de la prevención: los estudios para afecciones que tienen mayor prevalencia en mujeres deben ser realizados con periodicidad, ello favorece la atención oportuna, dando una mejora en calidad de vida. De las mujeres encuestadas, una aplastante mayoría nunca se han realizado algún estudio ginecológico, de cáncer de mama o de método anticonceptivo, lo cual indica que existe algún sesgo en el área de la promoción de la salud pública, debido a la falta de mecanismos adecuados para alcanzar a la población meta o bien, los que existen no se plantean como objetivo a las mujeres que viven en calle. Ahora bien, la frecuencia con mayor número de asistentes a realizarse alguno de estos estudios es de entre 7-12 meses, siendo el Papanicolau el estudio más frecuente en este rango temporal y en general de los estudios manejados.

Un factor determinante del bajo porcentaje de mujeres que acuden a servicios de salud es la negación del servicio, que se manifiesta a través de las acciones (impedir acceso, ordenar desalojo del espacio) o actitudes (hostilidad, mal trato) así

Tabla 4.4 Tiempo en que se realizaron estudios

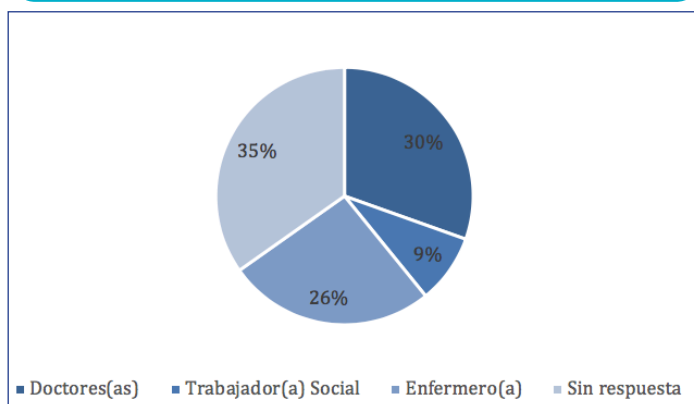
Tipo de estudios	1-6 meses	7-12 meses	13-18 meses	19-24 meses	Más de 24 meses	Nunca
Ginecológico	3	2	0	1	3	49
Cáncer de mama	2	3	0	3	1	49
Papanicolau	4	14	1	2	7	30
Método anticonceptivo	7	2	0	0	4	45

Fuente: Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol, 2019)

como en las omisiones (no auscultar) sistemáticas efectuadas por personal de la instancia a la cual se acercan las mujeres.

En el caso de las encuestadas, el 33% ha vivido algún evento de negación del servicio. De esta cifra, la figura institucional que con mayor frecuencia ha cometido esta violación a su derecho es el médico o médica que le atiende (30%) seguido del enfermero o enfermera (26%), lo alarmante es que ambos puestos representan a quienes atienden directamente el motivo de consulta del paciente.

Figura 4.4 Personal que negó acceso médico



Fuente: Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol, 2019)

Por otro lado, en el área de salud reproductiva y sexual, la cual se divide a su vez en dos áreas interrelacionadas pues se refiere a un estado de bienestar físico y mental relacionado con la sexualidad, en la que se pondera las relaciones sociales entorno a ello, basados en respeto, libertad, placer y seguridad (salud sexual) y a la garantía de la libre elección de tener hijos o no, tomando el conjunto de servicios y atenciones profesionales que garanticen la máxima calidad y bienestar a partir de la elección (salud reproductiva) (Oizerovich & Perotta, 2017). Les fue consultado a las mujeres sobre sus hábitos al tener relaciones sexuales, partiendo del uso o no uso de métodos de protección y prevención de ITS o de embarazo (método anticonceptivo). El 36%, aseguró no haber usado algún tipo de protección, siendo la causa más común el haber decidido no utilizarlo (ocho mujeres), seguido por el no contar con dinero para conseguirlo (seis mujeres) y el

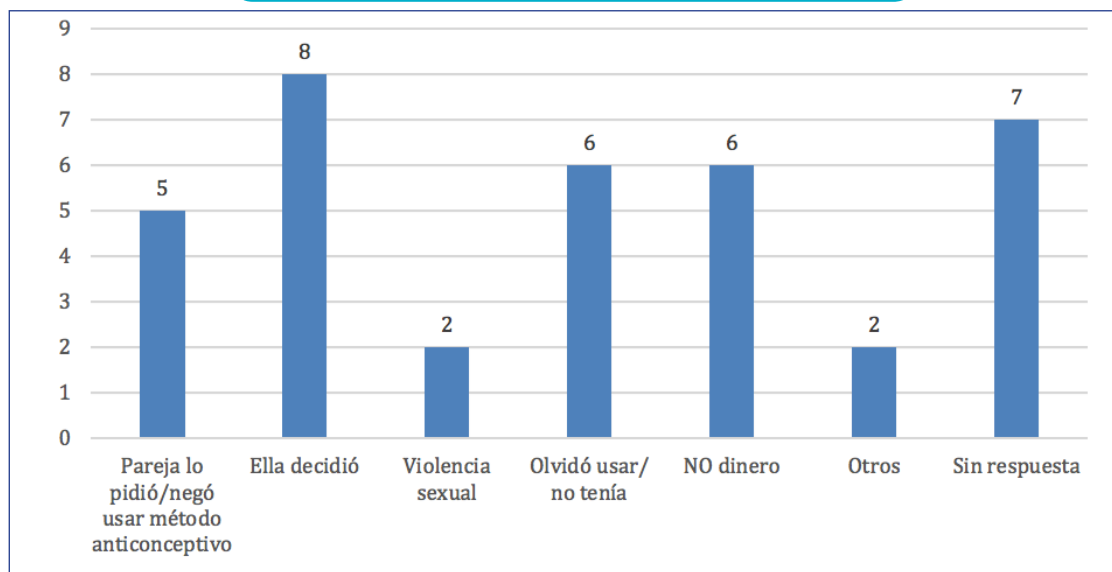
haberlo olvidado/ no haber tenido en ese momento (seis mujeres). Frente a estos datos, es posible que al no contar con información suficiente sobre los métodos anticonceptivos ni conocimiento sobre los programas e instituciones a través de los cuales adquirirlos hayan incurrido en prácticas sexuales de riesgo. Además un motivo adicional ofrecido para no emplear anticonceptivo fue que la pareja tomó la decisión de no usarlo (cinco mujeres lo refirieron), lo cual puede interpretarse como que el ejercicio de la sexualidad plena de estas mujeres se ve violentado por la toma de decisión de otros, entendiendo los marcos morales de la sociedad mexicana donde el placer femenino y el cuidado de sí de las mujeres pasa a segundo término. Esto se ve representado por los roles de género que se tienen entorno a la toma de decisiones, lo cual conlleva un ejercicio de discriminación en tanto que una mujer decida sobre su cuerpo.

Respecto de lo anterior, el Instituto Nacional de las Mujeres señala que el 8% de las mujeres está de acuerdo en que las mujeres casadas deben tener relaciones sexuales cuando el esposo lo desee (INMUJERES, 2017). Esto demuestra que la capacidad de decisión sobre la vida sexual de las mujeres se ve vulnerada en el ejercicio de poder dentro de las relaciones que se da por las concepciones entre lo que un hombre y una mujer deben y pueden hacer.

Además, se les inquirió sobre posibles eventos al tener relaciones sexuales sin protección, a lo cual poco más de la mitad de las mujeres contestó que no pasaría nada (51%). La segunda opción más frecuente fue tener un embarazo no planeado y/o contraer una Infección de Transmisión Sexual (ITS).

Por otra parte, sobre el uso de métodos anticonceptivos como forma de prevenir embarazos no deseados (incluso los condones, femeninos y masculinos que funcionan como método de protección y anticonceptivo), el 53% de las mujeres entrevistadas aseguró no haber utilizado método alguno. En cuanto a quienes sí utilizaron, el condón masculino fue el más empleado (30%), seguido por el implante (8%); el condón femenino no fue algo que se insertara en

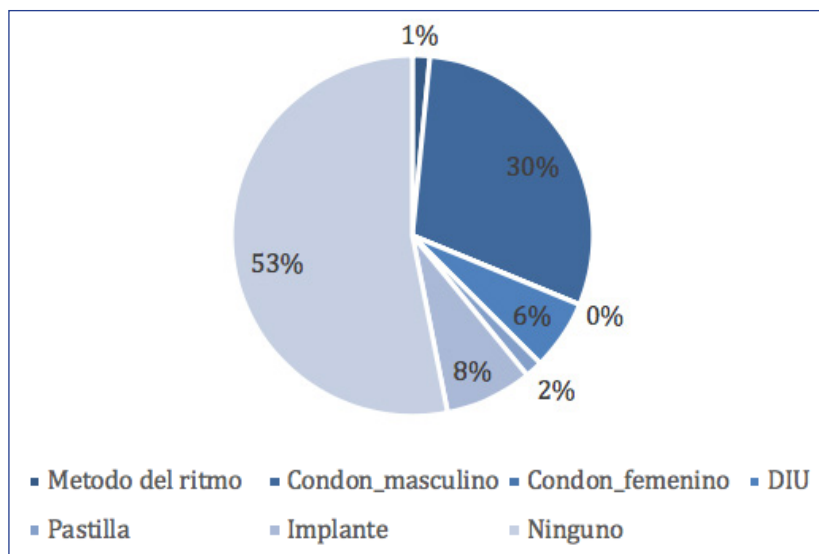
Figura 4.5 Razones sexo sin protección



Fuente: Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol, 2019)

su práctica sexual. Dichos métodos son de mayor prevalencia entre la población en general, debido a la difusión que existe tanto en los espacios de salud como en los medios de comunicación; además de ser totalmente gratuitos, tanto el método como la aplicación, en el caso de los dos últimos mencionados.

Figura 4.6 Métodos anticonceptivos

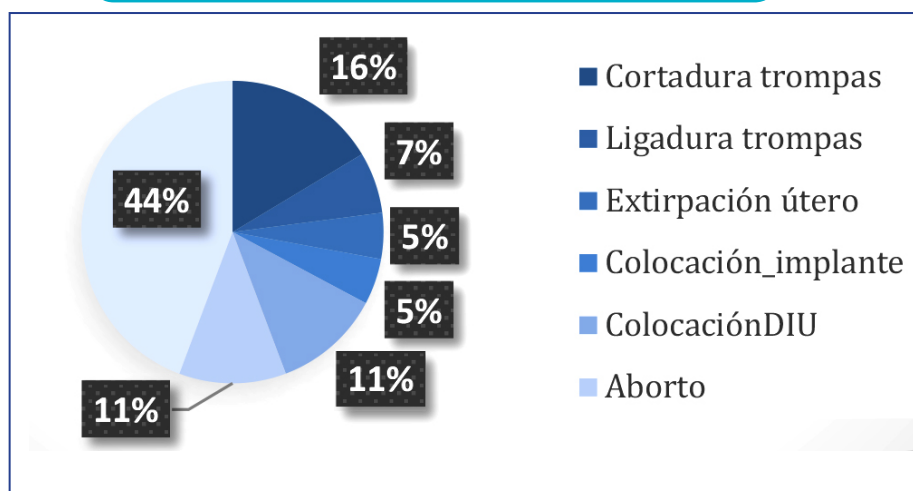


Fuente: Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol, 2019)

También se indagó entre las encuestadas sobre casos de violencia obstétrica, que es toda acción que cause daño físico o mental hacia la mujer en la atención en el embarazo o parto o posparto por parte del personal de la atención a la salud, manifestado a través de la obstaculización, la dilación, negación, atención inadecuada y hostil o cualquier acción o comportamiento que perjudique a la paciente (Ramos y Luna, 2015).

En la encuesta fueron señalados eventos postparto que pudieron acontecerles a las mujeres, de los cuales el más frecuente fue la cortadura de las trompas de falopio, el cual es un procedimiento quirúrgico permanente, por el cual la persona ya no puede llegar a tener un embarazo. De este, sigue la colocación del DIU, que es un método anticonceptivo que consiste en colocar un pequeño aparato en forma de T, que impide el encuentro entre óvulo y espermatozoide, además de ser temporal.

Figura 4.7 Eventos violencia obstétrica



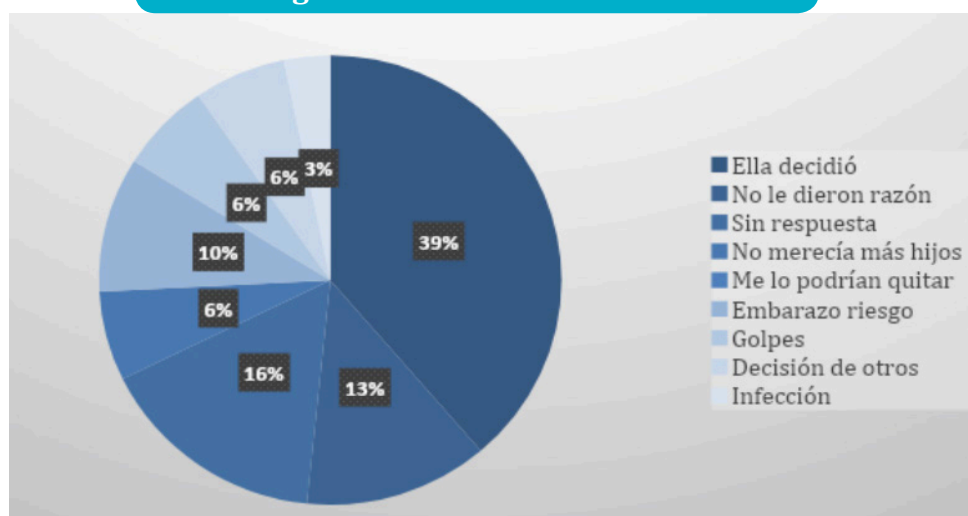
Fuente: Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol, 2019)

Dichos eventos evidencian violaciones de los derechos de las mujeres ya que no se les permite tomar una decisión informada sobre su maternidad ni su cuerpo sino que se observan una serie de prejuicios sobre quiénes merecen tener hijos y quiénes no. Los motivos que se observaron con mayor frecuencia para llevar a cabo algún procedimiento obstétrico fueron: que el personal médico actuó por decisión de la paciente (39%), empero todavía a un porcentaje de las mujeres no les consultaron, informaron ni ofrecieron razones al momento de realizarles el procedimiento (13%). Además, el 6% de las mujeres comentó que la decisión fue de otros, ya sea la pareja, el médico o su familia. Esta cifra es cercana a la estadística nacional, pues en 2016 se encontró que el 9.7% de las mujeres no dio la autorización para una cesárea

(INMUJERES, 2019), lo representa un evento de violencia obstétrica en la medida en que no se le permite decidir a la mujer sobre el procedimiento, y en este caso particular de mujeres de población callejera, se ven una gama más amplia de acciones en contra de su ejercicio de maternidad.

Nisaly Brito (2012), al ahondar sobre la concepción que médicos de un hospital materno infantil tienen sobre mujeres con hijos o hijas que viven en calle, encuentra que las ven como irresponsables, culpables por traer hijos o hijas al mundo. Esta representación, conlleva a una criminalización de las mismas, además de verlas como personas que no son capaces de tomar decisiones y requieren que otros lo hagan por ellas. Se observa así una serie de violaciones a derechos humanos, derechos

Figura 4.8 Motivos del evento

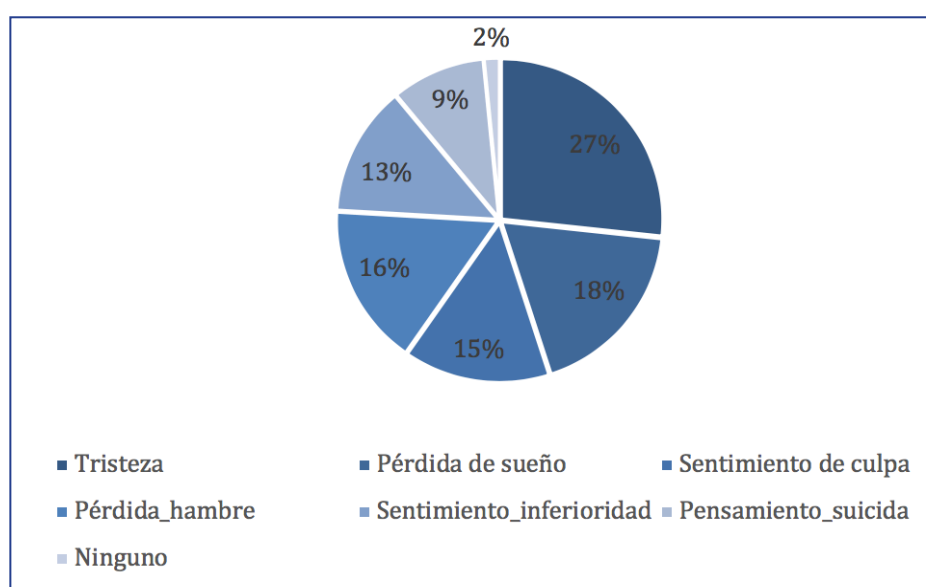


Fuente: Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol, 2019)

reproductivos y la clara exclusión sobre cuestiones de supervivencia básica, como lo es una atención en salud oportuna y de calidad. Al no ser capaces de tomar decisiones debido a sus irresponsabilidad, la atención que se les proporcionase decanta hacia el encierro o bien una atención tutelar, donde otros y otras puedan indicar “las mejores opciones” para rehabilitarlas.

En cuanto a otro aspecto de la salud mental, se les preguntó sobre las emociones que han tenido en el último año, resultando la tristeza con mayor presencia en las mujeres encuestadas, seguido de la pérdida del sueño. En su conjunto, todos los estados anímicos pueden referir a diferentes cuadros de diagnóstico psicológico o psiquiátrico. Esto nos muestra que la gran mayoría de las mujeres que han vivido en calle, han experimentado emociones o pensamientos que pueden conllevar a un deterioro de su estado físico y que alteran de manera importante su vida cotidiana. Es notable que solo el 1.6% de las mujeres encuestadas no refirió alguna de estas opciones. (Ver Figura 4.9)

Figura 4.9 Emociones



Fuente: Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol, 2019)

Por otra parte, en la búsqueda de una resolución ante estas emociones, las mujeres que habitan las calles optaron por expresarlo a otros, lo cual les generó una sensación de alivio y reconocimiento del apoyo de sus pares. Sin embargo, el no hablar sobre las emociones experimentadas fue la opción más frecuente con 26 mujeres; mientras que quienes se acercaron a alguien para comentarlo acudieron con alguna organización (16 mujeres); la familia fue la penúltima opción para quienes buscaron apoyo. Esto nos podría indicar que el trabajo con las emociones no se da desde lo verbal pero esto no implica que no se manifieste a través de otros mecanismos. Esto se puede corroborar cuando se les preguntó si acudían a algún espacio para tener atención, siendo que el 81% respondió que no, es decir, no existe un hábito para expresar y/o buscar un tratamiento que mejore su estado emocional, probablemente debido a la carencia de información oportuna. Para 2018, el INEGI registró una tasa de 140% de casos nuevos de depresión en mujeres, diagnóstico que se asocia con las emociones colocadas como opciones para esta investigación, posiblemente esta tasa sea todavía mayor si contemplamos a las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras y aquellas mujeres que no reciben atención médica en algún espacio de salud pública. Las mujeres encuestadas identifican los espacios de atención a la salud mental como violentos, donde la atención brindada será hostil o ineficiente, por ser mujer que vive en calle.

Jazmín Mora-Ríos y Natalia Bautista (2014) nos permiten comprender esto a partir de una investigación para detectar los principales manifestaciones de estigmatización estructural en espacios de atención psiquiátrica, encontrando que tanto el género como el pertenecer a grupos vulnerables son variables transversales que afectan no solo la experiencia de la enfermedad, sino también el cómo se genera, y concluyen señalando que se requiere formular una estrategia particular para cada afección.

Solicitudes de información

Para obtener información sobre temas de salud en las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras (adicciones, afiliación a coberturas o a

la cantidad de mujeres que fueron beneficiados o atendidas por maternidad, atención psicológica y física) se realizaron 74 solicitudes de información, tanto a nivel federal como local, empero solo hubo respuesta para 21. En 6 de esas se canalizó la solicitud a otros espacios para que pudiera tener respuesta, aunque no hubo tal; en otras 3 se respondió que no se contaba con la información solicitada, siendo que se les preguntó sobre el “ingreso de mujeres en riesgo social, condición o situación de calle, poblaciones callejeras o indigencia en espacios de atención psiquiátrica y si se les brindó atención externa de seguimiento”.

Dentro de las respuestas, se encuentra que para solicitar información de si se conoce o se registró que mujeres que acudieron al servicio pertenecían a algún grupo prioritario o población vulnerable, la mayoría de las respuestas era que no contaban con el dato desagregado. Solamente se tiene el dato de Guerrero en cuanto al número de mujeres afiliadas durante el 2018 al Seguro Popular, que fueron 1, 192, 630 mujeres. Otro dato obtenido de la misma institución fue sobre los programas por estado que atienden a población en riesgo social, condición o situación de calle, callejeras o indigencia, aunque solo contestaron por el Estado de Jalisco, mostrando una base de datos de programas estatales y por municipio, al igual que en el caso del municipio de Tijuana, en la cual respondieron brindando los programas de salud dirigidos a mujeres como los Programas de la Coordinación de Salud Reproductiva (Promoción, Detección oportuna y tratamiento de cáncer de mama y cáncer cervicouterino, planificación familiar, violencia de género, salud materno y perinatal; en caso de los programas para atender a poblaciones vulnerables o en riesgo fue respondido que existe un programa denominado Promoción, detección oportuna y tratamiento de Tuberculosis, VIH/SIDA, e infecciones de Transmisión Sexual; y para el caso de mujeres de población callejera o en riesgo están los programas antes mencionados. Mientras que en la Ciudad de México, se cuenta con el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a personas en Riesgo de Vivir en la Calle e integrantes de las Poblaciones Callejeras en la Ciudad de México, el cual es llevado por el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS, ahora IAPP).

Tabla 4.5 Respuestas a solicitudes de información de salud

Institución	Pregunta	Respuesta
Secretaría de salud Federal	¿Cuáles son los programas institucionales implementados en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, orientados a la población en riesgo social, condición o situación de calle, callejeras o indigencia?	CDMX: Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a personas en riesgo de vivir en calle e integrantes de las poblaciones Callejeras de la CDMX. Jalisco- Mandaron una base de datos de los beneficiarios de los programas en cada municipio y de Jalisco. Puebla: No hay Baja California: En los sistemas de información de los programas de salud del Instituto de Servicios de Salud Pública del estado no se cuenta con un apartado donde se especifique la condición de la población que es atendida. Guerrero: (Secretaría de Educación) No es de su competencia, remitirse a SEDESOL, DIF y Secretaría de Asuntos Indígenas y Afro mexicanos.
	¿Cuántas mujeres fueron beneficiarias del programa "Seguro popular" en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018? (desglosado a nivel estatal)	Federal: Únicamente se cuenta con la población asegurada por entidad federativa, sin la desagregación sexo, la cual se presenta a continuación: Guerrero: 1, 192, 630 mujeres afiliadas en el periodo mencionado
	1. En caso de haber Programas de salud especialmente para el municipio de Tijuana ¿cuáles son? 2. De esos programas ¿hay dirigidos a mujeres? 3. Del total de programas en el municipio de Tijuana ¿hay dirigidos a poblaciones vulnerables o población callejera o en situación de calle? 4. De los programas dirigidos a poblaciones vulnerables, población callejera o situación de calle hay uno especializado en mujeres?	Específicamente [dirigidos a mujeres están] los Programas de la Coordinación de Salud Reproductiva (Promoción, Detección oportuna y tratamiento de Cáncer de mama y cáncer Cervicouterino, planificación familiar, violencia de género, salud materno y perinatal. Los programas [dirigidos a poblaciones vulnerables son] de Promoción, detección oportuna y tratamiento de tuberculosis, VIH/SIDA, e infecciones de Transmisión Sexual, sin embargo los demás programas preventivos participan también fomentando la salud mediante ferias de salud. [Específicamente para mujeres población vulnerable son] los programas de la Coordinación de Salud Reproductiva.
	¿En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, cuántas hojas de alumbramiento expidió la Secretaría de salud, en donde la mujer manifestó que se encontraba en riesgo social, condición o situación de calle, callejeras o indigencia? (desglosado a nivel estatal)	No cuenta con información sobre hojas de alumbramiento expedidas en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, ya que los nacimientos se expiden en los formatos de los Certificados de Nacimiento que se distribuyen a los integrantes del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo dichos certificados no cuentan con la variable 'riesgo social' y/o 'condición o situación de calle' y/o 'callejeras o indigencia'.
	¿En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, cuántas hojas de alumbramiento expidió la Secretaría de salud, en donde la mujer manifestó que se encontraba en riesgo social, condición o situación de calle, callejeras o indigencia? (desglosado a nivel municipal)	1. Jalisco: Respondida de manera parcial: Indican todos los nacimientos, no especifican la condición social y económica de la mujer. 2. Puebla: No existe la información. 3. Baja California: De acuerdo a información del Sistema Automatizado de la Secretaría de Salud hay 227 mujeres del grupo indígena, el resto de las variables solicitadas no se encuentran en dicho sistema ni en las hojas de registro de alumbramiento 4. CDMX: No se cuenta con la información
CENSIDA	¿En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, cuántas casos de VIH, VPH y sífilis detectó CENSIDA en mujeres en riesgo social, condición o situación de calle, poblaciones callejeras o indigencia? (desglosado a nivel estatal)	No hay desagregación de la situación socioeconómica de las personas que presentaron casos de VIH, VPH y sífilis. La información sobre casos de SIDA en México hasta 2018: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/467261/RN_Cierre_2018_f.pdf La información sobre casos de VPH y sífilis preliminar hasta 2018 en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425972/se_m52.pdf
Espacios de salud mental Estatales (Puebla)	¿Cuántas mujeres en riesgo social, condición o situación de calle, callejeras o indigencia han sido beneficiarias del espacio "Hospital Psiquiátrico Doctor Rafael Serrano" durante el periodo del 1	Respondida: 10 mujeres en situación de calle o indigencia Se especifica en el documento la situación de cada mujer

Tabla 4.5 Respuestas a solicitudes de información de salud

Institución	Pregunta	Respuesta
Espacios de salud mental Estatales (Puebla)	¿Cuántas mujeres en riesgo social, condición o situación de calle, callejeras o indigencia han sido beneficiarias del espacio "Hospital Psiquiátrico Doctor Rafael Serrano" durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018?	Respondida: 10 mujeres en situación de calle o indigencia Se especifica en el documento la situación de cada mujer
Espacios de salud mental Estatales (Baja California)	El Instituto de Psiquiatría recibió a 19 mujeres en ese periodo, en archivo se especifican los días que estuvieron internadas. Sin embargo, La Unidad Municipal de Apoyo Social (UMAS) refiere haber canalizado a 20 mujeres en riesgo social, condición o situación de calle, callejeras o indigencia, al Instituto Psiquiátrico del Estado de Baja California y 9 mujeres en riesgo social, condición o situación de calle, callejeras o indigencia, al Hospital de Salud Mental, durante el periodo	El Instituto de Psiquiatría recibió a 19 mujeres en ese periodo, en archivo se especifican los días que estuvieron internadas
	¿Cuántas de ellas recibieron tratamiento externo y/o estuvieron internadas? así como su periodo de estancia en cada uno de ellos.	
Instituto de Atención para las Adicciones CDMX	Dentro de las acciones y programas que implementó el Instituto, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, ¿cuáles de estos se encuentran dirigidos o contemplan a personas en riesgo social, condición o situación de calle, poblaciones callejeras o indigentes?	Programa de Otorgamiento de Ayudas para la Prestación de Servicios de Tratamiento Integral contra el Consumo de Sustancias Psicoactivas a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e integrantes de Poblaciones Callejeras en la Ciudad de México (PROCALLE) y el Programa de Otorgamiento de Ayudas para la Prestación de Servicios de Tratamiento contra el Consumo de Sustancias Psicoactivas a Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos Públicos y Privados en la Ciudad de México (PROSUST)

En cuanto a las solicitudes de información a las secretarías de salud estatales en Jalisco, Puebla, Ciudad de México, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Chihuahua, hubo respuesta por la de Jalisco, quien respondió sobre los programas institucionales implementados en 2018, orientados a la población en riesgo social, condición o situación de calle, poblaciones callejeras o indigencia que no existía una partida presupuestal para programas con este tipo de poblaciones; en el caso de Puebla existían para las mujeres en su conjunto, no para las pertenecientes a grupos específico, en Baja California se hizo un programa de prevención; y en la CDMX se respondió con el Respondieron el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a personas en Riesgo de Vivir en la Calle e integrantes de las Poblaciones Callejeras en la Ciudad de México.

Con estas mismas instituciones, se preguntó sobre si se contaba con la cantidad de hojas de alumbramiento expedidas puntualizando si eran

mujeres en riesgo social, condición o situación de calle, callejeras o indigencia, solamente Baja California arrojó dato de 227 mujeres de población indígena; del resto no se cuenta con información.

Y la última respuesta que se tiene, que es en el tema de Salud mental, se solicitó conocer la cantidad de mujeres riesgo social, condición o situación de calle, callejeras o indigencia que se atendieron en espacios psiquiátricos y el único dato sobre esto lo extendió Puebla, registrando 10 casos.

Como se puede ver, las instancias no toman en cuenta las situaciones socioeconómicas a nivel de datos, lo cual deja el sesgo de poder usar dicha información para poder pensar soluciones aplicables y que todos los programas que se tienen en el área de la Salud, lleguen a poblaciones callejeras o vulnerables, generando estrategias o acciones focalizadas para garantizar el Derecho y el acceso a la Salud de mujeres que viven en condiciones en falta.

Tabla 4.6 Programas sociales en salud a nivel nacional, estatal y local

Ciudad	Nivel	Nombre del Programa	Descripción del programa	Requisitos
Nacional	Nacional	Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad	<p>Otorgar apoyo económico a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A todas las personas con discapacidad que pertenezcan a grupos indígenas del país de 0 a 64 años de edad. • Niñas, niños y jóvenes con discapacidad permanente de 0 a 29 años que vivan en municipios y zonas urbanas de alta y muy alta marginación. <p>El monto de apoyo es de \$2,550 pesos que serán entregados bimestralmente. La meta de población a atender son 1 millón de personas con discapacidad.</p>	<p>Acta de Nacimiento.</p> <p>Documento que acredite la discapacidad permanente, emitido por alguna institución pública del sector de salud federal, estatal o municipal.</p> <p>Comprobante de domicilio o constancia de residencia de la autoridad local.</p> <p>Para el caso de niñas y niños con discapacidad, la presencia del padre, madre o tutor.</p>
	Nacional	Programa de Apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras	<p>La población susceptible de ser beneficiaria son las madres, padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o estudian y que no tienen acceso al cuidado y atención infantil. El apoyo es para aquellos que tienen bajo su cuidado al menos una niña o niño de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad.</p> <p>En casos donde se está al cuidado de niñas o niños con alguna discapacidad, el apoyo se otorga a niños y niñas entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad.</p>	Ninguno
Guadaluajara	Estatad	Programa por la Seguridad Alimentaria	<p>Entregar despensas a bajo costo a través de los 13 bancos de alimentos afiliados a la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos y establecidos en Jalisco.</p> <p>Dirigido a personas en pobreza preferentemente aquellas que cuenten con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.</p>	No hay requisitos para la población que requiera el apoyo.
	Estatad	Sistema de protección Social en Salud	<p>Garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación.</p> <p>Población Objetivo: personas que no gozan de los beneficios de la seguridad social.</p>	<p>Identificación oficial con fotografía del Titular del Núcleo Familiar.</p> <p>Comprobante de domicilio expedido hasta con 90 días de anterioridad al día en que se realice el trámite de incorporación al Sistema.</p> <p>CURP.</p>
	Estatad	Atención a los Adultos Mayores	<p>Las personas de 65 años y más que no reciben ingresos por concepto de pago de jubilación, pensión de tipo contributivo o carezcan de solvencia económica para atender deficiencias médicas o capacitación para su integración social.</p>	<p>Copia y presentar original del Acta de Nacimiento o una identificación oficial.</p> <p>CURP.</p> <p>Comprobante de domicilio Escrito por protesta que el solicitante hace para constar su domicilio.</p>

Ciudad	Nivel	Nombre del Programa	Descripción del programa	Requisitos
	Estatad	Bieneales para adultos mayores y personas con discapacidad	Entregar bienaeales de dos pasajes diario a los adultos mayores de 65 años y las personas con discapacidad permanente que tengan preferentemente un ingreso inferior a la línea de bienestar.	CURP Documento Oficial con fotografía, en el que se haga constar la fecha de nacimiento del solicitante. Copia del comprobante de domicilio 2018. En caso de no contar con comprobante se debe presentar escrito bajo protesta de decir verdad en el cual el interesado haga constar su domicilio. <i>Sólo para las personas con discapacidad</i> Copia de un documento oficial de la persona solicitante o del tutor. Certificado médico o resumen clínico con firma autógrafa y número de cédula profesional del médico que acredite la discapacidad permanente.
	Estatad	Jalisco Incluyente: Cuida y escucha	Entregar de aparatos auditivos, sillas de ruedas y bastones según sea el caso. Dirigido a Personas con Discapacidad con hipoacusia o bien con discapacidad motora	Entregar copia y presentar original Identificación oficial: INE, INE ó credencial de persona con discapacidad. CURP. Comprobante de domicilio. Diagnóstico médico o certificado médico que especifique su discapacidad. Llenar el formato de estudio socioeconómico.
	Estatad	Apoyo a Mujeres Jefas de Familia	Apoyar a mujeres jefas de hogar de 18 años en adelante, que residan en Jalisco, que cuenten con un ingreso de hasta 2.5 veces el salario mínimo general vigente en el país, que conformen una familia monoparental y tengan bajo su responsabilidad la manutención de menores de edad.	Copia simple de las actas de nacimiento de la solicitante y de sus descendientes menores de edad o mayores de edad con discapacidad permanente. Constancia de que los menores de edad, mayores de 5 años sean alumnos regulares del sistema educativo. Documento que compruebe la jefatura de familia como el acta de defunción de su cónyuge o padre del o los menores o una carta que declare bajo protesta de decir verdad la condición de mujer jefa de familia y único sostén de una familia monoparental. Identificación Oficial. CURP. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses. Escrito bajo protesta de decir verdad que establezca el tiempo de residencia en Jalisco (debe ser mínimo 5 años).
	Municipal	Eres nuestro orgullo	Brindar apoyo económico bimestral a adultos mayores que no cuenten con otro apoyo para el mismo fin.	Identificación oficial con fotografía vigente y constancia de residencia emitida por la Secretaría General del Ayuntamiento. Comprobante de domicilio
	Estatad	Apoyos y servicios asistenciales a familias en situación vulnerable	Otorgar apoyos asistenciales de forma oportuna, tales como: alimentación, medicamentos, enseres domésticos, transporte, servicios funerarios y otros más, que se requieran en casos urgentes o para el fortalecimiento socio-familiar, a la población en condiciones de pobreza, desempleo, abandono,	Acta de nacimiento. Credencial de identificación con fotografía vigente. Comprobante de domicilio. Recibo de nómina o ingresos

Ciudad	Nivel	Nombre del Programa	Descripción del programa	Requisitos
			violencia y/o maltrato, con discapacidad, sin seguridad social y/o en contingencias, a través del DIF Estatal.	
Tijuana	Estatad	Extensión de Cobertura	Acercar los servicios de salud a la población que habita en zonas marginadas con alta dispersión y difíciles condiciones de acceso debido a su ubicación geográfica, en las cuales resulta muy complejo y en algunos casos imposible la construcción en el corto plazo de unidades médicas fijas.	No hay requisitos.
	Estatad	Programa para la Prevención del Embarazo en Adolescentes	El Programa se encuentra alineado a los objetivos y líneas de acción de los principales instrumentos federales y estatales que orientan la labor de las dependencias y entidades que integran el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), ya que el tema de la prevención del embarazo adolescente debe ser abordado de manera integral desde diversos ámbitos, por la diversidad de factores que influyen en él.	Depende de cada acción
	Estatad	Sociedad Saludable	Garantizar el derecho a la salud de la población de Baja California a través de políticas públicas que promuevan la coordinación de los tres órdenes de gobierno, el sector salud estatal y la participación activa de la sociedad asegurando el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.	No hay requisitos
	Municipal	Programa "Prevención para todos y todas"	Programa de prevención universal con acciones estratégicas dirigidas a la población tijuanaense, orientadas a evitar que la enfermedad de la adicción se continúe propagando en la localidad. Los sitios de este tipo de intervenciones pueden ser planteles escolares, empresas privadas, comunidades de la ciudad y demás lugares donde se solicite.	Para el apoyo de Evaluación diagnóstica (Se evalúa en qué grado de consumo se encuentra la persona) y para la terapia individual se requiere: Hacer cita al número: (664) 104-2525. Pagar una cuota de recuperación de \$55 mínima
	Estatad	Programa de Reconstrucción Personal	Brindar tratamiento psicoterapéutico a personas que hayan consumido alguna sustancia psicoactiva, a través del cual se le acompaña y ayuda a desarrollar clara conciencia de enfermedad, orientándolo a identificar pensamientos y conductas negativas, enfocándose a un cambio saludable.	Identificación Oficial
	Estatad	Atención a Parto normal	Brindar servicios de atención médico a la mujer embarazada y en trabajo de parto, garantizando el bienestar de la madre y el recién nacido.	Monto a calcularse (gratuito en caso de contar con seguro popular). Identificación Oficial o constancia de estudios en caso de ser menor de edad. Comprobante de domicilio CURP
	Estatad	Planificación familiar y anticoncepción	Proporcionar información, consejería, prescripción y aplicación de métodos anticonceptivos temporales y permanentes con el propósito de que individuos o parejas disfruten de una vida sexual y reproductiva satisfactoria, saludable y sin riesgo, con absoluto respeto a sus derechos y a su libre decisión. Dirigido a mujeres en edad fértil de 20 a 49 años de edad y hombres de 20 a 64 años de edad.	No hay requisitos
Puebla	Estatad	Servicios de Salud Oportunos, con enfoque	Salud itinerante que llega a los lugares donde no hay atención médica. Sistema de Urgencias médicas	No hay requisitos

Ciudad	Nivel	Nombre del Programa	Descripción del programa	Requisitos
		especial en la población vulnerable	avanzadas Salud mental Atención a las adicciones.	
CDMX	Entidad	Asesoría, orientación y capacitación integral a mujeres de la Ciudad de México	Asesorar, orientar y en su caso capacitar a las mujeres en temas de salud, interrupción legal del embarazo, en derechos sexuales y reproductivos, VIH, salud sexual y reproductiva, entre otras con la finalidad de encontrar respuesta a sus necesidades.	No hay requisitos
	Entidad	Atención a personas en situación de calle o abandono social en los Centros de Asistencia e Integración Social (C.A.I.S.)	A través de 10 Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS), atender a la población vulnerable, en abandono social o en situación de calle, brindando servicios asistenciales. (Salud, alimentación, vestido, vivienda).	Encontrarse en situación de calle o abandono social. No contar con servicios de atención médica en instituciones públicas o privadas. Tener carencias en materia de alimentación, vestido y vivienda. Ser residente de la Ciudad de México
	Entidad	Atención a personas en riesgo de vivir en la calle e integrantes de las poblaciones callejeras	Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios mediante el ofrecimiento de apoyos y servicios, como: servicio de dormitorio, alimentación, baño, orientación psicológica, orientación en trabajo social, canalización para atención médica, actividades recreativas, culturales y deportivas, entre otras.	No hay requisitos
	Entidad	Programa Atención Integral a Personas Integrantes de las Poblaciones Callejeras (Paipic) 2018	Brindar servicios asistenciales consistentes en: alimentación, ropa, baño, servicio médico de primer nivel de atención, lavado de ropa, cobija, corte de cabello valoración psiquiátrica y pernocta temporal, a personas integrantes de las poblaciones callejeras, por medio de las brigadas de intervención.	Datos generales para el llenado de la cédula correspondiente (en caso de no estar en condiciones de otorgarlos debido a problemas mentales, de salud o por intoxicación, estos podrán ser omitidos)
Acapulco	Entidad	Prevención y Control de Adicciones	Prevenir del control del tabaco, alcohol y drogas ilícitas. Es gratuito. Se Solicita de manera telefónica o por escrito	No hay requisitos
	Entidad	Atención Médica	Atención a toda la población en general en todas las Unidades del Sector Salud. El costo es variable y no tiene requisitos.	No tiene requisitos
	Entidad	Planificación familiar	Ofertar los diferentes métodos anticonceptivos de manera gratuita a los usuarios mujeres y hombres en edad fértil con vida sexual activa y que deseen regular su fertilidad en las 867 unidades de salud existentes en las 7 jurisdicciones sanitarias de la entidad, Tierra Caliente, Norte, Centro, Montaña y Costa Grande.	No hay requisitos
	Entidad	Atención al embarazo, parto y puerperio	Proporcionar control prenatal a mujeres embarazadas, detección oportuna del hipotiroidismo congénito en recién nacidos, atención del parto y puerperio en todas las Unidades de Salud existentes en las 7 Jurisdicciones Sanitarias de la entidad, Tierra Caliente, Norte, Centro, Montaña, Costa grande. Es gratuito.	No hay requisitos

Vida libre de violencia

Sofía tiene un talante desconfiado, pero sonrío cuando ha logrado establecer confianza, su risa es estruendosa y alegre. Ha tenido que sobrevivir en la calle porque en su familia lo único que recibió fueron insultos y golpes. Sabe que puede regresar, conoce el camino, pero no desea volver... no la ayudaron entonces y no lo harán ahora. En algunos lugares le dicen que vaya con ellos, pero no comprenden que para ella la familia ahora es la que ha encontrado entre las personas que habitan las calles, con quienes ha tejido redes de solidaridad.

En reiteradas ocasiones ha consumido sustancias, y también las ha dejado. Los policías la han levantado del lugar donde dormía con golpes; alguna vez intentaron subirla a la fuerza a una camioneta y logró escapar; desconocidos incendiaron la “casa” que había armado con sus compañeros sobre la acera. Y también lo hicieron antes de que viviera ahí.

Ha intentado rentar en departamentos y ha rentado en hoteles. Cuando visitaba a sus amigos, decidió quedarse a dormir en su antiguo lugar. Un desconocido la violó durante la madrugada. Sus compañeros y compañeras lograron sacarlo a golpes, llamaron a la policía y, cuando la patrulla llegó, los policías le dijeron que era su culpa por vivir en la calle. No pensó que podría levantar una denuncia en ese momento, no lo sabía, y los agentes ni siquiera lo mencionaron, solamente emitieron su prejuicio y se fueron.

Comenzó entonces a estar más triste de lo habitual, sin ganas de comer ni de hacer nada. Entró en depresión y sintió deseos de abandonarlo todo, incluso llegó a culparse al pensar que podría haber hecho más para defenderse. Ya no le gusta estar sola y, sin embargo, también tiene claro que, después de que su novio la golpeará y robara, con él ya no volvería.

La han robado, la han extorsionado, la han golpeado, la han insultado. Han sido personas desconocidas, vecinos de la calle, servidores públicos o incluso su familia, pero ella suele guardar esos momentos terribles porque así se considera más fuerte. Ha tenido que serlo por ella misma y porque siente que debe hacerlo frente a su hijo, aquel que le ha quitado el DIF haciéndole creer que era mala madre, insuficiente e incompetente para criarlo. Solo cuando acudió a una OSC se enteraría de todos los derechos con los que cuenta, tramitaría su acta de nacimiento, gestionaría poder ver a su hijo, repensaría acudir a terapia y comenzaría a pensarse valiosa también con la compañía de su nueva familia en la calle.



Marco normativo

Para las mujeres, el derecho a una vida libre de violencia representa la garantía de que ninguna acción u omisión cause daño, sufrimiento (psicológico, físico, económico o patrimonial) o la muerte, ya sea en el ámbito privado o público. Este derecho a su vez garantiza el respeto a la vida, a la integridad física, psíquica y moral, a la libertad y seguridad personales, a estar libre de discriminaciones y a no ser educada y valorada bajo patrones estereotipados. Este derecho se engrana con los derechos a la vida y la justicia y permite el libre ejercicio del resto de los derechos humanos de su poseedora. El Estado mexicano tiene como asignatura pendiente su protección y ejercicio, pese a que existe una normatividad internacional que lo obliga.

Internacional

- PIDCP (art. 2, 3, 7, 9 y 26)
- CEDAW (art 1, 2, 3, 4, 5 y 6)
- Convención de Belém do Pará (art. 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9)
- CIDJ (art. 5, 6, 10, 11 y 16)
- Comité DESC, Observación General núm. 20 (párr. 8, 12 y 17)
- DUDH (art. 1, 2, 5)
- CADH (art. 1, 5, 6, 7 y 24)
- CSDN (art. 1, 2 y 37)
- Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la justicia de menores, Reglas de Beijing (artículo 12)
- Declaración Americana, art. II
- Convención Americana, art, 1, 17 y 24
- Protocolo de San Salvador, artículos 1, 2 y 3
- Carta Democrática Interamericana, art. 4 y 9
- Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, párr. 141
- Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, Serie A No. 18, párr. 88, citados en Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 170
- Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Recomendación General 28 sobre las Obligaciones de los Estados Partes bajo el artículo 2 de la CEDAW, 19 de octubre de 2010, párr. 13.

Tabla 5.1 Obligaciones y normatividad sobre el derecho a una vida libre de violencia

Derecho humano	Obligaciones reforzadas en el marco del principio de igualdad y no discriminación	Elementos normativos/obligaciones
A una vida libre de violencia	"a) Adoptar medidas suficientes para prevenir que la discriminación múltiple ocasione abusos físicos, psicológicos, emocionales o sexuales en contra las mujeres que viven en la calle.	I. Transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, incluyendo la formulación de programas y acciones de educación formales y no formales, en todos los niveles educativos y de instrucción, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la violencia contra las mujeres; II. Educar y capacitar en materia de derechos humanos al personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres; III. Educar y capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres al personal encargado de la impartición de justicia, a fin de dotarles de instrumentos que les permita juzgar con perspectiva de género
A no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes	b) Garantizar atención especializada a las mujeres que viven en la calle y enfrentan situaciones de violencia basadas en estereotipos y prejuicios derivados de la discriminación sistémica hacia las poblaciones callejeras."	Prevenir los desalojos forzosos fundados en la condición de las personas
A que se respete su integridad física, psíquica y moral	a) Adoptar las medidas necesarias para prevenir y erradicar los desalojos forzosos fundados en la condición de las personas que viven en la calle. b) Abstenerse o impedir el internamiento forzoso de las poblaciones callejeras en instituciones privadas o públicas.	a) Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características sociodemográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. b) Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual. c) Crear una base nacional de información genética que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional; la información genética y muestras celulares de los familiares de las personas desaparecidas que lo consientan; la información genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada.
A la integridad, libertad y seguridad personales	"a) Adoptar las medidas necesarias para que la integridad física, mental y emocional no se vea trastocada por motivos de discriminación en contra de las personas que viven y sobreviven en la calle.	a) Garantizar la protección frente a afectaciones a la integridad personal por razones de discriminación; b) impulsar la creación de unidades de atención y protección a las víctimas de violencia; c) prohibir detenciones ilegales o arbitrarias basadas en la criminalización de la vida en la calle o las actividades de sobrevivencia que realizan las poblaciones callejeras

Derecho humano	Obligaciones reforzadas en el marco del principio de igualdad y no discriminación	Elementos normativos/obligaciones
A ser libre de toda forma de discriminación	b) Prevenir e investigar de manera exhaustiva las afectaciones causadas por autoridades en la integridad física, psíquica y moral de las poblaciones callejeras suscitadas en los operativos.	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, artículos 5, fr. VIII, IX; 13; Código Penal: Artículo 198; Artículo 199; Artículo 200; Artículo 201; Artículo 202; Artículo 203; Artículo 204 <ul style="list-style-type: none"> • Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: Artículo 6, Frac. I a la VI; Artículo 7, Frac. II y III • Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: Artículo 2, Frac. I a la IV; Artículo 4, Frac. I a la IV; Artículo 8; Artículo 9 • Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación: Artículo 3; Artículo 4
A un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos	c) Garantizar la incorporación de la discriminación como agravante en las sanciones y reparaciones que se establezcan como resultado de agresiones a la integridad personal de las poblaciones callejeras.	Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz atención y protección; brindar a las víctimas la información integral sobre las instituciones públicas o privadas encargadas de su atención
Fuente: Elaboración propia a partir de los instrumentos listados.		

El Estado mexicano está obligado a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, no solamente por estar comprometido a través de tratados y convenios internacionales sino su sustento en la propia legislación de los Estados Unidos Mexicanos. Es necesario que aplique la legislación vigente de manera coordinada y conjunta entre los niveles federal, estatal y municipal, así como entre los tres poderes de la federación, a través de las diversas instituciones y programas para efectivamente prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, estableciendo esta necesidad irrecusable para favorecer el desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. A continuación, se enuncia dicha normatividad:

Tabla 5.2 Marco normativo nacional sobre vida libre de violencia

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, art. 16, 17, 19, 38, 43, 45, 47 y 48; Ley General Para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres, artículo 1, 2, 3, 5, 2, 12, 15, 16, 17, fr. VII; CPEUM art. 1,14, 16, 17, 18, 21, 22, 103 y 107); Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes (art. 45); Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad (art. 42, fracción vi).

Alcaldía Cuahtémoc, Ciudad de México	Acapulco, Guerrero	Tijuana, Baja California	Guadalajara, Jalisco	Puebla, Puebla
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal; Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal; Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal; Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal	Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado de Guerrero; Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, art. 5; Código Penal: art. 203, 130, 135, 138, 150, 178, 180, 183-185, 187, 188, 190, 193, 195 y 198-204; Código Civil at. 27; Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres	Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Código Penal: art. 129, 161, 242 y 307; Código Civil art. 163; Ley del Instituto de la Mujer; Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación; Constitución Política art. 7; Ley de Asistencia Social; Ley de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social; Ley sobre la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana	Constitución Política del Estado de Jalisco art.4; Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres; Ley de Salud; Constitución Política; Ley para prevenir, sancionar, erradicar y reparar la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos o degradantes; Ley Estatal para la igualdad entre hombres y mujeres	Constitución Política art.7, 26; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación; Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla

Testimonios recopilados en encuestas

La violencia contra las mujeres continúa siendo un tema pendiente en la agenda de los municipios de México. En 2016, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 66.1% de las mujeres habían sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación. Esta violencia abarca consecuencias evidentemente negativas para las mujeres, pero también para la comunidad

en la que se insertan e implica una transmisión intergeneracional de pautas de comportamiento violentas y de reproducción de estereotipos de género que refuerzan dichas acciones al normalizarlas.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) sostiene, a través de los Principios Rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, que “los Estados deben adoptar medidas enérgicas para combatir la violencia de género. Las mujeres que viven en la pobreza y

que son víctimas de la violencia de género tienen dificultades particulares para acceder a la justicia y para liberarse de las relaciones en que son objeto de abusos.” (2012: 8)

Particularmente, en las áreas geográficas donde se realizó la encuesta, el contexto de violencia no es más alentador. En **Jalisco**, entre 2016 y 2017, aumentaron 8.4% los homicidios de mujeres y posteriormente, entre 2017 y 2018, incrementó esta cifra hacia 97.9%. Derivado de lo anterior fue dictaminada, en noviembre de 2018, la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en contra de las Mujeres (AVGM). La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) declaró, en junio de 2017, la AVGM en ocho municipios del estado de Guerrero, entre ellos **Acapulco**. En abril de 2019 también se establecería la declaratoria en diversos municipios de **Puebla**, entre ellos la capital estatal.

Mientras que en Baja California, en 2016, se notificó la no procedencia de la AVGM. En la **Ciudad de México** se continúa con un debate sobre la declaratoria de alerta de género en tanto Conavim considera que hay inconsistencias en el fallo del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, el cual ordenó a la Conavim decretar la Alerta por Violencia de Género en la capital del país a más tardar el 23 septiembre del año en curso. Dicha exigencia recuerda que en 2018 se registraron 43 feminicidios en la ciudad, mientras que hasta septiembre de 2019 se contabilizaron 26. Esto puede mostrar la negativa del gobierno local para reconocer la vulnerabilidad de las mujeres y generar los mecanismos institucionales adecuados para garantizar la seguridad y justicia para las ciudadanas:

El problema de la violencia contra las mujeres no ha disminuido, así [...] **de los 46.5 millones de mujeres de 15 años o más que residen en el país, 30.7 millones (66.1% en promedio) han sufrido al menos un incidente de violencia:** casi la mitad (49%) violencia emocional, seguida por un 41.3% que declaró haber sufrido violencia sexual; 34% física y 29% económica, patrimonial o discriminación a lo largo de su vida, en al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor. Lo

anterior quiere decir que **en México casi 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia, la mayoría del tipo emocional y sexual.** (CNDH, 2018: 11)

De acuerdo con Carmina Jasso y Karina González, las defunciones por feminicidio presentadas en México contienen una brecha que impide obtener las cifras reales. Ellas proponen comparar los feminicidios con la cifra de homicidios de mujeres, aun cuando estos no hubieran sido tipificados primeramente como feminicidios, y señalan:

Todos los casos son reflejo de una de las formas de violencia más extrema contra las mujeres que atenta contra la vida, que es el bien jurídico supremo tutelado por la ley. Y muy probablemente, muchas de estas defunciones por homicidio cumplen con la tipificación de feminicidio que se define como la privación de la vida de una mujer por razones de género.

En cada uno de los códigos penales en las entidades hay variaciones importantes en lo que se refiere a las “razones de género” pero de manera general contemplan que la víctima tenga signos de violencia sexual o lesiones o mutilaciones, la existencia de antecedentes de violencia, incomunicación, y exposición o exhibición del cuerpo en un lugar público, así como la existencia de una relación sentimental, afectiva o de confianza entre la víctima y el victimario. (2018)

De seguir esta apuesta metodológica, podemos observar a través de la Tabla 5.3 un incremento en los homicidios de mujeres en el país, aun con las alertas de género declaradas, lo cual le evidencia como un mecanismo que necesita atender a los análisis que diversas organizaciones han elaborado sobre su aplicación y eficacia, aunque su mayor contribución sea simbólica ya que implica un avance en el reconocimiento de la magnitud de la problemática de violencia contra las mujeres en nuestro territorio.

Tabla 5.3 Homicidios de mujeres en México

Estado	2016	2017	2018	2018 [Feminicidios]	Cambio porcentual entre 2017- 2016	Cambio porcentual entre 2017- 2018 *
Baja California	130	205	272	26	57.7%	32.7%
Ciudad de México	146	143	139	43	-2.1%	-2.8%
Guerrero	249	215	229		-13.7%	6.5%
Jalisco	131	142	281		8.4%	97.9%
Puebla	96	143	135		49.0%	-5.6%
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Estadísticas de mortalidad. * Cifras preliminares del año 2018, con corte al 15 de julio del 2019.						

Se puede observar en la Tabla 5.4 la comparativa entre los homicidios y aquellas defunciones caracterizadas como feminicidios. La brecha existente entre unos y otros es considerablemente amplia, como lo muestra la variación porcentual. De allí que sea necesario unificar los criterios en los distintos municipios e instar a las autoridades.

Tabla 5.4 Defunciones de mujeres por homicidio en 2016 2017 y 2018

Estado	Homicidios 2018	Feminicidios 2018	Variación porcentual
Baja California	272	26	-90.44%
Ciudad de México	139	43	-69.06%
Guerrero	229	33	-85.59%
Jalisco	281	32	-88.61%
Puebla	135	32	-76.30%
Nacional	3663	901	-75.40%
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Estadísticas de mortalidad y SNSP. Instrumento para el registro, clasificación y reporte de delitos y las víctimas. * Cifras preliminares del año 2018, con corte al 15 de julio del 2019.			

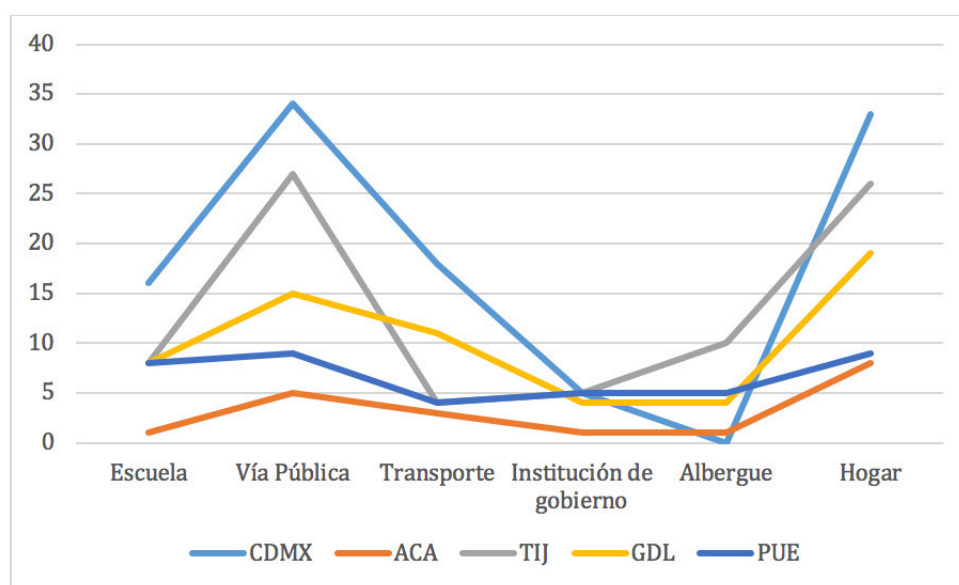
A pesar de la tipificación del feminicidio como un delito autónomo con elementos objetivos que describen las razones de género, en los casos mencionados anteriormente, se evidencia que existen resistencias por parte de los operadores jurídicos, tanto para iniciar las investigaciones desde la hipótesis de feminicidio, como para considerar acreditadas las razones de género

durante el desarrollo de las investigaciones, así como en aquellos casos que han sido presentados ante el Poder Judicial. “[...]Otro obstáculo identificado es que estas deficiencias en las investigaciones que invisibilizan las razones de género en los asesinatos de mujeres, se manifiestan en las resistencias para iniciarlas como feminicidio” (Jasso y González, 2018: 206).

Las mujeres que viven y sobreviven en las calles se han enfrentado a una serie de violencias por ser consideradas vulnerables. Aun cuando en las zonas que habitan exista la declaratoria de género o algunos programas sociales, ante el desconocimiento de las herramientas con las que cuentan, han normalizado la violencia y también las revictimización por parte de las mismas autoridades.

Ante los eventos de violencia que las mujeres encuestadas sufren se les preguntó en qué espacios había ocurrido. De total de las cinco ciudades se evidenció que 13% de estos ocurrieron en la escuela, mientras que 29% en la vía pública, 13% en el transporte, 7% en instituciones de gobierno, 7% en albergues y 31% en sus hogares. Esto último permite comprender la salida del núcleo familiar tempranamente respecto de las tradiciones culturales generalizadas en el territorio nacional, pues este sería justamente el primer lugar donde se experimenta la violencia. Ante ello se debe reconocer que la práctica usual de los programas gubernamentales, así como de algunas OSC que pretenden reintegrar a las mujeres que habitan las calles a su núcleo familiar no considera que ese es el foco de la violencia de la cual huyen, y denota una serie de valores morales incrustados en dicha práctica. Es decir, es necesario analizar los casos y su contexto particular para mostrar alternativas a las mujeres más que imponer decisiones basadas en formas tutelares y prejuicios morales. En la Figura 5.1 se puede observar el detalle por ciudad de los lugares donde las mujeres refirieron haber sido violentadas.

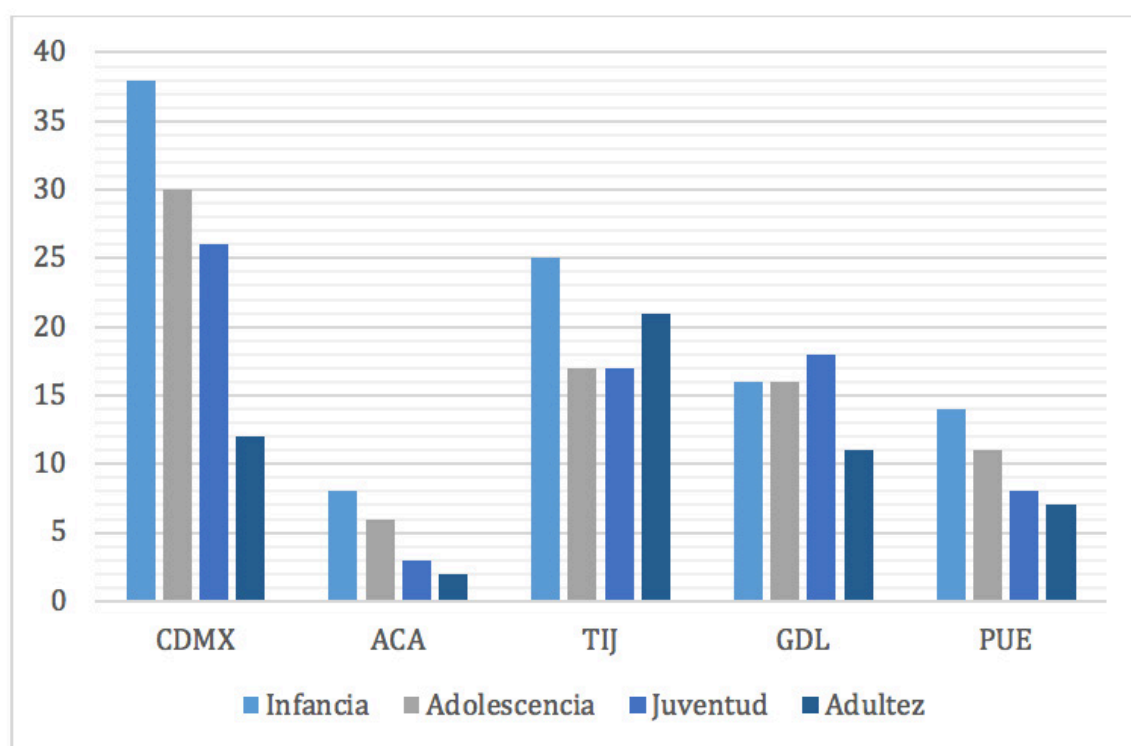
Figura 5.1 Lugares donde se experimenta violencia



Fuente: Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol, 2019).

Por otro lado, del total de mujeres encuestadas, se ubicó que 33% de los eventos de violencia ocurrieron en la infancia mientras que 26% en la adolescencia, 24% en la juventud y 17% en la adultez. Ciertamente, la violencia experimentada en la infancia es la más alarmante y se puede comprender la normalización de ciertos tipos de violencia experimentados como naturales al ser sometidas desde una época muy temprana a abusos, incluso algunos eventos ni siquiera son reconocidos en un primer momento como violentos debido al aprendizaje y asimilación como cotidianidad. Además, ellas han desarrollado estrategias de sobrevivencia a partir de la experimentación reiterada de dichos eventos. En la Figura 5.2 se muestra el detalle por ciudad de las etapas de la vida donde detectaron haber sido víctimas de violencia.

Figura 5.2 Etapas en la que se experimentó violencia



Fuente: Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol, 2019).

En la Tabla 5.5 se muestra, a través de una escala de colores, los eventos de violencia generalmente experimentados por las mujeres entrevistadas. La mayoría de las mujeres han sentido miedo y las han retirado con violencia de los espacios donde viven, también las han avergonzado, menospreciado, humillado gritado e insultado, y han sido golpeadas. Cabe destacar que la totalidad de las mujeres sufrieron al menos un evento de violencia.

tabla 5.5 Eventos de violencia

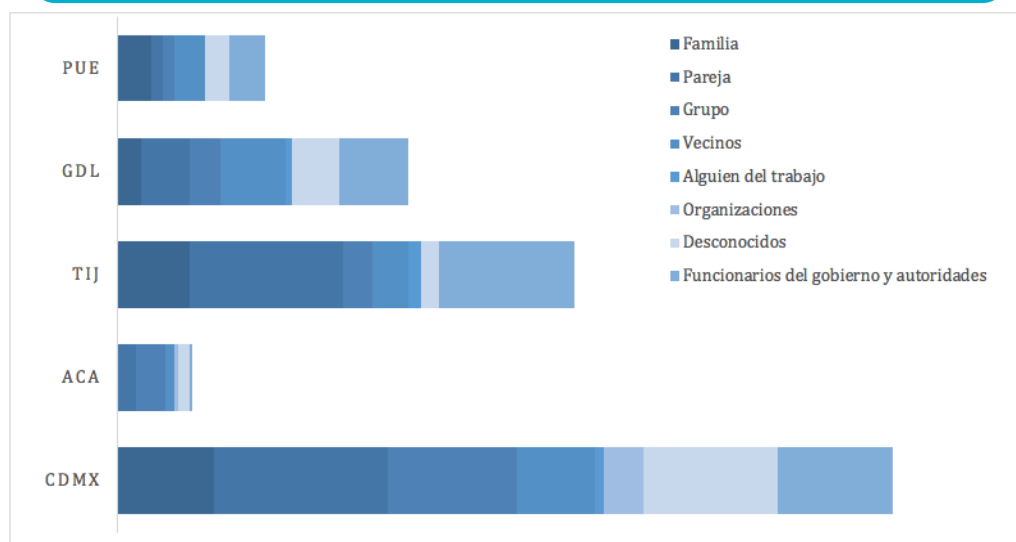
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	ñ
CDMX	12	43	26	31	19	9	8	8	10	11	29	9	18	12	13
ACA	0	4	1	3	1	0	2	1	2	2	3	3	1	1	1
TIJ	8	15	14	12	13	9	13	9	9	7	11	5	10	9	8
GDL	7	13	11	12	6	3	4	3	7	7	10	3	5	2	4
PUE	1	12	5	5	3	3	4	2	1	0	7	2	3	0	1

Fuente: Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol, 2019).

Abajo se enlista la totalidad de eventos de violencia que las mujeres han manifestado haber experimentado en el transcurso de su vida:

- Prohibido estudiar o trabajar
- Hecho sentir miedo
- Corrido del espacio donde te quedas
- Avergonzado, menospreciado, humillado, gritado o insultado
- Te han destruido, tirado o escondido documentos oficiales o alguna pertenencia
- Te ha pedido o quitado dinero para evitar que algo te pase
- Te han amenazado con enviarte a la cárcel si no haces algo específico
- Han provocado que te detengan o encierren por no hacer algo que te pidieron
- TE han amenazado con quitarte o te han quitado a tus hijos
- Te han amenazado con matarte o matar a tus hijos con algún arma
- Te han golpeado con las manos o con algún objeto
- Te han ahorcado, quemado, disparado o lastimado con otra arma con la intención de matarte
- Te han exigido tener relaciones sexuales
- Cuando tienes relaciones sexuales, te han obligado a hacer cosas que no te gustan
- Han usado su fuerza física para obligarte a tener relaciones sexuales.

Figura 5.3 Agentes agresores en diferentes eventos de violencia



Fuente: Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol, 2019).

A través de la Figura 5.3 podemos observar a los principales agentes agresores de las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras. En la Ciudad de México, los principales agresores son la pareja, desconocidos, el grupo y funcionarios de gobierno y autoridades. Mientras que en Acapulco lo son el grupo, desconocidos y la pareja. Por otro lado, en Tijuana las agresiones a las mujeres las encabezan funcionarios de gobierno y autoridades junto con la pareja y la familia. En Guadalajara y Puebla quienes perpetran estos actos son los funcionarios de gobierno y los vecinos.

La grave crisis de derechos humanos que se presenta en el país fue abordada en el informe *Situación de los derechos Humanos en México*, allí se reconoció a la violencia como producto multidimensional:

Se caracteriza por una situación extrema de inseguridad y violencia; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. El efecto de la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza y/o en zonas marginadas, las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y pueblos indígenas, entre otros. [...] La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. (CIDH, 2016: 32)

Es necesario un abordaje multidisciplinario que reconozca que las violencias sobre las mujeres son reflejo de problemáticas hondas y diversas que afectan a todo el territorio y que se vuelven exponenciales en grupos particularmente vulnerabilizados como el de las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras.

Solicitudes de información

Ante las respuestas, y ausencia de ellas, resumimos algunas condiciones respecto de la violencia de género y la manera en que el gobierno estatal realiza el cumplimiento de su obligación para garantizar el acceso a una vida libre de violencia en la población femenina del territorio nacional.

En Guerrero, la Secretaría de la Mujer, en el periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018, señala que las mujeres atendidas por violencia de género fueron 7 633. Sin embargo, no se cuenta con el registro de mujeres integrantes de las poblaciones callejeras, sin techo, situación de calle o indigentes. El tipo de acompañamiento que recibieron fue jurídico y psicológico (Folio: 00539519).

La Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (FEVIMTRA) respondió que ha “atendido 441 denuncias por diversos delitos en agravio de mujeres, niñas y niños que constituyen a una transgresión a una vida libre de violencia, de las cuales se iniciaron 7 averiguaciones previas y 434 carpetas de investigación” (Folio: 0001700190519). Sin embargo, no se tiene registro de si alguna de las denunciantes pertenece a las poblaciones callejeras, quienes no suelen tener información respecto de los mecanismo de denuncia ni sobre los derechos con los que cuentan, además de que las pocas que lo intentan son discriminadas por apariencia y carecen de los recursos para poder continuar con los procedimientos judiciales.

En cuanto a las cifras de beneficiarias del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las entidades Federativas (PIMEF) operado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) solo se tiene registro de las mujeres indígenas y con alguna discapacidad desglosadas del total de su población objetivo (Folio: 2099900015919).

Acciones y programas de atención

Cuauhtémoc, Ciudad de México

Tabla 5.6 Servicios, acciones y programas. Cuauhtémoc, Ciudad de México

Servicio o Programa	Descripción	Acceso	Observaciones
CTA Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales	Atención y asistencia multidisciplinaria (psicológica, médica, jurídica, ILE, a las víctimas directas e indirectas de los delitos contra la libertad y la seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, sobre sus derechos como víctimas del delito, con la finalidad de empoderarla respecto a las esferas que se vieron afectadas por la comisión del hecho violento	https://pgj.cdmx.gob.mx/nuestros-servicios/en-linea/mp-virtual/cta-centro-de-terapia-de-apoyo-victimas-de-delitos-sexuales	Se realiza en la Alcaldía Benito Juárez
Atención a víctimas de abuso o violencia	La Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar es la encargada de recibir las denuncias por delitos de violación, abuso y violencia familiar, entre otros.	https://www.pgj.cdmx.gob.mx/nuestros-servicios/fiscalia-central-de-investigacion/para-la-atencion-de-delitos-sexuales/agencias-especializadas	No cuenta con información acerca de los trámites o de sus procedimientos
ADEVI Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas del Delito Violento	Terapia: psicológica en crisis, familiar y grupal. Terapia para niños y niñas, a fin de trabajar el duelo. Gestión de servicios de asistencia social, salud, servicios funerarios, pasajes, hospedajes y medicamentos. Acompañamiento, asesoría y representación jurídica a la víctima directa e indirecta en la Coordinación Territorial correspondiente. Inconformidades y escritos para presentar pruebas que ayuden al esclarecimiento de los hechos que se investigan. Atención a las víctimas del delito de tortura. Atención a las víctimas del delito de secuestro.	https://www.pgj.cdmx.gob.mx/nuestros-servicios/ADEVI	Solicitan identificación oficial y comprobante de domicilio

Fuente: Elaboración propia con base en información pública.

Tabla 5.7 Servicios, acciones y programas. Guadalajara, Jalisco

Servicio o Programa	Descripción y requisitos	Acceso	Observaciones
Unidades para la Igualdad de Género	Áreas designadas dentro de las instancias en la administración municipal para implementar las acciones del Programa Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Municipio de Guadalajara. Busca: promover, proteger, respetar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia del derecho a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.	https://guadalajara.gob.mx/noticias/guadalajara-avanzamos-vida-libre-violencia-mujeres	
InMujeres GDL Asesoría jurídica y psicológica	Brinda asesoría jurídica a cualquier persona que lo solicite, teniendo como prioridad la atención de las violencias contra las mujeres, mediante atención de primer contacto, especializada, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. Canaliza aquellos casos que lo ameriten, a las dependencias municipales, estatales y federales que puedan dar seguimiento hasta su conclusión. Brinda asesoría psicológica a cualquier persona que lo solicite, teniendo como prioridad la atención de las violencias contra las mujeres, mediante atención de primer contacto, especializada, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. Canaliza aquellos casos que lo ameriten, a las dependencias municipales, estatales y federales que puedan dar seguimiento hasta su conclusión.	https://www.immgob.mx/	No muestra requisitos
InMujeres GDL Coordinación Vida Digna	Se realiza una campaña sobre el impacto de las violencias sutiles, ejemplo violencia en el noviazgo y acoso callejero, en la reproducción de violencias más graves contra las mujeres, así como la difusión masiva del Violentómetro. Se llevaría a cabo también en redes sociales, dependencias gubernamentales, transporte público, parabuses y en colonias con mayor índice de violencia contra las mujeres, donde se impartirán talleres itinerantes sobre autocuidado en el espacio público, capacitación en cultura de paz y sobre la construcción de nuevas masculinidades no violentas.	https://www.immgob.mx/programas/prevencion-de-la-violencia-para-mujeres-y-hombres	No se cuenta con información de indicadores o población objetivo

Fuente: Elaboración propia con base en información pública.

Tabla 5.8 Servicios, acciones y programas. Acapulco, Guerrero

Servicio o Programa	Descripción y requisitos	Acceso	Observaciones
Atención a víctimas de abuso o violencia (CAIV)	La Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar es la encargada de recibir las denuncias por delitos de violación, abuso y violencia familiar, entre otros.	http://fiscaliaaguerrero.gob.mx/atencion-a-victimas-de-abuso-o-violencia/	No cuenta con información acerca de los trámites o de sus procedimientos
Albergue Temporal a Mujeres Víctimas de Violencia Extrema	Brindar un espacio integral y multidisciplinario que permita resguardar la integridad física de las mujeres, hijas e hijos en situación de violencia extrema, las 24 horas del día, los 365 días del año, con servicios de alojamiento temporal gratuito, alimentos, vestimenta, calzado, artículos de primera necesidad; servicios psicológicos, trabajo social, jurídicos, educativos, médicos y pedagógicos; no mayor a tres meses, a menos que persista su estabilidad física, psicológica o su situación de riesgo. Asimismo, diseñar un proyecto de vida que permita favorecer su empoderamiento y autonomía económica, con oficios y/o actividades económicas con perspectiva de género que les proporcione conocimientos y habilidades a las usuarias para la obtención de un empleo o el desarrollo de una actividad productiva no estereotipada.	http://guerrero.gob.mx/tramites/atencion-integral-a-mujeres-internas-en-los-cerros-y-gestion-administrativa/	Es necesario ser referida por un CAIV y otra dependencia
Programa de Asistencia y Prevención de la Violencia contra las Mujeres	Ampliar y mejorar la atención especializada para la asistencia, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones, a través de la ejecución de diversas acciones de coordinación interinstitucional con otras instancias y organismos no gubernamentales, que coadyuven en la protección de los derechos humanos de las mujeres y la disminución de los índices de violencia de género en el estado, en la perspectiva de que las mujeres ejerzan su derecho a tener una vida sin violencia y discriminación.	http://guerrero.gob.mx/programas/programa-de-asistencia-y-prevencion-de-la-violencia-contra-las-mujeres/	

Fuente: Elaboración propia con base en información pública.

Tabla 5.9 Servicios, acciones y programas. Tijuana, Baja California

Servicio o Programa	Descripción y requisitos	Acceso	Observaciones
Programa Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en Tijuana	Garantizar la prevención integral para suprimir, reducir, contrarrestar o evitar los factores de riesgo causales de la violencia contra las mujeres para generar cambios conductuales y relaciones sociales constructivas. Garantizar el acceso a los servicios de atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia. Garantizar a las mujeres que viven en situación de violencia el efectivo acceso a la justicia, la reparación del daño y la sanción de los agresores. Fortalecer la coordinación institucional en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres	http://www.immujer.tijuana.gob.mx/pdf/PROGRAMA%20PASE_22JULIO_2016.pdf	
Atención integral	En este programa DIF Municipal atiende a cualquier tipo de población, sobre todo aquellos usuarios víctimas de violencia física, verbal, económica o sexual, quienes son referidos a cualquiera de nuestros servicios (asesoría jurídica, atención psicológica, trabajo social, canalización a albergues, línea de apoyo, pláticas prematrimoniales, escuela de valores, talleres)	http://www.dif.tijuana.gob.mx/familiar.aspx	La asistencia psicológica tiene una cuota de recuperación de \$60.00 pesos
Atención a víctimas y testigos	Sin información	https://www.pgjebc.gob.mx/home-2/atencion-a-victimas-del-delito/	No se muestran requisitos

Fuente: Elaboración propia con base en información pública.

Puebla, Puebla

Tabla 5.9 Servicios, acciones y programas. Puebla, Puebla

Servicio o Programa	Descripción y requisitos	Acceso	Observaciones
Atención Integral a Personas Víctimas de Violencia Intrafamiliar	Atención integral a personas víctimas de violencia intrafamiliar a través de atención médica, tratamiento psicológico, asesoría jurídica y acompañamiento para presentación de denuncias.	http://dif.pueblacapital.gob.mx/servicios/item/318-atencion-a-personas-victimas-de-violencia-intrafamiliar	Identificación oficial
Unidad de investigación especializada en violencia familiar y delitos de género	Sin información	http://fiscalia.puebla.gob.mx/index.php/tramites-y-servicios/servicios/numeros-de-atencion-para-casos-de-ninos-y-mujeres	No se muestran requisitos
Atención al Maltrato DIF Estatal	Otorgar servicios Jurídicos, Médicos, Psicológicos, y Sociales, por medio de una atención integral, solidaria, con perspectiva de género, respetuosa, multidisciplinario e interinstitucional.	http://difestatal.puebla.gob.mx/1/118/programas/alimentacion-y-desarrollo-comunitario/atencion-al-maltrato/	Indispensable identificación oficial y domicilio de localización

Fuente: Elaboración propia con base en información pública.

Acceso a la justicia

Lucía es una mujer con una sonrisa que ilumina la habitación, un día nublado se puede tornar primavera, pero como estrella fugaz su sonrisa se presenta en los momentos precisos: con alguna pequeña broma de sus hijos o algún recuerdo feliz. No ha tenido una vida fácil, y como decía Sofía ante la sorpresa de un visitante de una OSC sobre la seriedad de un joven de la calle: “¿De qué vas a sonreír en la calle? A veces ni sabes sonreír, a mí nadie me hizo cosquillas hasta que la conocí a ella.”

El trabajador de una gasolinera le permitió a Lucía quedarse a dormir durante un mes en el baño con sus dos hijas mayores mientras estaba embarazada del tercero. Entraba a dormir a las 12 de la noche y tenía que salir a las 5 de la mañana, aun cuando hiciera frío iba a sentarse con sus pequeños a una banca para esperar a una hora con más autos para ir a limpiar parabrisas y poder darle de comer a sus pequeñas.

Después de ese tiempo solventó dónde dormir cuando un colectivo de mujeres que trabajan y viven en la calle la invitó a vivir en su comunidad, rentaban una amplia casa y a ella le tocaría una habitación para hacerla su hogar, colaboraría con las labores de limpieza y para pagar la renta y los servicios con toda la solidaridad que les caracteriza.

Aunque es valiente y sigue adelante sin echar un paso atrás, la tristeza no se le separa. Años antes, cuando era apenas adolescente un sujeto

del grupo de calle abusó sexualmente de ella, se acercó a su madre, quien también con todas las dificultades anidadas, todas las posibilidades coartadas no pudo creerle en cuanto se lo dijo, sin embargo, con el tiempo lo haría.

Ambas no supieron entonces qué hacer, el sujeto permanece impune, porque no sabían cómo denunciar y ¿denunciar para qué? se preguntaría, si no le creerían, si hacen perdidosos los documentos, si al final no pasa nada. ¿De qué manera pensar en justicia en un mundo así? ¿En un lugar donde son ninguneadas?

Ella sigue adelante sin haber accedido a la justicia, y sigue adelante sin atención psicológica porque en una organización gubernamental para mujeres le negaron el servicio, y sigue adelante con todo esto a cuestas, una carga adicional que no debería soportar. En un mundo respetuoso de sus derechos ella podría vivir mejor. Ella merece vivir mejor. •



Marco normativo

El acceso a la justicia es un principio básico del estado de derecho. Este permite la imparcialidad y la no discriminación en el ejercicio de los demás derechos humanos, permite escuchar las necesidades y las voces de todas las personas. El acceso a la justicia asienta su obligatoriedad en las legislaciones internacionales, nacionales y locales, y se ubica como un tema de atención prioritaria en el rediseño de políticas públicas enfocadas a garantizar la igualdad y el combate a la violencia. Con base en ello, a continuación, se enlista el marco jurídico internacional que reconoce y garantiza el ejercicio del derecho de acceso a la justicia:

Internacional

- PIDCP (art. 2, 3, 7, 9 y 26)
- CEDAW (art 1, 2, 3, 4, 5 y 6)
- Convención de Belém do Pará (art. 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9)
- CIDJ (art. 5, 6, 10, 11 y 16)
- Comité DESC, Observación General núm. 20 (párr. 8, 12 y 17)
- DUDH (art. 1, 2, 5)
- CADH (art. 1, 5, 6, 7 y 24)
- CSDN (art. 1, 2 y 37)
- Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la justicia de menores, Reglas de Beijing (artículo 12)
- Declaración Americana, art. II
- Convención Americana, art. 1, 17 y 24
- Protocolo de San Salvador, artículos 1, 2 y 3
- Carta Democrática Interamericana, art. 4 y 9
- Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, párr. 141
- Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, Serie A No. 18, párr. 88, citados en Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 170
- Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Recomendación General 28 sobre las Obligaciones de los Estados Partes bajo el artículo 2 de la CEDAW, 19 de octubre de 2010, párr. 13.

Tabla 6.1 Obligaciones y normatividad en materia de acceso a la justicia

Derecho humano	Obligaciones reforzadas en el marco del principio de igualdad y no discriminación	Elementos normativos/obligaciones
A la seguridad jurídica	<p>a) A partir del reconocimiento de la situación de exclusión social de las poblaciones callejeras y la realidad cultural que supone sobrevivir en la calle, asegurar la difusión diversificada y comprensible de información jurídica básica para el ejercicio de los derechos.</p> <p>b) Allegar a las poblaciones callejeras información jurídica clara, precisa y accesible sobre los procesos que se siguen en su contra, así como de las acciones legales procedentes.</p> <p>c) Erradicar la estigmatización de actividades de sobrevivencia callejera para garantizar la no criminalización y vulneración de la presunción de inocencia.</p>	
Al debido proceso y garantías judiciales	<p>a) Eliminar obstáculos de carácter económico o social que condicionen el acceso de las poblaciones callejeras a procedimientos y recursos adecuados y efectivos.</p> <p>b) Garantizar en condiciones de igualdad asistencia judicial de alta calidad y servicios jurídicos a las poblaciones callejeras que no cuentan con recursos para pagar los costos de una representación.</p> <p>c) Desarrollar e implementar programas de formación dirigidos a las y los operadores jurídicos, a efecto de que cuenten con las herramientas necesarias para identificar las necesidades específicas de las poblaciones callejeras y desempeñar sus funciones en un marco de no discriminación.</p>	Difundir información diversificada y comprensible sobre los derechos de los grupos discriminados
Garantía de audiencia, derecho a ser asistido jurídicamente, a ejercer una defensa y a disponer de un plazo razonable para preparar los alegatos y formalizarlos, y para evacuar las correspondientes pruebas y la notificación previa sobre la existencia del proceso; derecho de contar con una decisión fundada relativa al fondo del asunto; el derecho al plazo razonable del proceso; y la necesidad de garantizar el procedimiento expedito de amparo	a) Remover aquellos obstáculos en el acceso a la justicia que tengan origen en la posición económica de las personas, y el deber de establecer reglas claras para el comportamiento de sus agentes; b) brindar mecanismos judiciales idóneos y efectivos para la protección de los derechos sociales, tanto en su dimensión individual como colectiva, c) instaurar mecanismos que aseguren la efectiva ejecución de las sentencias que dicta el Poder Judicial	Proporcionar a los grupos en situación de vulnerabilidad información jurídica clara y precisa sobre los motivos de su detención, los procesos que se siguen en su contra y las acciones o recursos que proceden
A recibir justicia pronta, gratuita, completa y expedita	a) fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;	<p>a) Capacitar a las y los servidores públicos en el ámbito del sistema judicial a efecto de que identifiquen las necesidades específicas de las personas y el grupo de población al que pertenecen;</p> <p>b) garantizar que las poblaciones sistemáticamente discriminadas reciban asistencia legal gratuita</p>
A no ser sancionado con penas o multas desproporcionadas	d) Impulsar procesos de evaluación del impacto que tienen los programas de formación en la disminución de sanciones penales o pagos de multas desproporcionadas en contra de poblaciones callejeras por el uso de espacios públicos y el consumo de drogas.	Erradicar sanciones penales o pagos de multas desproporcionadas
A igualdad de protección ante la ley y de la ley, y al acceso al sistema judicial	CPEUM, arts. 1, 4, 12 y 17; Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (artículo 15); Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (artículos 2o, 19 y 38); Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes (artículo 17); Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad (artículos 2o, fracción xv; y 28).	Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco, artículo 23

Tabla 6.2 Marco normativo nacional en materia de acceso a la justicia

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (art. 10, fracción v; artículo 11, fracción ix; art. 15). CPEUM (art. 1, 4, 12, 14, 16, 17, 20, apartado B, fracción i, 21). Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (art. 17; 45, apartados A, B y J; art. 46, apartado C). Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (art. 2, 19, 26, fracción ii; 38, fracciones iii y iv). Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad (art. 2, fracción xv; 28 y 30). Ley General Para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres (art. 1, 2, 3)				
Cuauhtémoc, Ciudad de México	Acapulco, Guerrero	Tijuana, Baja California	Guadalajara, Jalisco	Puebla, Puebla
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal (art. 16, fracción i y ii; 17, fracciones iii y iv; artículo 18, fracciones iii y iv). Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal (art. 54, 55, fracción ii; 56; 59, fracción i) Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal (art. 46, inciso c, e y f) Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y los Niños en Primera Infancia en el Distrito Federal (art. 9o, fracción i y ii) Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal (art. 50)	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero (art. 5, fr. III, IV, V, VI) Código Penal (art. 16, 301, Frac. I y II) Código Civil (art. 1, 735; 2, 27 Bis) Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (art. 6, Frac. I; 8, Frac. I a la XVI, numerales del 1 al 9; 35, Frac. I a la III, incisos del a al d; 46, Frac. V a la IX) Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (art. 7, Frac. VI; 18, Frac. I a la VIII; 36, Frac. IV; 57, Frac. VII) Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación (art. 2, Frac. IX; 11, Frac. XI; 18, Frac. III)	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, artículos 7, aps. D y E; 8, fr. VI; 56, Ley sobre la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, (art. 24) Ley de Asistencia Social para el Estado de Baja California (art. 4, fr. V; 17, fr. XI) Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar para el Estado de Baja California (art. 24) Código Penal (art. 9; 33, frac I a la III; 242 Bis) Código Civil (art. 1, 788; 2) Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (art. 3, frac III y V; 6, frac IV; 8, frac I a la VI) Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: (art. 1; 2, frac I a la III; 4; 46, frac III) Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación (art. 2; 15, inciso I; 22-29) • Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (art. 4; 46, frac III) Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California (art. 6, fr. VII)	Constitución Política del Estado de Jalisco art.7 y 8 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco, artículos 9, 23, 33, 34 49, 49bis y 50.	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla art.7,9,10, 12 fr.IV,IX, 95, 117, 123; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla art.38 fr.III ; Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla art.6 bis fr.XI-XII, 12,15, 16 fr.IV, VII; Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado. de Puebla art. 5 fr.I, 6 fr.IX,12, 18 fr.II, 20, 24-31, 35 fr.IV-V, VII, XII-XIII;Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla art.37 bis fr.IV.

Testimonios recopilados en encuestas

Con frecuencia el Sistema de Justicia mexicano se nutre de prejuicios y estereotipos asociados con la vida en la calle, como lo son la apariencia, el consumo de sustancias, el realizar actividades de subsistencia en el espacio público o realizar en el mismo espacio actividades de socialización. Con base en estos prejuicios y estereotipos se han tomado a las poblaciones callejeras como blanco de actos inculpativos y aplicación discrecional de la ley.

De acuerdo con Alma Liliana Mata Noguez:

La criminalización [juega un papel trascendental] como un proceso social que reproduce estereotipos y asigna etiquetas negativas a grupos de personas que comparten características y actividades específicas de supervivencia [...] Cabe destacar que esta situación deriva en muchos casos de actos de discriminación y múltiples violaciones a los derechos humanos (2015: 37)

La discriminación¹ que recae sobre estas personas se basa en considerarlos responsables de la “mala apariencia de la colonia”, de la inseguridad y la disminución de ventas en los comercios. Esta discriminación estructural y sistemática impide el ejercicio de sus derechos humanos, sin embargo no solo la discriminación representa un obstáculo sino también el desconocimiento de sus derechos y el desconocimiento de los mecanismos judiciales y procesales para exigirlos.

Esta discriminación no solo es practicada por los vecinos y transeúntes sino que también la demuestran los servidores públicos quienes al ser pertenecientes a la misma sociedad poco tolerante de la diversidad y poco respetuosa de sus derechos manifiestan el mismo ciclo discriminatorio: prejuicio->discriminación->criminalización. De

acuerdo con los resultados de la ENADIS 2017, a nivel federal el 4% de las mujeres y el 37% de los hombres consideran que “Los pobres se esfuerzan poco por salir de su pobreza”, es decir, ante las condiciones estructurales que llevan a un sujeto a vivir en la calle los servidores públicos pueden más bien considerar como decisión personal el mantenerse en la calle y además como un nulo esfuerzo por superar su condición. Esta discriminación impide garantizar la igualdad de jure y de facto para la población callejera.

Los tipos de discriminación a los que pueden ser sometidas las poblaciones callejeras son:

- Directa: Tratamientos diferenciados y perjudiciales.
- Indirecta: Normas o actos que en su aplicación causan afectación.
- Interseccional: Relación de un conjunto de factores que causan discriminación. (Mata, 2015: 39)

Sobre las normas que favorecen este clima de discriminación, estigmatización² y criminalización de las actividades en la vía pública de las mujeres que integran las poblaciones callejeras, encontramos los diferentes reglamentos y leyes de cultura cívica en las ciudades mencionadas en el presente informe, tales como el Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Guadalajara, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Tijuana, y Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Acapulco que sancionan el impedimento o estorbo a la vía pública, la privatización del espacio (que suele ser diferencial), así como orinar en la vía pública o el comercio en la vía pública, actividades vinculadas con la sobrevivencia de estas mujeres.

¹ La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define a la discriminación como: “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que [...] tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.” (2003: 1)

² Erving Goffman entiende que “los griegos[...] crearon el término estigma para referirse a signos corporales con los cuales se intentaba exhibir algo malo y poco habitual en el estatus moral de quien los presentaba.[Actualmente hace] referencia a un atributo profundamente desacreditador; pero lo que en realidad se necesita es un lenguaje de relaciones, no de atributos[.] construimos una teoría del estigma, una ideología para explicar su inferioridad y dar cuenta del peligro que representa esa persona, racionalizando a veces una animosidad que se basa en otras diferencias, como, por ejemplo, de clase social”. (2010: 13-17).

Tal criminalización incrementa la violencia hacia estas poblaciones y en específico recrudece la violencia en contra de la mujer, pues es no solamente son vulnerables a detenciones arbitrarias sino también a abusos sexuales o acoso y a no ser reconocidas como víctimas de delito.

De acuerdo con el documento *Informe Especial. Situación de los derechos humanos de las poblaciones callejeras en el Distrito Federal 2012-2013*:

La criminalización, condicionada por la existencia de estereotipos culturales y la asignación de etiquetas negativas a las actividades cotidianas y de supervivencia que realizan las poblaciones callejeras, fue referida en cinco de cada 10 testimonios recabados durante la celebración de la Audiencia Pública con Poblaciones Callejeras 2012-2013. (CDHDF, 2014: 13)

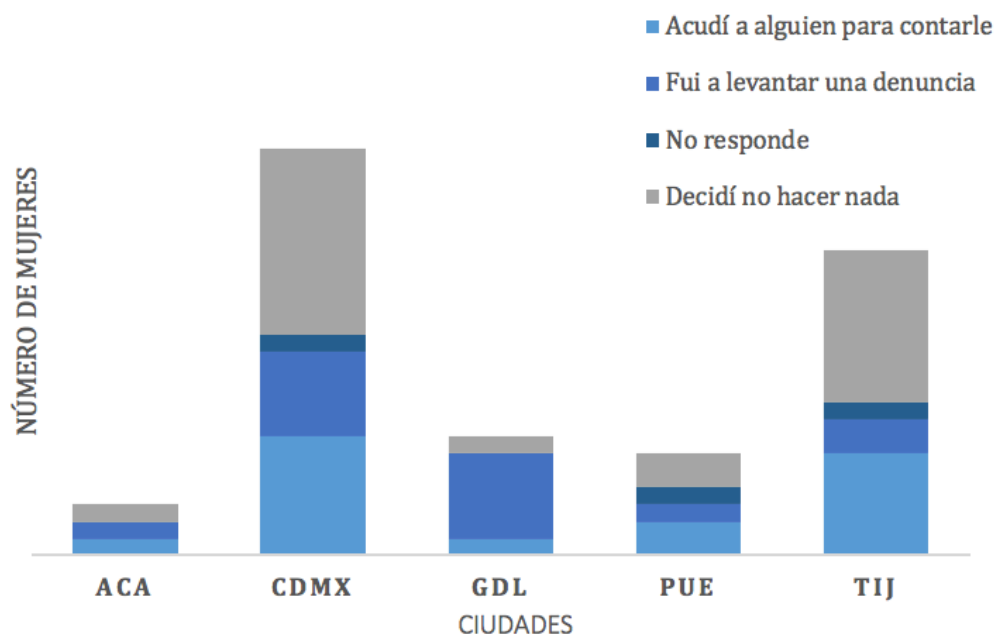
Aun cuando dicho informe fue presentado en 2014, las mujeres se mantuvieron en el presente diagnóstico refiriendo continuos actos de intimidación, desalojos y detenciones arbitrarias por parte de las autoridades.

Cabe subrayar, que todas las mujeres encuestadas han sufrido distintos tipos de violencia no solo las relacionadas con la discriminación por apariencia o ingreso económico, sino también por las actividades que realizan en la vía pública y aquellos bajo los estereotipos asignados al género.

Destaca en este punto el papel de los servidores públicos quienes continúan reproduciendo los estereotipos y actuando a discrecionalidad con estas poblaciones.

En la Figura 6.1 se muestran las acciones que las mujeres encuestadas tomaron ante los eventos de violencia sufridos en algún momento de su vida. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (2018), esto es sintomático de todo el territorio nacional, pues el 93.2% de los delitos no hubo denuncia, o bien, la autoridad no inició una averiguación previa. También de acuerdo con dicha encuesta los motivos por los cuales no se denuncia es mayoritariamente por considerarlo pérdida de tiempo y por desconfianza en la autoridad.

Figura 6.1 Acción ante evento de violencia



Fuente: Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol, 2019).

De las 16 mujeres encuestadas para el presente diagnóstico que procedieron con la denuncia, no a todas se les proporcionó información suficiente sobre el proceso ni sus derechos, como se puede observar en la Tabla 6.3, mientras que a algunas se les proporcionaron tanto los derechos como los requisitos para denunciar y se les ofrecieron servicios asistenciales, a algunas se les proporcionó alguno de estos rubros, y en 7 casos, es decir, al 43% de las mujeres denunciantes no se les proporcionó ninguna información oportuna ni servicios asistenciales.

Tabla 6.3 Información proporcionada al momento de denunciar y evaluación de la atención

Tus derechos	Requisitos para denunciar	Servicios asistenciales	Ninguno
6	6	7	7

Fuente: Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol, 2019).

Tabla 6.4 Evaluación del trato

Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
2	4	2	6	2

Muy bueno: Me orientaron. Me informaron. Me acompañaron durante el proceso

Bueno: Me informaron del procedimiento. Me dieron asesoría básica.

Regular: Me escucharon. No hicieron nada. No me brindaron opciones

Malo: Sentí que no me creyeron o me ignoraban

Muy malo: Te humillaron. Te discriminaron

Fuente: Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol, 2019).

De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

a) A partir del reconocimiento de la situación de exclusión social de las poblaciones callejeras y la realidad cultural que supone sobrevivir en la calle, asegurar la difusión diversificada y comprensible de información jurídica básica para el ejercicio de los derechos.

b) Allegar a las poblaciones callejeras información jurídica clara, precisa y accesible sobre los procesos que se siguen en su contra, así como de las acciones legales procedentes.

c) Erradicar la estigmatización de actividades de sobrevivencia callejera para garantizar la no criminalización y vulneración de la presunción de inocencia.

Aun con esto, el 60% de las mujeres denunciantes integrantes de las poblaciones callejeras calificaron la atención de las dependencias y servidores públicos de regular a muy malo (Tabla 6.4). De acuerdo Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, al realizar el Subcomité su segunda visita regular a México del 12 al 21 de diciembre de 2016 constató que diversas observaciones y recomendaciones formuladas en su primera visita en 2008 todavía se mantenían vigentes, por lo que indicó como necesario que el Estado mexicano se comprometiera a garantizar el cese de la tortura y los malos tratos en el territorio.

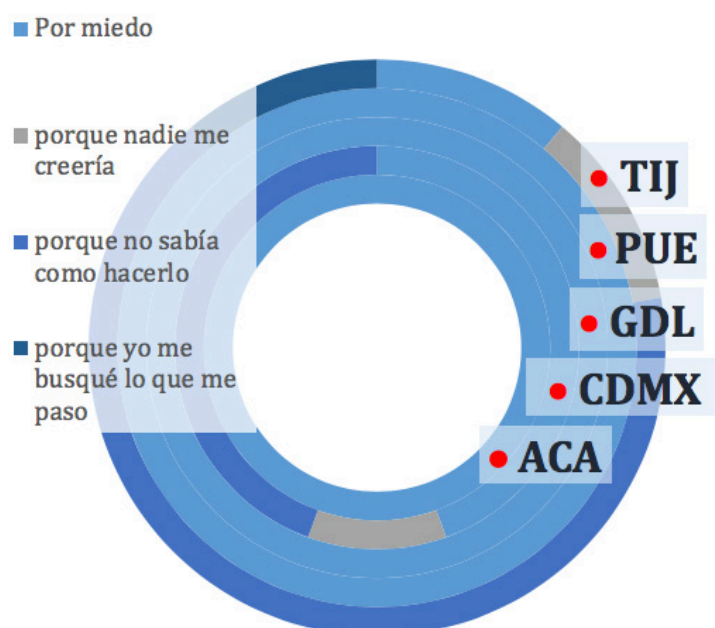
Inclusive, a nivel nacional esto se ve reflejado en la última Encuesta Nacional de Población Privada

de la Libertad (ENPOL, 2016) donde se mostró que de las 10 718 mujeres privadas de la libertad de 18 años y más, el 64% de ellas refirió que la autoridad o policía no se identificó y al 67% de las mujeres la autoridad no le mencionó el motivo de su detención, lo cual evidencia el clima de irregularidades en el debido proceso así como el excesivo uso de la fuerza a nivel nacional.

Otro de los elementos que se observan al momento de conocer las experiencias de las mujeres integrantes de la población callejera en sus interacciones con el sistema de justicia es que son discriminadas por su apariencia y al desconocer sus derechos aun cuando comienzan un proceso de denuncia ministerial no lo culminan.

Como se muestra en la Figura 6.2 quienes deciden no denunciar mayormente es por miedo, seguido de la ignorancia de los procedimientos. Este temor se puede asociar no solo al agresor directo sino también miedo de las autoridades debido a los históricos eventos de limpieza social, lo cual incide en una opinión desfavorable de los servidores públicos.

Figura 6.2 Motivos por los cuales no denuncia



Fuente: Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol, 2019).

Solicitudes de información

Al no contar, los sistemas de impartición de justicia, con información socioeconómica que incluya la categoría de población callejera en sus datos de ingreso ni como denunciante ni como imputada diseñar mecanismos que garanticen el acceso a la justicia se dificultan, es decir, la atención no se realizan con el supuesto de que necesitan una atención que considere sus características sino sobre la base de la discriminación por aspecto o actividades de subsistencia. En la Tabla 6.5 se muestra la información obtenida a través de las solicitudes de información elaboradas a las distintas dependencias vinculadas con la promoción y aplicación de justicia.

Se muestra la ausencia de información sobre mujeres integrantes de la población callejera en los rubros de: (a) Carpetas de investigación creadas donde ellas sean imputadas o en calidad de víctima. (b) Fallecimientos en la vía pública y (c) Tipo de acompañamiento proporcionado.

Tabla 6.5 Respuestas a solicitudes de información

Dependencia	Respuesta	Observación	Folio
FEVIMTRA/ FEMDH	441 denuncias por diversos delitos en agravio de mujeres, niñas y niños que constituyen una transgresión a una vida libre de violencia de las cuales se iniciaron 7 averiguaciones previas y 434 carpetas de investigación.	No se cuenta con el registro de mujeres en riesgo social, condición o situación de calle o indigencia. Tampoco cuántas carpetas de investigación tuvieron seguimiento	0001700190519

Fuente: Elaboración propia con base en solicitudes de información.

Cabe notar que, de acuerdo con el *Índice Global de Impunidad en México. La impunidad subnacional en México y sus dimensiones*: “México encabeza la lista de países del continente americano con el más alto índice de impunidad. [...] El índice de impunidad en México aumentó tanto en el ámbito global como en el de los estados de la República. México ocupa el cuarto lugar del Índice Global de Impunidad (IGI-2017) con 69.21 puntos”.

En este índice se incluye una suerte de camino de impunidad, que se muestra en la revictimización de los denunciantes y víctimas de delito, pero también de familiares, al ser señalados como principales responsables en primera instancia aun sin evidencias y además difundiéndose en medios de comunicación información personal.

Aunado a las problemáticas, las mujeres no ven garantizado su derecho de acceso a la justicia pues no hay información suficiente para poder elegir qué rutas tienen disponibles mediante la vía legal para poder resolver sus controversias.

Acciones y programas de atención

En este punto se presenta la información que la autoridad tiene que hacer pública por ley, la cual se halla en sus portales y archivos, y la cual fue indagada a través de medios electrónicos. A partir de la búsqueda en dichas fuentes tenemos la información correspondiente a la Alcaldía Cuauhtémoc, México; Municipio de Tijuana, Baja

California; Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; Municipio de Puebla de Zaragoza, Puebla y Municipio de Guadalajara, Jalisco.

A nivel nacional desde 2010 en 27 entidades de la república se inició la creación de los Centros de Justicia para las Mujeres (actualmente se contabilizan 31), como parte de las acciones encaminadas a cumplir con los tratados y convenios internacionales en materia de igualdad y perspectiva de género. Esta política pública es encabezada por la Secretaría de Gobernación que, a través de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim) establece su creación con los siguientes objetivos:

- Proporcionar orientación y atención a las mujeres, sus hijas y sus hijos para salvaguardar en todo momento su integridad como usuarias del CJM.
- Facilitar a las personas víctimas de violencia el acceso a la justicia, para combatir y contrarrestar la violencia que sufren las mujeres, que muchas veces ponen en riesgo su vida.
- Ofrecer un ambiente seguro, empático y confiable a las usuarias, sus hijas e hijos, en donde se respete sobre todo su dignidad.
- Contribuir a la reducción de las tasas de violencias de género, familiar, sexual y de homicidios dolosos contra mujeres (tipificados como feminicidios).

Fomentar el incremento de las denuncias y reducir la impunidad.

Favorecer una mayor confiabilidad en el sistema de justicia.

Evitar la revictimización de las personas usuarias.

Generar estudios, información y estadísticas sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias.

Consolidar un equipo multidisciplinario profesionalizado y destacado en el tema de género y violencia contra las mujeres el dicho centro. (Conavim, 2013: 28)

Sin embargo, estos objetivos no pueden llevarse a término debido a una serie de elementos que entorpecen el acceso a la justicia de las mujeres. De acuerdo con el *CEJUM. Informe sobre el estado de la política pública a nivel nacional*, entre dichos elementos encontramos:

[a. El no estar contemplados en la ley federal, en tanto] genera que adolezcan de certeza jurídica, fortaleza institucional y garantías de continuidad, pues la mayoría tampoco están contemplados en las leyes orgánicas de la administración pública estatal. Esta condición lleva a que su funcionamiento quede al arbitrio de secretarías o procuradurías locales e impacta en la capacidad de los Centros para coordinarse con otras dependencias a nivel estatal y municipal.

[b.] Operan con un **modelo punitivo y un enfoque unidimensional** del acceso a la justicia, centrándose solo en la persecución de delitos. [...] algunos documentos de creación contienen estereotipos de género, señalando a las mujeres como la base de la familia sólida y de la unidad familiar.

[c.] Para asegurar que todas las personas que laboran en los Centros de Justicia para las Mujeres trabajen coordinada y alineadamente con los objetivos del centro, es necesario que existan manuales y protocolos, los

cuales unifiquen los criterios en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres bajo la perspectiva de género y derechos humanos. (Equis, 2017: 5-42)

Por otro lado, el Objetivo 2 del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) 2013-2018 señala: “Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, y garantizarles acceso a una justicia efectiva”. Sin embargo, una de las líneas de acción específicas vinculada con este objetivo fue eliminada “2.5.7 Impulsar la creación de un sistema de Defensoría Pública, para seguimiento de tratados y convenciones internacionales de la mujer. Coordinación de la estrategia Eliminada”. Por considerarse la Defensoría Pública incompetente: “El cumplimiento de los acuerdos y convenciones internacionales lo hace el Estado mexicano, mediante diversos mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas que establecen los propios tratados y convenios. Por otro lado, esta actividad es competencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En suma, la línea de acción estaba mal, ya que era imposible que la Defensoría Pública hiciera lo que en ella se especificaba.” (Inmujeres, 2019: 24) Al no considerarse la Defensoría Pública obligada a dar seguimiento a tratados y convenciones internacionales con respecto a la mujer se estaría contraviniendo la Reforma Constitucional al Artículo I, y la obligatoriedad de todas las autoridades de garantizar el goce de los derechos humanos.

A continuación se mencionan las acciones y programas de cada ciudad en específico para comprender el panorama general del trabajo que se realiza desde las autoridades competentes en materia de acceso a la justicia.

Cuauhtémoc, Ciudad de México

Algunas de las acciones y programas que en esta ciudad observamos se muestran en la Tabla 6.6

Tabla 6.6 Servicios, acciones y programas. Ciudad de México

Servicio o Programa	Descripción y requisitos	Acceso	Observaciones
Atención a víctimas del delito de violencia familiar (PGJCDMX)	Personas en situación de víctimas de delito de violencia familiar específicamente niñas y niños menores de doce años de edad y a mujeres menores de 60 años de edad que viven violencia por parte de su pareja. Requisitos: -En el caso de que la persona sea canalizada por alguna autoridad, deberá presentar el oficio de canalización de dicha autoridad en original y dos copias. -Es deseable presentar identificación oficial vigente con fotografía y firma así como copia de la misma, aunque este requisito no es indispensable (credencial para votar del INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional, Credencial INAPAM o licencia para conducir). -En el caso de las personas menores de edad, es deseable que acuda acompañado de una persona adulta con identificación oficial (original y copia).	https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/atencion-a-victimas/	A nivel estatal
CJM (PGJCDMX)	Áreas que los conforman: Trabajo Social, Psicología, Médica, Empoderamiento, Lúdica, Jurídica, Medidas de Protección, Juzgado Cívico, Sala de Juicios Orales, Ministerio Público Requisitos: No se requieren Tiempo de Respuesta: Inmediato Población usuaria: Mujeres y sus menores hijas e hijos (hasta 12 años), Víctimas de Violencia de Género en cualquiera de sus modalidades y tipos.	https://pgj.cdmx.gob.mx/nuestros-servicios/en-linea/mp-virtual/centros-de-justicia-para-las-mujeres	En las Alcaldías de Azcapotzalco, Iztapalapa y Tlalpan
Patrocinio Jurídico en materia familiar	Servicio mediante el cual se brinda asistencia jurídica gratuita mediante asesorías y/o, en su caso, la designación de abogados especializados en derecho familiar, otorgando el servicio gratuito en los siguientes juicios: Divorcio Incausado, Alimentos, Guarda y Custodia, Jurisdicción Voluntaria, Adopción, Dependencia Económica, Concubinato, Interdicción, identidad de Persona, Pérdida de Patria Potestad, Desconocimiento de Paternidad, Nulidad de Matrimonio, Cambio de Régimen Matrimonial, Regulación de Visitas, Licencia para salir del País.	https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/ts/674/0	Requiere de identificación oficial, domicilio y los gastos de fotocopias corren a cargo del usuario

Fuente: Elaboración propia con base en información pública.

En la Ciudad de México, aun cuando desde 2014 la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) publicó el Acuerdo A/015/2014 en el cual se emite el Mecanismo de atención a personas que forman parte de las poblaciones callejeras, dicho mecanismo no ha garantizado que las personas que habitan las calles conozcan sus derechos y los ejerzan. Los testimonios arrojan eventos donde las mujeres son violentadas incluso por los mismos funcionarios

públicos. Otro ejemplo de ello fue el caso dado a conocer por los medios de comunicación el pasado 14 de julio, en el que una mujer integrante de las poblaciones callejeras fue violada en un hotel por dos policías que comenzaron ejerciendo abuso de poder con agravante al amenazarla mientras caminaba por la calle supuestamente inhalando solvente.

En cuanto Servicio Atención a víctimas del delito de violencia familiar nos encontramos de

nueva cuenta con el requisito de contar con una identificación oficial vigente, lo que imposibilita de antemano el goce de este servicio a buena parte de las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras, aun siendo considerado un trámite gratuito menciona que es necesario llevar una fotocopia de dicha identificación y del oficio en caso de ser remitida de otra institución.

Por otro lado, no se cuenta con programas específicos en la Alcaldía Cuauhtémoc que busquen garantizar el derecho al acceso a la justicia particularmente de las mujeres que son integrantes de la población callejera.

Acapulco, Guerrero

Esta ciudad no cuenta con Centro de Justicia para Mujeres pese a que está activada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el municipio y ese es uno de los criterios prioritarios para la creación y promoción de los CJM, sin embargo el estado sí cuenta con dos en las ciudades de Chilpancingo y Tlapa. Chilpancingo es la ciudad con mayor proximidad a Acapulco. Este centro fue creado por decreto del gobernador y depende directamente de la Fiscalía General del estado. En la Tabla 6.7 podemos observar cómo no se cuenta con información sobre los trámites y servicios, ni sobre los requisitos, tampoco hay divulgación sobre estos centros ni sobre los procedimientos, lo que dificultaría que las víctimas los conozcan y se aproximen para utilizar dichos espacios.

Tabla 6.7 Servicios, acciones y programas. Acapulco

Servicio o Programa	Descripción	Acceso	Observaciones
Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad	La Dirección General de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad cuenta con personal especializado y colabora con otras instancias, para brindarte la atención médica, legal y psicológica que requieres, de manera oportuna.	http://fiscalia.guerrero.gob.mx/atencion-integral-a-victimas-del-delito/	Nivel estatal. No cuenta con información acerca de los trámites o de sus procedimientos
Módulos de atención PAIMEF	Se brinda atención psicológica, de trabajo social y jurídico las mujeres se les hacen del conocimiento de sus derechos humanos y de acuerdo a la problemática planteada se hace saber las acciones jurídicas a su favor. De igual forma se otorga el servicio de representación jurídica en juicios del orden familiar, civil, mercantil, agrario, acompañamiento a mujeres víctimas de delito. <i>Unidad itinerante</i>	http://guerrero.gob.mx/tramites/modulos-de-atencion-paimef-2018/	Aun cuando el trámite es gratuito se requieren documentos oficiales (actas de matrimonio, actas de nacimiento de los hijos, constancias de estudios de los hijos, etc.) para cualquier trámite
Ministerio Público de Violencia Familiar y Delitos Sexuales	Acción jurídica: Delito de lesiones, físicas, psico-emocionales, violación o violencia sexual, incumplimiento de las obligaciones alimentarias, y cualquier delito.	https://acapulco.gob.mx/inmujer/acciones-juridicas/	Sin información

Fuente: Elaboración propia con base en información pública.

Tijuana, Baja California

El CJM de esta ciudad estaba en construcción, aun en el mes de abril del presente año no había sido terminado, de nueva cuenta aun cuando la ciudad tiene activada la AVGM. De igual manera se observa en la Tabla 6.8 ausencia de información sobre los requisitos y sus procedimientos, así como poca divulgación pública de los espacios. El desconocimiento de estos servicios hace depender de otras instancias el hecho de ser remitidas a espacios de atención a víctimas, pero como hemos observado antes, es recurrente la discriminación y la poca sensibilización en lo tocante a las problemáticas diferenciales experimentadas por género, de tal modo que las autoridades pueden no remitir a estos espacios pues están sujetos a su criterio.

Tabla 6.8 Servicios, acciones y programas. Tijuana

Servicio o Programa	Descripción	Acceso	Observaciones
Atención a víctimas de delito	Esta Dirección cuenta con un grupo de profesionales debidamente capacitados, que brindan los servicios para la atención de las víctimas de un delito y a sus familiares, si así lo necesitan. Dicho apoyo es proporcionado a través de las siguientes áreas: Jurídica, Trabajo Social, Psicológica Además, cuenta con el respaldo de toda la institución, lo que permite coordinar, supervisar y evaluar el servicio que se brinda consistente en: Apoyo para la presentación de la denuncia, Seguimiento de la averiguación previa, Asesoría Jurídica, Intervención en crisis, Terapias grupales e individuales	https://www.pgjebc.gob.mx/home-2/atencion-a-victimas-del-delito/	No cuenta con información acerca de los trámites o de sus procedimientos
Unidad de Orientación y atención temprana / Unidad de Medios Alternativos	Instancia especializada de la PGJE cuya finalidad es generar soluciones en los conflictos de materia penal, en aquellos casos en que la ley lo permita; voluntaria y proactivamente las partes participan en la solución de su conflicto. Estos métodos consisten en la mediación, la conciliación y la restauración.	https://www.pgjebc.gob.mx/sejap/	No cuenta con información acerca de los trámites o de sus procedimientos
Atención al migrante	Se canaliza un albergue; Se brinda asesoría jurídica; Servicios médicos; Atención psicológica; Bolsa de trabajo; Apoyos para retornar a su lugar de origen; Despensa con víveres para el camino a su lugar de origen Credenciales para migrantes requisitos: Carta de deportación expedida por el Instituto Nacional de Migración (INAMI); Canalización de Casa de Migrante, Ejercito de la Salvación, u otras organizaciones de Atención a Migrantes.	http://www.tijuana.gob.mx/dependencias/MIGRANTE/index.aspx	Se tiene que acudir personalmente a la Dirección de Atención al migrante para conocer otros requisitos. Señala que el trámite es gratuito.

Fuente: Elaboración propia con base en información pública.

Puebla, Puebla

La ausencia de información sobre los programas, acciones o servicios que este municipio presenta en materia de acceso a la justicia puede ser un indicador de la necesidad de trabajar conjuntamente gobierno y sociedad civil para poder garantizar este derecho a su ciudadanía, en especial a las mujeres integrantes de la población callejera al ser una población vulnerable y discriminada. Entre los servicios ofrecidos en la localidad encontramos el señalado en la Tabla 6.9:

Tabla 6.9 Servicios, acciones y programas. Puebla

Servicio o Programa	Descripción	Acceso	Observaciones
CJM	Áreas: Área Administrativa; Área Jurídica; Área de Trabajo Social y Empoderamiento; Área de Asistencia Psicológica; Área de Salud; Área de Ludoteca; Área de Estancia Temporal para la permanencia máxima de 72 horas, y Área de Cocina.	http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglamentos/dependencias/item/reglamento-interno-de-los-centros-de-justicia-para-las-mujeres	No cuenta con información acerca sus procedimientos o requisitos
Asesoría Jurídica DIF	Servicios de apoyo y asesoría jurídica a personas en estado de vulnerabilidad.	http://dif.puebla.gob.mx/servicios/item/323-asesoria-juridica	Identificación oficial es necesaria
Asesoría Jurídica Fiscalía	El servicio de Asesoría Jurídica se proporciona a las víctimas del delito y a la población que lo solicite, con el fin de orientar en las diversas gestiones o procedimientos jurídicos que requieran.	http://fiscalia.puebla.gob.mx/index.php/tramites-y-servicios/servicios/asesoria-juridica	Identificación oficial y oficio de canalización son necesarios

Fuente: Elaboración propia con base en información pública.

Guadalajara, Jalisco

Jalisco cuenta con CEJUM en Vallarta y Guadalajara (Tabla 6.10), sin embargo no parece haber suficiente divulgación al respecto, aun cuando cuentan con infografías y “memorias gráficas” de los trámites que ofertan. Ciertamente, no cuentan con página de internet propia, pero sí cuentan con teléfonos de contacto. Sin embargo las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras tendrían un difícil acceso a esta información y en cambio su primer acercamiento con el sistema de justicia son los policías quienes se ha mostrado anteriormente pueden revictimizarlas haciéndolas sentir culpables de los eventos de violencia sufridos por vivir en la calle.

Tabla 6.10 Servicios, acciones y programas. Guadalajara

Servicio o Programa	Descripción	Acceso	Observaciones
CJM	Objetivo: Proporcionar atención integral a las víctimas de delitos relacionados con la violencia de género, mediante la procuración e impartición de justicia pronta y expedita, así como procesos de autovaloración y empoderamiento para la toma de decisiones que garanticen su bienestar y el de sus familias.	https://fge.jalisco.gob.mx/content/centro-de-justicia-para-las-mujeres-0	Se cuenta con información acerca de los trámites pero no de los requisitos
Protección y apoyo legal	Atender y reintegrar socialmente a los generadores y receptores de violencia intrafamiliar, mediante acciones preventivas, atención y seguimiento de las denuncias y la promoción de herramientas educativo formativas que promuevan una cultura de paz. Brinda asesoría jurídica a personas de escasos recursos económicos en todas las ramas del derecho, principalmente en las materias civil y familiar tramitando o dando seguimiento a casos familiares dentro del ámbito de la justicia social. Atiende y tramita solicitudes de expedición gratuita de actas del registro civil de cualquiera de los estados de la república mexicana para personas de escasos recursos que sean originarios de nuestra entidad y que pidan el apoyo por conducto de los sistemas para el desarrollo integral de la familia estatal y municipales.	https://difgdl.gob.mx/apoyo-legal.php	Requiere de identificación oficial y para Para atención preliminar: marcar o acudir a cualquier Centro de Desarrollo Comunitario, Centros de Convivencia, Casa Hogar o CEPAVI.
CADIPISI Centro de Atención y Desarrollo Integral para Personas en Situación de Indigencia	Brindar servicios, apoyos y atención especializada a personas que ejercen actividades de subsistencia en calles, así como devolver la dignidad humana, restituir los derechos, recuperar la visibilidad social y la reinserción laboral a través de acciones integrales de sociedad y gobierno. Se implementaron de manera permanente las brigadas nocturnas que recorren las calles de la ciudad para invitar a pasar la noche en los albergues disponibles.	https://difgdl.gob.mx/indigencia.php	

Fuente: Elaboración propia con base en información pública.

Los programas y acciones se encaminan principalmente al combate a la inseguridad e infraestructura, lo que torna las políticas punitivas antes que preventivas y fomenta un clima de estigmatización y discriminación de ciertos sectores de la sociedad.

Finalmente, con base en el análisis e interpretación tanto de las respuestas a la Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol, 2019), la información obtenida a través de portales y archivos de las distintas dependencias gubernamentales así como de las respuestas a solicitudes de información, se ha presentado este diagnóstico sobre el ejercicio y garantía del derecho de acceso a la justicia de las mujeres integrantes de la población callejera. Después de dicho balance se presentan las siguientes recomendaciones que intentan alcanzar los objetivos tanto de las legislaciones locales como de convenios y tratados internacionales.

Derecho a la vida

Belem, una mujer de 23 años que murió sola debajo de un puente sin que ningún programa de asistencia le apoyara para contar con un proyecto de vida, ni de emergencia que salvara su vida frente a una crisis de salud; una fuerte depresión la aquejaba desde un año atrás, ya que la separación de ella y su hijo al momento de nacer provocó que perdiera el interés y las ganas de vivir y dejar la calle.

Comenzó a vivir en el espacio público a los 16 años, antes de ello estuvo en una institución de asistencia privada ocho años continuos, y nunca quiso hablar de su pasado familiar; Belem obtuvo su acta de nacimiento a los 10 años, esta es extemporánea pues no se contaba con información que ayudara a buscar sus documentos reales.

Al llegar a la calle se encontró con un mundo de desprotección, pues los servicios que proveían las instituciones de gobierno se limitaban a baño y comida solo algunos días a la semana, ella asistía a instituciones privadas para lograr conseguir servicios como acceso a la salud, asesoría legal y acompañamiento para atender su consumo de solventes el cual ya había comenzado a hacer estragos en su cuerpo: pérdida de tono muscular, deshidratación, hipocalemia y desnutrición son sólo algunas de ellas; a pesar que en varias ocasiones le sugirieron internarse en una clínica para rehabilitarse, ella no aceptó. A los 21 años tiene un embarazo que no esperaba, ella nunca obtuvo por parte de las instituciones de salud información sobre anticonceptivos o Infecciones de transmisión sexual. Al nacer su bebé, el hospital no se lo entrega bajo el argumento de que vive en la calle, esto la sume en una depresión profunda, la cual se manifestó en pérdida de apetito, sueño y ganas de perder la vida. Por medio del apoyo de

una asociación civil logra un año más tarde ver por primera vez a su hijo; cuando lo visitaba siempre recibía maltrato y discriminación por parte de personal del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia de la Ciudad de México (DIF-CDMX); su apariencia física, su delgadez, su evidente vida en la calle generaban que las trabajadoras sociales y psicólogas la maltrataran y la hicieran sentir menos frente a su hijo. La depresión volvió a aparecer.

Una semana antes del cumpleaños de su hijo desapareció, se levantó la denuncia en el Centro de Atención a Personas Extraviadas o Ausentes (CAPEA) sin que brindaran información. Seis meses después su pareja acudió a buscarla al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INCIFO) y posterior a una entrevista le notificaron que Belem se encontraba en una fosa común; estaba en calidad de desconocida y al no contar con el reconocimiento de un familiar fue sepultada en dicho lugar.

Belem pasó sus 23 años sin la protección del Estado Mexicano, no hubo institución que garantizara su derecho a la vida; la soledad y el abandono que genera la exclusión social fue la constante en toda su existencia.



Marco normativo

El derecho a la vida es considerado el derecho fundamental ya que es generador de cualquier otro derecho posible. Está plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su artículo 3º sanciona: “Todo individuo tiene derecho a la vida digna, a la libertad y a la seguridad de su persona”, de tal manera que su observancia no solo protege de la muerte sino también de la violencia, discriminación, tortura y maltrato. Esto se halla consagrado en documentos internacionales y nacionales de diversos países del mundo así como del nuestro. A continuación se enlista la normatividad vigente en lo tocante a este derecho así como las obligaciones y elementos normativos vinculantes.

- Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (artículo 43.1)
- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 5, inciso e, fracción iii)
- Programa Hábitat (párr. 61)
- Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social (segundo compromiso, inciso b)
- Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (artículo 8o)

Internacional

- DUDH (art. 3º, 16 y 25)
- Convención de Belém do Pará (art. 4º)
- CADH (art. 1º, 5º, 6º, 7º, 17.1 y 24)
- CEDAW (art. 12 y 14)
- PIDCP (art. 2, 3, 7, 9 y 23)
- Comité DESC, Observación General núm. 19. La familia, artículo 23 (párrs. 3 y 5); Observación General núm. 20 (párrs. 8, inciso b; 12 y 17); Observación General núm. 4. El derecho a una vivienda adecuada artículo 11.1 (párrs. 6, 7, 8, 11, 12 y 13)
- CSDN (art. 1, fracc. i, inciso b; 2, 27 y 37)
- CIDJ (artículos 5º y 16)
- PIDESC (artículo 11)
- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (art. 28.1; 19, inciso a)

Tabla 7.1 Obligaciones y normatividad sobre el derecho a la vida

Derecho humano	Obligaciones reforzadas en el marco del principio de igualdad y no discriminación	Elementos normativos/obligaciones
A que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia	a) Asegurar que la vida en la calle no sea un argumento o condición suficiente para la desintegración de familias.	
A la libertad y seguridad personales	a) Eliminar aquellas normas que por su contenido discriminatorio condicionen o vulneren la libertad o seguridad de las poblaciones callejeras. b) No afectar la libertad y seguridad personal de las poblaciones callejeras por acciones discriminatorias o por los efectos discriminatorios que éstas provoquen. c) Adoptar las medidas necesarias para prevenir y erradicar los desalojos forzados fundados en la condición de las personas que viven en la calle. d) Abstenerse o impedir el internamiento forzoso de las poblaciones callejeras en instituciones privadas o públicas.	Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual
A la integridad personal	a) Adoptar las medidas necesarias para que la integridad física, mental y emocional no se vea trastocada por motivos de discriminación en contra de las personas que viven y sobreviven en la calle. b) Prevenir e investigar de manera exhaustiva las afectaciones causadas por autoridades en la integridad física, psíquica y moral de las poblaciones callejeras suscitadas en los operativos. c) Garantizar la incorporación de la discriminación como agravante en las sanciones y reparaciones que se establezcan como resultado de agresiones a la integridad personal de las poblaciones callejeras. d) Emprender campañas de sensibilización para eliminar la criminalización de las poblaciones callejeras y reducir el riesgo de que sean agredidas en su integridad personal por razones de discriminación sistémica o múltiple.	Impulsar y apoyar la creación, operación o fortalecimiento de los refugios para las víctimas
A un nivel de vida adecuado	a) Proporcionar alternativas a la vida en calle que constituyan opciones dignas y respeten su honra y libertad, reconociendo como fundamento de éstas la autonomía de las personas. b) Auxiliar a las poblaciones callejeras a tener acceso a un espacio que satisfaga las necesidades de una vida digna, sin someterlas a condicionamientos asociados con reglas de conducta impuestas por agentes externos.	Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres y mejorar su calidad de vida
A la vivienda	a) Facilitar el acceso de poblaciones callejeras a viviendas de interés social. b) Generar estrategias que permitan a las personas que forman parte de las poblaciones callejeras cuya estancia en la calle es intermitente acceder a condiciones para permanecer en las viviendas en las que pasan parte del tiempo. c) Realizar acciones de prevención con el fin de que las personas que únicamente laboran en la calle cuenten con alternativas en donde la última opción para pernoctar sea ésta.	Proporcionar alternativas a la vida en calle
Fuente: Elaboración propia a partir de los instrumentos listados.		

De acuerdo con Sergio Salvador Aguirre Anguiano, el derecho a la vida no se establece de manera explícita en nuestra Constitución empero sí de manera implícita, su argumento parte de una revisión de los artículos 1º, 14 y 22 de la Carta Magna y asegura: “así como de todas las demás normas que establecen los derechos fundamentales del ser humano, en tanto que todos ellos son interdependientes y se complementan entre sí como partes de un todo que asegura su goce pleno, y dado que el derecho a la vida hace posible la existencia y el disfrute de los demás derechos fundamentales” (citado en Montoya, 2009: 249). Lo anterior explica la obligatoriedad para el Estado mexicano de garantizar este derecho. Abajo se muestra el marco normativo que rige el territorio mexicano así como los municipios investigados para el presente informe.

Tabla 7.2 Marco normativo nacional sobre derecho a la vida

CPEUM, artículos 1, 3, 4 6, 14, 16, 27, 29, 41, 123; Ley de Asistencia Social, artículo 5; Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (artículo 49); Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (artículo 9º, fracción xxi); Ley General de Desarrollo Social (artículos 6º y 8º); Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (artículo 5º, fracción vi, inciso b); Ley de Vivienda (artículos 1º; 3º y 6º, fracción i)				
Cuauhtémoc, Ciudad de México	Acapulco, Guerrero	Tijuana, Baja California	Guadalajara, Jalisco	Puebla, Puebla
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal (artículos 6º, fracción xxii; 13, fracción xiii; y 23, fracción xiii). Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal (artículo 1º, fracciones ii y viii); Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal (artículo 50). Ley de Vivienda del Distrito Federal (artículo 3º).	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, art. 5 y 6; Código Penal: art. 10, 135, 137,150, 198; Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero, art. 3, 6, 1025, 38, 45 Código Civil art. 27; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres art. 45; Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación art. 11.	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, art. 7, 8, 104; Código Penal art. 129, 16, 242 ; Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia art. 3, 17; Ley de Asistencia Social para el Estado de Baja California art.3, 4 18; Código Civil Artículo 163; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres art.; Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación art. 7, 9; Ley de Población del Estado de Baja California, artículos 13, 21, 39; Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar para el Estado de Baja California, art. 24; Ley para Fomentar la Donación Altruista en Materia Alimentaria en el Estado de Baja California, art. 1, 2, 10, 11; Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California, art. 7.	Constitución Política del Estado de Jalisco art.4; Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia en el Estado de Jalisco artículos 5, 9, 39; Ley Estatal para la igualdad entre hombres y mujeres art. 2; Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres art.7; Protocolo de Actuación del Delito de Violación Contra Mujeres por Razones de Género para el Estado de Jalisco; Protocolo de Atención en Casos de Desaparición de persona para el Estado de Jalisco; Protocolo de Investigación del Delito de Femicidio con Perspectiva de Género para el Estado de Jalisco; Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco art.7.	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla art. 12, 26, 121, 123, 131; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla art.1, 2, 36; Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla art.6; Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado art.4, 5, 9; Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla art.4, 9, 10, 11, 15.

Testimonios recopilados en encuestas

Cuando se habla del derecho a la vida, se incluyen también en su caracterización aquellas acciones de negligencia de los servidores públicos que por acción u omisión impiden el goce de los derechos de las mujeres que habitan las calles, contando con los elementos materiales y de infraestructura pero no empleándolos por discriminación. Con base en la encuesta realizada: 11 mujeres mencionaron que les fue negada la atención médica por no contar con documentos de identidad; 10 refirieron que les fue negada por su apariencia; 4, por no contar con derechohabiencia y 4 por no tener dinero para pagar la consulta. El servicio fue negado por los médicos, enfermeros o trabajadores sociales, aun cuando las mujeres que habitan las calles reconocen lo incorrecto en el proceder de los servidores públicos, desconocen a qué instancias acudir para denunciar este proceder, observan que esto se repite con sus compañeros y disminuyen paulatinamente sus visitas a entidades sanitarias.

A partir de esto, buena parte de las personas que integran las poblaciones callejeras han establecido un vínculo entre calle y muerte. Este vínculo se refuerza a través de la precariedad naturalizada, y de la experiencia directa pues han sido testigos de múltiples decesos y han asumido que vivir en la calle implica morir en ella. De acuerdo con los resultados de la Campaña “Chiras Pelas, Calacas Flacas” de El Caracol A. C., se ha encontrado que la mayoría de las muertes tienen como causa inmediata: deshidratación, insolación, cirrosis, congestión alcohólica, hipotermia, hipocalemia, caídas, homicidios, tránsito o calcinación. Informan también que de 2014 de 2017 ocurrieron 500 fallecimientos en la vía pública de personas que habitan las calles, en la mayoría de estos casos se desconoce el paradero de sus restos así como la causa oficial del deceso.

La Ley General de Salud señala que sólo familiares consanguíneos hasta segunda línea, con los mismos apellidos, o bien, el cónyuge de la persona fallecida son los actores facultados para reclamar el cuerpo. Una de las características de vida en la calle es la de tejer nuevas redes de soporte por las que no pasa un vínculo sanguíneo pero sí otros vínculos

entendido como fraternos. Ante la ausencia de la familia o el claro abandono y rechazo de la misma, la organización colectiva construida en calle cubre las necesidades afectivas, económicas y sociales. En el caso específico de la autorización para reclamar el cuerpo de la fallecida se requiere que el Estado mexicano reflexione e imagine estrategias que posibiliten que otras formas de parentesco o vínculo social sean reconocidas.

El Caracol A.C. ha impulsado esta cuestión ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para que también se permita a los amigos y parejas sentimentales reclamar los cuerpos, empero aun no hay un avance legislativo en la materia.

Mario Fuentes abona en la comprensión de estas muertes estableciendo que “hay muertes que no debieron ocurrir y cuando ocurrieron, que pudieron haberse evitado, de haber existido condiciones de cumplimiento universal de los derechos humanos” (2018, 11). Su propuesta radica en concebir que la salud de las personas se halla estrechamente relacionada con la pobreza, la desigualdad, la discriminación y la marginación en la que nacen y se desarrollan los sujetos.

Las causas de muerte de las personas que habitan las calles son enteramente prevenibles, tienen que ver con altos grados de pobreza, pero también tienen que ver con la discriminación que se manifiesta en su grado más extremo a través de la violencia homicida que recae sobre los cuerpos que se encuentran en las calles. Las féminas entonces no solo se enfrentan a la pobreza, la discriminación, la desigualdad y la marginación por pertenecer a las poblaciones callejeras sino que también se enfrentan a la vulneración por género.

A nivel nacional, aun cuando la expectativa de vida es mayor en mujeres que en hombres (78 años para las primeras mientras que para los segundos es de 73 años), la mejora en dicha expectativa ha ido en aumento en los hombres. (Inmujeres, 2018: 8), es decir, aun cuando se había logrado una relativamente alta expectativa de vida debido a las múltiples violencias ejercidas en contra de las mujeres, la precarización laboral, el trabajo impago y las deficientes condiciones de

vida han ido mermando la salud, la libertad y el despliegue de capacidades de múltiples mujeres. En el caso de las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras este panorama se torna aun más desalentador, pues su expectativa de vida es alarmantemente baja, cayendo hasta los 28 años (El Caracol: 2017). Es decir, cuando el grueso de la población femenina se encuentra desarrollando sus capacidades productivas y reproductivas, las mujeres que habitan las calles fallecen.

De acuerdo con las mujeres entrevistadas, el promedio de edad arrojó 36 años. Donde el promedio por ciudad fue: 32 años en la Ciudad de México, 32 años en Acapulco, 40 años en Tijuana, 47 en Guadalajara y 33 en Puebla. La entrevistada más joven contaba con 17 años mientras que la mayor refirió tener 66 años. Lo cual indica la necesidad de comenzar a elaborar diagnósticos e intervenciones específicas donde se reflexione sobre las mujeres adultas mayores que habitan las calles, pues suelen tener una carrera moral distinta que la de aquellas más jóvenes. Algunas son expulsadas de sus domicilios por rencillas familiares, violencia económica, abandono, o bien, por disputas legales por inmuebles. No cuentan con las mismas redes de apoyo que otras mujeres han ido gestionando, ni con experiencia sobre vida en la calle, así mismo desconocen sus derechos y los agresores las saben aisladas y vulnerables. Estos contextos de desigualdad debido al género y que se interrelaciona con la pobreza impiden el goce de su inalienable derecho a la vida.

En la Ciudad de México, de acuerdo con la solicitud de información al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con folio: 6000000156119, la Dirección de Estadística de la Presidencia, en el registro de cadáveres de mujeres ingresados al Instituto de Ciencias Forenses en 2018: de un total de 64 registros del sexo femenino, 10 de estos pertenecen a mujeres integrantes de la población callejera, es decir el 15.6% de los ingresos. Cabe señalar que de esta población, el 90% son ingresadas en “Muerte natural” como tipo de muerte (en tanto el tipo de diagnóstico corresponde a “Patologías no traumáticas”), mientras que solo se señala un registro como “Accidentes en la vía pública” que se corresponde

con el tipo de diagnóstico: “Quemaduras”. Las edades registradas de estos cadáveres oscilan entre los 30 y los 70 años. Ingresan en calidad de desconocidas. El 60% fallece en la vía pública mientras que el 40% en hospitales.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y agosto de 2019 entre los delitos cuyas víctimas fueron mujeres destacan: 0.87% feminicidio, 2.44% homicidio doloso, 2.78% homicidio culposo, 2.91% otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, 8.25% otros delitos que atentan contra la libertad personal, 15.50% de lesiones culposas y 60.15% lesiones dolosas. (SNSP, 2019)

Extraemos algunas conclusiones de esta información

1. Posiblemente sean muertes prevenibles por el rango de edad, considerando el promedio de expectativa de vida en el país. Mientras que en la población callejera las cifras son menos alentadoras, en este recuento del Instituto de Ciencias Forenses, el promedio de vida fue de 50 años.
2. Al ingresar en calidad de “Desconocidas” se implica que no tienen derecho a la identidad, su familia y allegados pueden no saber qué sucedió con ella y si no cuentan con algún parentesco oficial no pueden siquiera reclamar el cuerpo.
3. Si el 60% muere en la vía pública tendríamos que revisar los protocolos de atención a la salud de este sector vulnerable de la población que no accede a atención de emergencia. Las ambulancias y los hospitales han llegado a negar sus servicios, o bien a demorarlos hasta extremos injustificables.
4. Se deben analizar con nuevas metodologías las causas de muerte de las mujeres pues dará cuenta de cómo prevenir dichos decesos y se obtendrá información valiosa sobre sus condiciones de vida.

En el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ante la solicitud de información con número de oficio: IJCF/UT/673/2019, sobre la apertura de expedientes asociados a muertes de mujeres en calidad de desconocidas durante 2018, se informa que 131 cadáveres del sexo femenino son ingresadas en calidad de “N.N (no nombre)”, es decir, se desconoce su identidad, sin embargo, al no generar estadísticas respecto al estado socioeconómico de los fallecidos, se ignora si alguno de los cadáveres registrados en el Servicio Médico Forense pertenece a mujeres que integraban la población callejera de dicha entidad.

En la ciudad de Tijuana la respuesta proporcionada mediante las solicitudes de información con folio 00719019, desglosa que 253 mujeres fallecieron en la vía pública en 2018 mientras que 82 de ellas fue en calidad de desconocidas, sin embargo, el Servicio Médico Forense de la entidad no genera estadísticas respecto al estado socioeconómico de los fallecidos, por lo que no informa si alguna de ellas pertenecía a las poblaciones callejeras.

El respeto al derecho a la vida de las mujeres que habitan las calles debe considerar integralmente los derechos económicos, culturales y ambientales pues ellos se relacionan con diferentes ámbitos de su existencia, es decir, comprender las afectaciones que tiene el sistema económico, social y cultural sobre el derecho al trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura; los cuales deben de ser garantizados para las mujeres que habitan las calles y que les permitirán una vida digna, libertad y seguridad, entendiéndolas también como transmisoras de dignidad, libertad y seguridad a sus descendientes y a los integrantes de su comunidad.

Se deben considerar así mismo las dimensiones de la violencia política, la obstétrica, la mediática y la feminicida. De acuerdo con el *Informe especial. Situación de los derechos humanos de las poblaciones callejeras*:

En el caso de mujeres y niñas, además de las agresiones verbales y físicas, se encuentran vulnerables frente a casos de hostigamiento y abuso sexual. Aunado a lo anterior, las poblaciones callejeras constantemente son víctimas de despojos y decomisos de sus objetos personales: medicamentos, documentos de identificación, cobijas, dinero, colchones, lonas, tiendas y demás pertenencias. Esta situación reduce las oportunidades de desarrollo de las propias poblaciones y las mantiene en condiciones críticas de sobrevivencia, pues se les quitan constantemente los recursos o ingresos que hubiesen podido conseguir para cubrir sus necesidades más elementales (CDHDF, 2014: 113-114)

Al garantizar este cúmulo de derechos se logrará garantizar el derecho fundamental a la vida, y se reconfigurará el fracturado tejido social, dando cobijo a la diferencia, reconociendo la otredad y respetando otras formas de ser y estar en el mundo.

Acciones y programas de atención

Las acciones y programas de atención se encuentran ya señalados en los apartados anteriores en tanto al derecho a la vida se le puede dar observancia a través de garantizar los otros derechos tales como: identidad legal, acceso a la justicia, educación, salud, trabajo y vida libre de violencia.

En el entendido que tanto las leyes como las políticas públicas no favorecen el acceso de las mujeres a la tierra, la propiedad y la vivienda, en condiciones de igualdad. Pues la discriminación tanto económica como social afecta a las opciones vitales reduciéndolas, de tal modo que las empobrece cada vez más, tornándolas vulnerables ante la trata de personas, el acoso, hostigamiento y distintas formas de violencia material y simbólica. Al negárseles asimismo los derechos a la salud sexual y reproductiva.

Se precisa de una indagación holística de las estructuras sociales que condicionan las dimensiones económicas, sociales, familiares y comunitarias para garantizar los derechos humanos de las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras. Es absolutamente necesario desarticular los estereotipos de género para que las mujeres sean reconocidas como agentes capaces de decisión con necesidades específicas y contextos particulares. Aun en la Ciudad de México, donde

se cuenta con una amplia oferta de servicios, acciones y programas encaminados a atender a grupos vulnerables, en escasas dependencias se consideran las características de extrema vulnerabilidad que presentan las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras lo cual impide el goce de tales ofertas. Incluso, como se ha señalado anteriormente, es reiterativa la obligatoriedad de presentar identificación oficial y fotocopias, lo cual no considera la problemática específica que estas mujeres enfrentan respecto de su identidad legal, además no considera la problemática económica que conlleva el requisito de documentos fotocopados así como el desconocimiento de las instancias a las cuales recurrir.

Por otro lado, ante el objetivo de mejora de los espacios públicos a través de distintos programas se ha desalojado a las mujeres y hombres que habitan las calles de las distintas ciudades del presente diagnóstico lo que obstaculiza su acceso a una vivienda, aun cuando son casas provisionales, hechas de lonas, plásticos, cartones y enseres domésticos básicos son un esfuerzo de las poblaciones callejeras de autogenerarse una vivienda que les permite cierto grado de seguridad. Retirar estas pequeñas y efímeras edificaciones

sin un programa o proyecto de reubicación solo empeora la ya de por sí marginada situación que enfrentan diariamente y los deja en una total indefensión y destrucción de sus posesiones empleadas para la supervivencia y el trabajo, posesiones que pueden incluir documentos oficiales que son desechados sin consulta previa. El 57% de las mujeres encuestadas vive en la calle, mientras que el 21% puede rentar algunas noches un cuarto para pernoctar que les garantiza acceso al agua pero esto implica un gasto mayor y nulas posibilidades de ahorro y planeación a mediano y largo plazo. En los albergues encuentran pocas condiciones sanitarias favorables y en cambio hallan de nueva cuenta discriminación, violencia y prácticas clientelares, lo cual inhibe de su uso.

Por lo cual se hace imperativo establecer programas de vivienda, consensuada e incluyente donde las poblaciones que habitan las calles, específicamente las mujeres, puedan decidir y gestionar su acceso a la vivienda considerando que esto no impacta exclusivamente a nivel individual sino que al hallarse en una red de relaciones implica la mejora en la calidad de vida de sus hijos y su comunidad, en tanto reproductoras de la sociedad.

Conclusiones: propuestas y recomendaciones

Entre los derechos humanos se ubica una cadena relacional: diversos programas sociales establecen como requisito para su acceso un documento de identidad, en el caso de la identificación emitida por el Instituto Nacional Electoral se solicita además un domicilio, de tal modo se condiciona de manera concatenada la atención a la salud, el acceso a la justicia o el derecho a la educación, siendo evidente que al no ser respetado un derecho se vulneran todos los demás: al no contar con documento de identidad las mujeres que habitan las calles desaparecen de la mirada gubernamental.

De acuerdo con Moreno, Soriano y Martínez la “violencia física, verbal, psicológica o sexual son constantes en la sociedad, pero encuentran una lógica específica al tratarse de las poblaciones callejeras, en donde las mujeres se encuentran más vulnerables porque tienen una representación social estigmatizante de minoridad, lo cual limita el ejercicio de sus derechos.” (2017)

Al experimentar una realidad distinta que la de mujeres que no habitan las calles, e incluso diferente de aquella que viven los hombres integrantes de las poblaciones callejeras observamos que su condición de mujer y sus prácticas cotidianas son motivo de discriminación y violaciones a sus derechos, de tal modo que no son visibilizadas ni desde análisis demográficos, legislación o políticas públicas.

Por lo anterior, se debe considerar que las mujeres que habitan las calles necesitan ser representadas en las estadísticas oficiales, sus nacimientos y muertes, así como las experiencias que viven a través de complejas trayectorias de vida, es decir, ser reconocidas como sujetos plenos de derecho con situaciones particulares y vivencias específicas.

Un derecho pendiente de análisis en nuestro país para las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras es el derecho a la vivienda. Las encuestadas en su mayoría respondieron que para mejorar sus condiciones de vida en la calle necesitan de vivienda, su necesidad se corresponde con un derecho que se marca como la meta 11.1 de la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible. Es menester que el Estado mexicano se comprometa a garantizar el derecho a la vivienda a las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras especialmente debido a los roles sexo-genéricos culturalmente asignados donde ellas son asumidas y se hacen cargo del cuidado de los infantes: de acceder a una vivienda podría mejorarse la perspectiva de crianza y abonaría en la búsqueda del interés superior de los menores, a la vez que de la madre.

Con base en los resultados de la Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle (El Caracol, 2019) vertidos en el presente documento se elaboran las siguientes recomendaciones.

1. Derecho a la identidad legal

¿Por qué resultaría crucial o incluso importante para quien que se enfrenta a la adversidad de vivir a la intemperie o de carecer de la satisfacción de necesidades básicas el haber sido registrada desde su nacimiento, tener un nombre y medios para comprobarlo? Tal vez sea por lo que Mayra, a quien se citó en el primer apartado, afirma: “es que es como una cadenita”, “porque sin papeles no hay nada”, “sin papeles no existes”. Pues si no puedes registrarte tú, no puedes registrar a tus hijos, no puedes ir a la escuela o conseguir un mejor trabajo para dejar de vivir en la calle. A veces no puedes

ni rentar o entrar a un hotel, mucho menos a una oficina o a un hospital.

Así, aunque los derechos a la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, el libre tránsito, la alimentación y la familia constituyen ejemplos claros de derechos preponderantes, se sostiene que el ineficiente ejercicio del derecho a la identidad legal se encuentra entre los principales elementos que ejemplifican la ausencia de acciones que propicien la inclusión social, política y económica de las personas que habitan, viven y sobreviven en el espacio público. Por ello se esbozan algunas recomendaciones al respecto:

1. Es indispensable establecer a nivel nacional un periodo único de registro oportuno, ya sea a partir de los 180 días determinados en el Código Civil Federal, en su artículo 55° o en el periodo de 60 días que propone la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), de tal forma que esta base común permita el desarrollo de acciones eficaces de combate del subregistro de nacimiento, así como el diagnóstico, la evaluación y el seguimiento comparado de medidas efectivas de atención en materia registral. En este sentido, es importante precisar que dicho plazo no puede suponer el pago de multas o la justificación de procesos diferenciados que obstaculicen el acceso a este derecho.
2. Es imprescindible la homologación legislativa en el ámbito federal, estatal y municipal en consonancia con lo estipulado en el artículo 4° de la CPEUM, para que, de forma explícita, se garantice a la identidad legal como un derecho universal, gratuito e inmediato. Asimismo, la armonización de la legislación a nivel local posibilitará que no exista contraposición entre en la constitución local, el código civil, el código financiero y el reglamento del registro civil, e incluso, los portales oficiales de la entidad o lo estipulado en los ayuntamientos que recurrentemente resultan contradictorios.
3. En este tenor, es necesaria la estandarización de los requisitos solicitados por los registros civiles en las distintas entidades, de tal forma que se establezca un procedimiento uniforme para el acceso a la identidad legal de forma tal que el lugar geográfico, las circunstancias económicas, la edad u otras condicionantes no representen diferencias que obstaculicen el proceso de registro de nacimiento.
4. Es necesario contrarrestar la saturación de documentos solicitados, sobre todo en el caso del registro extemporáneo, a través de la conformación de un expediente de vida, así como la discrecionalidad en el establecimiento de requisitos como la petición de constancia de inexistencia, la autorización de la Dirección del Registro Civil, investigación judicial o el pago de penalizaciones, que implican el ejercicio de sanciones económicas o administrativas que desincentivan la garantía de este derecho.
5. Debido a la armonización y colaboración interestatal, sería preciso considerar la eliminación de la presentación de esta constancia por parte del interesado cuando se trata de un procedimiento que las autoridades están en posibilidad de realizar como parte de sus tareas registrales. Esta transferencia de responsabilidades disminuiría la sobrecarga documental, procedimental y económica en el ciudadano.
6. La carencia de articulación estatal para abatir el subregistro de nacimiento constituye otro elemento que se interpone en la garantía de la identidad legal. Al respecto, la implementación de programas y campañas deben preverse con carácter permanente y de regularización del estado civil y enfocadas en las problemáticas y características que enfrentan los grupos de atención prioritarios, como son las mujeres que conforman a las poblaciones callejeras.
7. En consonancia con lo estipulado en la CPEUM, así como con lo resuelto por la SCJN, se exhorta a la eliminación del cobro de cualquier tarifa, pago de derechos, multas o costos asociados en el proceso de registro de nacimientos (oportuno o extemporáneo), incluyendo las actas necesarias para realizarlo (constancia de inexistencia, de origen o vecindad) a efecto

de cumplir con el registro gratuito, universal e inmediato. Como la Corte ha determinado, con base en el artículo 4° constitucional, es impropio cualquier cobro aplicado al registro de nacimiento, dado que la Constitución reconoce expresamente la gratuidad de ese derecho y no autoriza excepciones. Esta gratuidad debe entenderse como una prerrogativa universal, de accesibilidad directa e inmediata, en la que no puede tolerarse el cobro de algún concepto por la ejecución de un acto que, en el fondo, constituye una obligación de garantía del Estado.

8. A pesar de la afortunada culminación de la plataforma “Soy México. Tu acta de nacimiento en línea”, que posibilita la obtención de la copia certificada de este documento sin necesidad de acudir a la oficina del Registro Civil, es indispensable cuestionar su implementación. A este respecto destacan las significativas variaciones en los costos de obtención entre entidades, aun cuando el procedimiento sea el mismo. En el caso específico de la Ciudad de México, aunque en un inicio se trataba de la única entidad que otorgaba este trámite electrónico de forma gratuita, con los años también ha incorporado un costo similar al estipulado por el promedio de las entidades federativas.
9. Algunos requisitos del Registro Civil de la Ciudad de México para acceder al registro de nacimiento e incluso a la copia certificada del acta de nacimiento resultan impensables al reconocer la realidad que enfrentan las poblaciones callejeras, por lo que se tendrán que adecuar considerando el analfabetismo vigente, la carencia de vínculos familiares, de certificado de nacimiento o constancia de parto, e incluso de los casos en que los padres y las madres no cuentan con acta de nacimiento, identificación oficial ni comprobante de domicilio.
10. Siendo así, es fundamental que los servidores públicos que en atención directa de este grupo

de atención prioritaria sean sensibilizados sobre la problemática del fenómeno de la vida en calle y, su vez, se diseñen y apliquen procesos estandarizados de atención a miembros de la población que de forma personal e independiente acudan a las oficinas del Registro Civil.

11. De este modo, sería importante considerar la elaboración de un *Procedimiento especial de atención* que sea congruente con la realidad y la problemática que enfrentan los miembros de las poblaciones callejeras en el proceso de obtención y recuperación de su registro de nacimiento, de tal forma que cualquier Registro Civil pueda atender directamente a los miembros de la población sin la necesidad de que medien campañas de atención, pero sí se consideren sus condiciones particulares de exclusión.
12. En el mismo sentido se encuentran las recomendaciones en torno al *Procedimiento para la expedición de la credencial para votar a ciudadanos en situación de calle* diseñado por el INE para garantizar la expedición de credenciales de elector para los ciudadanos que no cuentan con un domicilio. Aunque se reconoce que este es un paso en la dirección correcta, es necesario establecer con mayor precisión diversos puntos que representan obstáculos en su implementación. En principio, la difusión de su existencia es fundamental para que más personas miembros de las poblaciones callejeras utilicen este recurso y realicen el trámite, sin discriminación ni intermediarios. Por el otro lado, la difusión hacia la población en general debe buscar la sensibilización de los ciudadanos que pueden fungir como testigos, sin temor ni prejuicios de quienes no cuentan con los medios para garantizar su identidad legal.
13. Además, es crucial contar con una estrategia integral de sensibilización y divulgación, por parte de la Dirección Ejecutiva del Registro Electoral del Instituto, que considere no sólo la capacitación del personal de los MAC en materia de atención y no discriminación

de miembros de las poblaciones callejeras, sino también respecto a la sensibilización e implementación del Procedimiento de atención que ha sido subutilizado, y el cual debe ser estipulado claramente, en cuando a los tiempos, procesos y responsables para su eficiente ejecución.

14. Además, es importante sugerir que junto con la salvedad de la presentación del comprobante de domicilio es posible tomar en cuenta la exención de la presentación del documento de identidad (acta de nacimiento o de naturalización) en similitud como ocurre con otros grupos con necesidades particulares como personas mayores o los ciudadanos que han sufrido alguna catástrofe natural, a quienes se les dispensa de presentarlo siempre que tengan un registro previo en la Base de Datos del Padrón Electoral. De este modo, se apela a la obligación de las autoridades por promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, por lo que, como ya sentenció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “la interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio” (Instituto Nacional Electoral, 2017).
15. Como ya se mencionó, hasta ahora la mejor forma de aproximación con miembros de las poblaciones callejeras es el acercamiento en los puntos de pernocta y socialización, por lo que la implementación de brigadas, desde el Registro Civil o el INE, debe contemplarse como parte de las campañas de difusión de servicios y atención, con el propósito de informar a la población la atención que ofrecen, de la manera más accesible. Esta estrategia permitiría vincular a los servidores públicos con cierto sector de la población nacional indocumentada, que carece de la información necesaria acerca de los requisitos para obtener o recuperar sus documentos de identidad.

2. Derecho a la educación

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México logró la paridad de género en el sistema educativo; asimismo la inversión incrementó en este rubro, destinando un 4.3% del Producto Interno Bruto a instituciones educativas. Al mismo tiempo se incrementó la matrícula preescolar y hubo una mayor tasa de egreso de la educación media superior y superior (Excélsior, 2018).

Sin embargo, uno de los problemas más grandes sigue estancado, las brechas sociales y regionales siguen siendo abismales y obstaculizan el acceso y el ejercicio del derecho a la educación para los grupos en situación de vulnerabilidad.

Es por esa razón que en este apartado se propondrá una serie de acciones importantes para que México se acerque a una educación integral, plena y de calidad para todas y todos:

1. Es necesario integrar a las escuelas, personal especial para casos extraordinarios para y entre los alumnos y entre personal y alumnado; como por ejemplo, psicólogos y psicólogas, y trabajadores y trabajadoras sociales, con la finalidad de disminuir la deserción escolar e impulsar una calidad plena en la enseñanza-aprendizaje y un ambiente armonioso entre los asistentes a las escuelas y familias.
2. Para lograr una mejor calidad en la enseñanza se requieren profesores y profesoras capacitadas y suficientes para la cantidad de personas que requieren garantizar su derecho. Es por ello que se encuentra necesario impulsar, mejorar y agrandar el personal docente, así como dividir las tareas entre el personal administrativo, el personal educativo y el personal especial.
3. Es importante mejorar las condiciones físicas de las instalaciones escolares, para que las alumnas tengan un espacio cómodo y adecuado para desarrollar sus actividades,

así como una higiene y vida saludable dentro de las instituciones.

4. Es necesario aportar todos los materiales que se requieran para las tareas escolares de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, para lograr un completo y adecuado aprendizaje, sin limitaciones.
5. Creación de cursos y talleres que brinden información veraz y fácil de entender y concientizar sobre la salud sexual y reproductiva, a la población vulnerable, entre ella, las mujeres y niñas pertenecientes a la población callejera. Cabe aclarar que la información debe ser desarrollada de forma contextualizada y con base en el estudiante objetivo y sus características particulares.
6. Brindar talleres sobre planificación familiar a parejas pertenecientes a la población callejera, con el fin de promover decisiones informadas y libres en lo tocante a la reproducción. Asimismo brindar talleres de educación sexual para que las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras conozcan su cuerpo, prácticas sexuales seguras, métodos anticonceptivos e ILE.
7. Incrementar y mejorar el enfoque de la publicidad de los programas de gobierno que se impulsan para la mejora de la calidad de vida de la población. Es decir, que la información que se encuentre en ella sea útil para distintos públicos objetivo, evitando limitarse a publicar los logros, sino ampliar las convocatorias.

3. Derecho al trabajo

La equidad de género, la autonomía y unas dignas condiciones laborales para las mujeres pertenecientes a la población callejera son metas que aún tienen un bajo nivel de logro. Por lo tanto es necesario establecer cimientos estructurales en la cultura, sociedad, política, gobierno e instituciones que garanticen la construcción de contextos favorables para la garantía de los derechos laborales de las mujeres en general y de

las mujeres pertenecientes a la población callejera en particular.

Enseguida se enumera una serie de recomendaciones para contribuir en la mejora de la calidad de vida de las mujeres por medio de un empleo digno y saludable:

1. Se requieren estímulos en el área de investigación de la salud y la seguridad en el trabajo en las profesiones mayoritariamente femeninas.
2. Se requiere la creación de talleres de sensibilización para mujeres y hombres pertenecientes a las poblaciones callejeras sobre la eliminación de los roles de género para crear una sociedad más equitativa desde el ámbito cultural.
3. Es necesaria la introducción de cursos y talleres sobre los derechos laborales de las mujeres en distintos puntos donde se encuentren reunidos y reunidas las personas pertenecientes a las poblaciones callejeras; esto con el fin de que conozcan las posibilidades con las que cuentan en lo laboral, los pasos que deben seguir para obtener todos los requisitos en la búsqueda de un empleo formal y tengan herramientas que puedan utilizar para obtener el empleo.
4. Es importante la construcción de políticas públicas contra el acoso psicológico y sexual dentro de instituciones, empresas y espacio público.
5. El empleo informal tiene larga data en nuestro país y las condiciones económicas de nuestro contexto local lo posibilitan ya que muchas familias dependen de él, por lo tanto es un fenómeno que no debe ser atacado sino regulado. Es necesario cambiar la legislación que criminaliza a quienes lo ejercen, de esa forma se podrán garantizar mejores condiciones de vida para las trabajadoras y sus familias que se encuentran laborando en dicha modalidad.

6. Es urgente la implementación de capacitaciones y cursos de sensibilización para los policías y servidores públicos en general; ya que con base en los testimonios brindados por mujeres pertenecientes a las poblaciones callejeras se supo que existen distintas violaciones a los derechos que atentan a la integridad de las mujeres que se encuentran trabajando en las calles de manera informal y de quienes las acompañan por parte de las autoridades como destrucción de la mercancía o decomiso extraoficial.
7. Es conveniente brindar capacitaciones y cursos financieros a las poblaciones callejeras, para administrar y gestionar el dinero obtenido.
8. Es necesario crear más programas de apoyo al autoempleo y a la obtención de empleos formales para personas vulnerables y en específico para las personas pertenecientes a las poblaciones callejeras. El Programa PROIMUJER del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional del Gobierno de Uruguay es un ejemplo de política pública que se puede utilizar en el contexto mexicano, ya que brinda capacitación ocupacional y competencias básicas de empleabilidad y ciudadanía para madres adolescentes y jóvenes en situación de alta vulnerabilidad y segregación residencial. La modalidad de intervención planteada integra dos fases formativas: un proyecto de vida y el otro de formación técnica específica en un perfil ocupacional. Se realiza un acompañamiento durante la pasantía laboral apoyado en tres herramientas estratégicas para atender las necesidades de las jóvenes que actúan como inhibidores de su empleabilidad: i) una beca por día asistido; ii) un fondo extraordinario que administra la entidad de capacitación para resolver cuestiones como atención de salud bucal, visión, la vestimenta, el transporte y la tramitación de carnet de salud requerido para la inserción laboral, y iii) un fondo para el cuidado de niños pequeños.
9. Es conveniente la incorporación al sistema educativo y sanitario de niñas, niños y adolescentes en riesgo mediante la contratación de sus progenitores en empleos subsidiados.
10. Es necesaria la creación de leyes que garanticen la seguridad en el empleo de mujeres embarazadas y mujeres madres en trabajos informales y subempleos.
11. Es importante establecer medidas de no discriminación salarial en los trabajos informales que incluyan la revisión de categorías y de criterios de valoración para lograr que se paguen igual los trabajos de igual valor; para ello es indispensable realizar auditorías en espacios de trabajo informales, al igual que en los formales.

4. Derecho a la salud

Después del denso recorrido sobre los medios legales y normativos en diferentes niveles (internacional, nacional, estatal y local), entendiendo a la salud como una prioridad para tener una mejor calidad de vida, así como también las medidas reales implementadas hasta el momento en distintos puntos de la república que se ven marcadas en los datos expuestos de la encuesta y revisar si se ha respetado el marco normativo vigente se evidencia que aún quedan retos para poder tener el alcance que se requiere para atender a las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras, por lo que se enlistan una serie de acciones a las cuales hay que dar énfasis:

1. Visibilizar la ausencia de datos sobre los programas de salud que llegan a estas mujeres, a través del uso de la categoría de “población callejera” o similares, con las cuales, se pueda observar si se están atendiendo o no las mujeres de este conjunto.
2. A partir de recabar datos, evaluar si los programas han tenido el impacto propuesto, serviría para generar estrategias adecuadas para garantizar su derecho.

3. Reevaluar las acciones y material de difusión actuales que corresponden a las acciones en salud orientadas a las mujeres, para medir el alcance que han tenido en un nivel preventivo, además de los servicios con los que cuenta cada espacio de atención y que favorece a las mujeres. Generar los indicadores pertinente para evaluar el logro de acceso de la población meta.
4. Acciones con los ajustes necesarios, que cumplan y estén centrados en las necesidades particulares de una población, es decir, realizar estrategias centradas en los focos de atención primarios para mujeres de población callejera, con lo cual se garantice el acceso a la atención requerida.
5. Capacitar de manera constante al personal que atiende en los espacios de salud, en temas de buen trato, derechos humanos y perspectiva de género, mejorando la capacidad de atención de cada actor que se encuentra en los espacios, generando ambientes amigables y respetuosos que favorezcan un seguimiento por parte de las mujeres que acudan.
6. Mejorar los medios de denuncia para que se puedan visibilizar más casos que acontezcan y que sean procesados justamente los perpetradores de eventos discriminatorios.
7. Considerar la salud mental dentro del marco legal y normativo en los diferentes estados, lo cual favorecerá que se apliquen y se tome en cuenta el impacto que tiene sobre la población y la importancia para tener una buena calidad de vida.
8. Impulsar acciones que potencialicen la atención en salud mental en diferentes sectores, para mejorar la atención y el acceso.

5. Derecho a una vida libre de violencia

La garantía urgente de este derecho permite no solo que las mujeres vivan sin violencia sino también que al entenderse la violencia como la

manifestación más extrema de la desigualdad se pueda abonar a los derechos patrimoniales, reproductivos, económicos y el derecho a la vida. A continuación se plantean una serie de recomendaciones que pretenden alcanzar el derecho a una vida libre de violencia en las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras:

1. Es necesario que se unifiquen las narrativas institucionales sobre aquello que se entiende por “razones de género”. Se cuentan con sub-registros de los feminicidios debido a que las autoridades no contabilizan ciertas muertes de mujeres como tal. Se necesita un registro confiable para el análisis del fenómeno y su combate.
2. Al ser la violencia contra las mujeres la manifestación extrema de la desigualdad de género debe existir una sensibilización en las mujeres sobre sus derechos para que cuenten con algunas herramientas para poder reconocer las prácticas que sobre ellas se ejercen como violentas y poder demandar sus derechos.
3. Se urge al Estado mexicano a cumplir con los tratados de derechos humanos y otros acuerdos internacionales como lo es la CEDAW, así como la legislación local y a adoptar medidas para adaptar las legislaciones locales, las políticas y programas nacionales para que las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras les sea garantizado el derecho a una vida libre de violencia.
4. Que en todas las entidades del territorio nacional se tipifique la discriminación como delito desde la perspectiva de género. Asimismo es necesario que se promueva una revisión de los marcos normativos para garantizar la ausencia de roles y estereotipos de género, así como una visión moralizante de las actividades de las mujeres que viven en las calles.
5. Reconocer públicamente que existe el problema y comprometerse a prevenir,

erradicar, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Entendiendo esto como parte de una coordinación entre de las distintas instancias (federales y locales, así como judiciales y legislativas) y aplicar programas nacionales que reconozcan la problemática específica en las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras.

6. Crear espacios de escucha de las experiencias de las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras y confeccionar las acciones acordes con la realidad que experimentan, así como espacios de atención psicológica específica para la población.
7. Aumentar y mejorar los sistemas de recopilación de información para vigilar la violencia contra las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras y mecanismos de información de los resultados a través de los medios de comunicación para difundir la problemática y colocarlo en la agenda pública con el objetivo de un cambio social mayor paulatino.
8. Capacitar a los servidores públicos en materia de violencia de género y garantizar el funcionamiento y presupuesto para los Centros de Justicia para las Mujeres en todo el territorio nacional, considerado una amplia y diversificada difusión de dichos centros entre la población.

6. Derecho al acceso a la justicia

Al ser este un derecho especialmente vulnerado en América Latina, conviene reflexionar sobre la importancia de que pueda ser garantizado, en tanto implica un principio básico del estado de derecho, sin acceso a la justicia las personas no son escuchadas ni ejercen sus derechos o logran hacer frente a la discriminación, y la impunidad se mantiene. Para poder transformar la percepción de las personas sobre la corrupción y fomentar un clima de legalidad y de confianza en las instituciones es necesario que el estado se muestre como una democracia consolidada y evidencia

su compromiso. Se proponen por lo tanto, las siguientes recomendaciones:

1. Desarrollar y dar observancia general a un mecanismo atención dentro del sistema judicial que incluya a estas poblaciones con la finalidad de explicar oportunamente sus derechos, considerando sus desventajas educativas, sociales y económicas.
2. Generar información confiable sobre el perfil socioeconómico de los denunciantes y de los imputados que integre la categoría “mujeres integrantes de las poblaciones callejeras” con la finalidad de conocer el número de personas que pertenecientes a esta categoría son indiciadas o víctimas y poder implementar un mecanismo especial de atención en su situación y analizar sus características sociodemográficas para poder dimensionar el fenómeno de vida en la calle en las mujeres.
3. Promover talleres sensibilización de servidores públicos del sistema de justicia ante las problemáticas particulares que enfrentan las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras así como otros integrantes para abonar en la desestigmatización y descriminalización de estos colectivos de personas. Incluir la titularidad de los derechos a las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras y así trabajar en contra de la revictimización por parte de los servidores públicos.
4. Fomentar talleres en diferentes puntos de localización de las poblaciones callejeras de formación en derechos. Estos talleres podrían realizarse de la mano de las comisiones nacional y local de derechos humanos así como de organizaciones de la sociedad civil que se especialicen en la defensoría de derechos humanos de las poblaciones callejeras.
5. Crear alianzas con la sociedad civil y otros poderes públicos para garantizar y promover el acceso a la justicia de las mujeres y la

asesoría jurídica eficiente y eficaz.

6. Promover el desarrollo de leyes integrales y locales en materia de derechos humanos para las poblaciones callejeras que reconozca la diversidad del sector y ponga atención a las necesidades particulares de cada uno de ellos, como lo es el de las mujeres integrantes de la población callejera.
7. Que el estado mexicano adopte las medidas necesarias para prestar servicios justos, transparentes, eficaces, no discriminatorios y responsables que promuevan el acceso a la justicia para las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras.

7. Derecho a la vida

Garantizar este derecho implica garantizar cualquier derecho posible, su abstracción se debe a que está relacionado con todos los derechos humanos y su libre goce. En las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras este suele ser el derecho más vulnerado, en tanto se acorta su expectativa de vida por situaciones excesivamente prevenibles como deficiencia en la atención en salud, negación de los servicios aun con gratuidad, etc. Por lo anterior, se presentan las siguientes recomendaciones:

1. Contabilizar la situación socioeconómica en las cifras de víctimas y victimarios de la Comisión Nacional de Seguridad para obtener un panorama general del fenómeno y que se incluya también la categoría “población callejera”. Esto permitirá dimensionar el fenómeno. También se sugiere incluir la causa del deceso para comprender qué acciones gubernamentales deben reforzarse para garantizar la vida de las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras.
2. Garantizar el derecho a la vida exige que distintas instancias (servicios de salud y sociales, organizaciones gubernamentales, el sistema judicial, la policía, las empresas, los medios de comunicación) tomen medidas

concertadas y coordinadas. Es necesario que se establezca un mecanismo con los recursos humanos y materiales suficientes para coordinar los distintos niveles de atención y garantizar el acceso a los servicios en las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras para así promover que no mueran por causas excesivamente prevenibles.

3. Es imperativo establecer programas de vivienda, consensuada e incluyente donde las poblaciones que habitan las calles, específicamente las mujeres, puedan decidir y gestionar su acceso a la vivienda considerando que esto no impacta exclusivamente a nivel individual sino que al hallarse en una red de relaciones implica la mejora en la calidad de vida de sus hijos, su comunidad, la ciudad y la nación.
4. Sensibilizar conjuntamente a los servidores públicos en materia de salud específica de estas poblaciones entendiendo las enfermedades a las que están expuestas a partir de su vida en la calle y de los empleos que desempeñan. Reconociendo también el proceso de vulneración que han sufrido y el amplio margen en el umbral del dolor que soportan para no menospreciar los casos que a primera impresión no les resulten prioritarios.
5. Promover entre los servidores públicos un acercamiento a las adicciones no como un delito juzgado como una decisión individual moral sino como una enfermedad producto de un complejo entramado económico, social, familiar y cultural.
6. Desarrollar proyectos de investigación con metodologías transdisciplinarias para el análisis de las causas de muerte de las mujeres que integran las poblaciones callejeras y su relación con la prevención de tales decesos a través de la información cualitativa y cuantitativa sobre sus condiciones de vida.

Referencias

- ACNUDH (2012). *Proyecto final de los Principios Rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humano, presentado por la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Magdalena Sepúlveda Carmona*. A/HRC/21/39
- (2019). *Los derechos humanos y la extrema pobreza. Resolución aprobada por la Asamblea General el 17 de diciembre de 2018*. A/RES/73/163
- (2017). *Visita a México del 12 al 21 de diciembre de 2016 observaciones y recomendaciones dirigidas al Estado parte*. CAT/OP/MEX/2
- Ayuntamiento de Guadalajara (2019). *Registro extemporáneo*. Disponible en: [<https://guadalajara.gob.mx/tramites/registro-de-nacimiento-extemporaneo>], consultado el 2 de agosto de 2019.
- Ayuntamiento de Tijuana (2019). *Tramites*. Disponible en: [<http://www.tijuana.gob.mx/Dependencias/RegistroCivil/tramites.aspx>], consultado el 2 de agosto de 2019.
- Bañales, D. (2019). “La paridad Salarial está a 200 años de Distancia” en *Gato Pardo*. Disponible en: [<https://gatopardo.com/noticias-actuales/brecha-de-genero-en-mexico-y-paridad-salarial/>], consultado el 10 de junio de 2019.
- Bayón, M. C. (2015), *La integración excluyente. Experiencias, discursos y representaciones de la pobreza urbana en México*. México: UNAM/IIS/Bonilla Artigas Editores.
- Brito, N. (2012) *Después de Dios, los médicos. Discriminación contra mujeres callejeras en el Hospital materno infantil Inguarán de la CDMX* [Tesis de maestría] México: Flacso.
- BUAP (2013). *Se presentaron resultados de la encuesta sobre situación de calle en el Municipio de Puebla*. Disponible en: [http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/comunic/se_presentaron_resultados_de_la_encuesta_1820], consultado el 12 de junio de 2019.
- Butler, J. (2010). *Márgenes de guerra*. Barcelona: Paidós
- Cajas, J. (2012). “Limpieza social y paramilitarismo: fractura del Estado de derecho” en *Dfensor. Revista mensual de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal*, 4 (10) pp. 06-12
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2018), “Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, *Diario Oficial de la Federación*. Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios, publicada el 4 de diciembre de 2014, última reforma: 20/06/2018. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_200618.pdf, consultado el 11 de mayo de 2018.

Cásares, L. (2015), “Noción básica del derecho a la identidad en México”, *Hechos y Derechos*, año 4, no. 42, noviembre-diciembre. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas. Disponible en: [<https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/7232/9168>], consultado el 19 de septiembre de 2017.

CCSPJP (2018). *Estudio: las 50 ciudades más violentas del mundo*. México:

CDHDF (2014). *Informe especial. Situación de los derechos humanos de las poblaciones callejeras en el Distrito Federal 2012-2013*. México: CDHDF

CNDH (2018). *Principales preocupaciones sobre la situación de las mujeres que presenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante el Comité de la CEDAW derivadas del Noveno Informe Periódico de México*. México: CNDH

CIDH (2016). *Situación de los derechos humanos en México*. México: OEA

CONAVIM (2013). *Centros de Justicia para las mujeres: Lineamientos para su creación y operación*. México: CONAVIM

Concha, M. (2012). “Limpieza social en México” en *La Jornada*. Disponible en: [<https://www.jornada.com.mx/2012/11/10/politica/020a1pol>], consultado el 10 de mayo de 2019.

CONEVAL (2018). *Pobreza en México: Resultados de pobreza en México 2018 a nivel nacional y por entidades federeativas*. México: Coneval

Coordinación Técnica del Registro Civil Guerrero (2 de agosto de 2019, consultado). Disponible en: [<https://es-la.facebook.com/registrocivilgro/>].

Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. Disponible en: [<https://consejeria.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/se-amplian-horarios-de-atencion-en-registro-civil>] y [<https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/>], consultado el 2 de agosto de 2019.

Diario Oficial de la Federación (1917), *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, 5 de febrero de 2017, última reforma del 29 de enero de 2016. Disponible en: [<http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf>], consultado el 28 de agosto de 2018.

(1928), *Código Civil Federal*, publicado el 26 de mayo, 14 de julio y 3 y 31 de agosto de 1928, última reforma publicada el 3 de junio de 2019. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_030619.pdf, consultado el 7 de junio de 2019.

(1998), “Ley de Nacionalidad”, 23 de enero de 1998. Disponible en: [<http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo8266.pdf>], consultado el 27 de agosto de 2018.

(2014), “Decreto por el que se adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, del 17 de junio de 2014. Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_217_17jun14.pdf], consultado el 3 de agosto de 2017.

(2018), *Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes*. Publicada el 20 de junio de 2018.

- DIF Acapulco (2019). *Servicios y programas*. Disponible en: [<http://difacapulco.gob.mx/servicios-y-programas/enlace-de-registro-civil/>], consultado el 2 de agosto de 2019.
- DIF Guadalajara (2019). *Matrimonios colectivos, registros extemporaneos, reconocimiento de los hijos*. Disponible en: [<https://guadalajara.gob.mx/noticias/campana-2018-matrimonios-colectivos-registros-extemporaneos-reconocimiento-hijos>], consultado el 2 de agosto de 2019.
- Dirección de Coordinación Interinstitucional (2015), “Derecho a la identidad en México”, *Secretaría de Gobernación*. Disponible en: [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/16595/identidad-_juridica-_inmujeres-inerconexion], consultado el 27 de agosto de 2018.
- Donoso, J. (2016). *Discriminación y violencia en grupos vulnerables de la zona urbana de Acapulco, Guerrero*. Acapulco: UAGro
- Duhau, E. y Giglia, A. (2008). *Las reglas del desorden: habitar la metrópoli: La ciudad de México a principios del siglo XXI*. México: Siglo XXI.
- El Caracol A.C. (2017). *Diagnóstico sobre condiciones de vida de mujeres que viven en las calles de la CDMX*. México: El Caracol A.C.
- (2019). *Encuesta sobre condiciones de vida de mujeres que viven en la calle*. México: El Caracol A.C.
- EQUIS: Justicia para las Mujeres (2017). *CEJUM. Informe sobre el estado de la política pública a nivel nacional*. México: EQUIS
- Excelsior. (2018). “México logra paridad de género en sistema Educativo: OCDE”. Disponible en: [<https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-logra-paridad-de-genero-en-sistema-educativo-ocde/1264304>], consultado el 15 de julio de 2019.
- (2017), “Así puedes imprimir tu acta de nacimiento desde tu casa”, Nacional. Disponible en: [<https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/27/1179447>], consultado el 7 de marzo de 2018
- Federici, S. (2010). *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Madrid: Traficantes de sueños.
- Foro Económico Mundial (2018). *Informe Global de Brecha de Género 2018*. Suiza: WEF
- Fuentes, M. (2018). *Las muertes que no deben ser. Natalidad y mortalidad en México*. México: FCE.
- García, Ana. (2018). “Educación en México: Insuficiente, desigual y la calidad es difícil de medir” en *El Economista*. Disponible en: [<https://www.eleconomista.com.mx/politica/Educacion-en-Mexico-insuficiente-desigual-y-la-calidad-es-dificil-de-medir-20181225-0028.html>], consultado el 25 de agosto de 2019.

- Gaceta Oficial de la Ciudad de México (2016), “Protocolo Interinstitucional de Atención a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la Ciudad de México”, *Gaceta Oficial de la Ciudad de México*. Décimo novena época, no. 95, 16 de junio de 2016. Disponible en: [<https://www.sds.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/57c/093/49b/57c09349b67ab545574194.pdf>], consultado el 8 de febrero de 2018.
- Gobierno de Acapulco (2019). *Semana del registro infantil*. Disponible en: [<https://acapulco.gob.mx/2019/05/realizara-gobierno-de-acapulco-la-semana-del-registro-infantil/>], consultado el 2 de agosto de 2019..
- Gobierno de Baja California (2019). *Trámites y servicios*. Disponible en: [<http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/tramitesyservicios/busqueda.jsp>], consultado el 2 de agosto de 2019.
- Gobierno de Jalisco (2019). *Registro de nacimiento*. Disponible en: [<https://sgg.jalisco.gob.mx/acerca/areas-de-la-secretaria/registro-civil/registro-nacimiento>], consultado el 2 de agosto de 2019.
- Goffman, E. (2010). *Estigma: la identidad deteriorada*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Hernández, E. (2017). “¿Oportunidades de empleo o nuevas formas de trabajo precario? Los call centers de la Zona Metropolitana de Guadalajara” en *Revista Espiral* 24 (69)
- IASIS (2010). *Censo de personas en situación de calle de la Ciudad de México “Tú también cuentas”*. México: SEDESO
- (2011). *Censo de personas en situación de calle de la Ciudad de México “Tú también cuentas II”*. México: SEDESO
- (2012). *Censo de personas en situación de calle de la Ciudad de México “Tú también cuentas III”*. México: SEDESO
- (2013). *Censo de personas en situación de calle de la Ciudad de México “Tú también cuentas IV”*. México: SEDESO
- INE (2015), “Acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia, por el que se aprueba el procedimiento para la expedición de la Credencial para Votar a ciudadanos en situación de calle, en acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano recaído en el expediente número SDF-JDC-455/2014”, *Comisión Nacional de Vigilancia*, Acuerdo 1-EXT/04: 14/04/2015. Disponible en: [https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-GacetasElectorales_INE/2015/Gaceta-006/GE_006_111.pdf], consultado el 20 de marzo de 2019.

(2017) “Acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia, por el que se aprueban los medios de identificación para obtener la credencial para votar en territorio nacional”, *Comisión Nacional de Vigilancia*. Disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95293/cnv-so12-2017-12-14-acuerdo1.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

INEE (2012). *La Educación en México: Estado actual y consideraciones sobre su Evaluación*. México: INEE

INEGI (2015a). *Encuesta Intercensal 2015*. México: INEGI

(2015b). *Características Educativas de la Población*. México: INEGI.

(2016). *Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares*. México: INEGI

(2017). *Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad*. México: INEGI

(2018a). *Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública*. México: INEGI

(2018b). *Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México, 2017*. México: INEGI.

(2018c). *Encuesta Nacional sobre Discriminación*. México: Conapred/Cndh/Unam/Conacyt/Inegi

(2018d). *Estadísticas de mortalidad*. México: INEGI

(2018e). *Tasa de casos nuevos de enfermedades sobre trastornos mentales y del comportamiento seleccionados por entidad federativa, casos seleccionados, periodo y sexo*. Disponible en: [https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/pxweb/inicio.html?rxid=91a63b16-b544-4b50-8b37-90d5868e9620&db=Salud&px=Mental_05], consultado el 19 de septiembre de 2019.

INMUJERES (2017). *Roles y estereotipos de género, una forma de discriminación contra las mujeres*. Disponible en: [http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BoletinN10_2017.pdf], consultado el 20 de septiembre de 2019.

(2018). *Desigualdad en cifras. Género y pobreza*. Boletín Inmujeres. Año 4, Número 6, junio.

(2018b). *Mujeres y hombres en México 2018*. México: Gobierno de México/Inmujeres/Inegi

(2018c). *Género y pobreza*. Disponible en: [http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BoletinN6_2018.pdf], consultado 20 de septiembre de 2019.

(2018d). *Género y salud*. Disponible en: [http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BoletinN5_2018.pdf], consultado 20 de septiembre de 2019.

(2019). *Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) 2013-2018*. México: INMUJERES

(2019b). *La violencia en la atención obstétrica*. Disponible en: [http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BoletinN5_2018.pdf], consultado el 15 de septiembre de 2019.

Jasso, C. y González, K. (2018). “Brechas en la medición de feminicidios en México” en *Animal Político* Disponible en: [<https://www.iis.unam.mx/blog/brechas-en-la-medicion-de-feminicidios-en-mexico/>], consultado el 10 de junio de 2019.

Lucchini, R. (1996), *Sociología de la supervivencia. El niño y la calle*. México: Universidad de Fribourg-UNAM.

Makowski, S. (coord., 2008), *Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle. Elementos para repensar las formas de intervención*. México, D.F.: Ednica/ Fundación Dar y Amar/ Fundación

Proniños de la calle/ Fundación San Felipe de Jesús/ Yolia Niños de la calle. Disponible en: [<http://www.proninosdelacalle.org.mx/descargables/publicaciones/situaciones-de-la-calle.pdf>], consultado el 27 de agosto de 2018.

(2010), *Jóvenes que viven en la calle*, México: Siglo XXI/UAM-I.

(2015), "Ciudadanos Invisibles", en *Dfensor*, junio-2015. Disponible en: [<http://www.corteidh.or.cr/tablas/r34803.pdf>], consultado el 27 de agosto de 2018.

(2017), "Jóvenes en situación de calle: el desafío de las políticas públicas para la inclusión social", *Los invisibles: niños, niñas y adolescentes en situación de calle en la Ciudad de México*. Ciudad de México: Universidad Autónoma de Aguascalientes - Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal – Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Mata, A. (2015). "Las poblaciones en situación de calle ante los sistemas de procuración y administración de justicia en la ciudad de México" en *Dfensor. Revista mensual de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal*, 6 (12) pp. 37-43.

MSPAS (2011). *Modelo de Atención Integral en Salud*. Guatemala: OPS

Montoya, V. (2009). "El derecho a la vida en la Constitución mexicana. Un proyecto luminoso de resolución" en *Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional* (11, enero-junio) pp. 247-262.

Mora-Ríos, J. y Bautista, N. (2014). "Estigma estructural, género e interseccionalidad: Implicaciones en la atención a la salud mental" en *Salud mental*, 37(4), pp. 303-312

Moreno, A., Soriano, A. y Martínez, M. (2017). "Condiciones de vida material e inmaterial. Mujeres integrantes de las poblaciones callejeras en la CDMX." Ponencia presentada en el *Congreso internacional. Mujeres y niñas desde una doble perspectiva: Género y Derechos Humanos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible*. México: PUDH/UNAM

OEA (1969). *Convención Americana de Derechos Humanos*. San José, Costa Rica: OEA

OIT (2011). *Convenio Sobre las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos*, (núm. 189). Suiza: OIT

OIT, et. al. (2013). *Informe Regional. Trabajo Decente e Igualdad de Género*. Chile: OIT

Oizerovich, S. y Perotta, G. (2017). *Salud Sexual y Reproductiva*. Argentina: OMS

OMS (2013). *Salud mental: un estado de bienestar*. Disponible en: [https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/], consultado el 20 de agosto de 2019

(2017). *Diez datos sobre la prevención de la violencia*. Disponible en: [<https://www.who.int/features/factfiles/violence/es/>], consultado el 25 de junio de 2019.

ONU (1948). *Declaración Universal de Derechos Humanos*. Suiza: ONU

ONU Mujeres (2015). *El Progreso de las Mujeres en el Mundo*. EU: ONU

PNUD (2013). *Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina*. PNUD: Nueva York

Quórum (2010), *Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situaciones de calle. Elementos para repensar las formas de intervención*. México: Lenguaraz.

Ramos, R. y Luna, K. coord. (2015). *Violencia Obstétrica. Un enfoque de Derechos Humanos.*: México: GIRE, A.C

RENAPO (2011), *Cédula de Identidad Personal*. Secretaría de Gobernación-Registro Nacional de Población e Identificación Personal. Disponible en: [<https://www.renapo.gob.mx/swb/es/RENAPO/FaqCEDI>], consultado el 12 de abril de 2017.

(2012), *Programa de Modernización Integral del Registro Civil. Conceptos y estructuras MIRC del 1º de enero al 30 de agosto de 2012*. Ciudad de México: SEGOB. Disponible en: [http://www.gobernacion.gob.mx/archivos/POT/fraccionXI/Reglas_de_operacion_2012.pdf], consultado el 29 de agosto de 2018

(2015), *Derecho a la identidad en México. Un derecho individual*. Disponible en: [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/16595/identidad-_juridica-_inmujeres-inerconexion-20enero2015.pdf], consultado el 27 de agosto de 2018.

Secretariado Ejecutivo (2019). *Información sobre violencia contra las mujeres*. México: SNSP

SEDESA. (s/a) *Gratuidad: Acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos a las personas residentes del Distrito Federal que carecen de seguridad social o laboral*. Disponible en: [<http://data.salud.cdmx.gob.mx/portal/index.php/programas-y-accionesc/grat>], consultado el 18 de julio de 2019.

SEDESOL (2019). *Diagnóstico Situacional de las Poblaciones Callejeras 2017-2018*. México: SEDESOL

SEDESOL (2019). “Trámites”. Disponible en: [<https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/ts/710/9>], consultado el 2 de agosto de 2019.

SEGOB. (2019). Cuenta INEA con estrategias específicas de alfabetización. México: Segob. Disponible en: [<https://www.gob.mx/inea/articulos/cuenta-inea-con-estrategias-especificas-de-alfabetizacion?idiom=es>], consultado el 18 de julio de 2019.

(2018), “Expedición de la copia certificada del acta de nacimiento en línea”, *Trámites*. Disponible en: [<https://www.gob.mx/tramites/ficha/expedicion-de-la-copia-certificada-del-acta-de-nacimiento-en-linea/RENAPO187#costos>], consultado el 4 de diciembre de 2018.

(2018), “Obtén tu copia certificada del acta de nacimiento en línea”, portal *GOB.MX*. Disponible en: [<https://www.gob.mx/actas>], consultado el 29 de agosto de 2018.

(2018), “Tratados y declaraciones sobre Derechos Humanos”, *Orden Jurídico Nacional*. Disponible en: [http://ordenjuridico.gob.mx/derechos_humanos.php], consultado el 10 de mayo de 2018.

Seguro Popular (s/a). Portal del Seguro Popular. Disponible en: [<http://www.seguropopular.org/>], consultado el 10 de septiembre de 2019.

Sin embargo (2013.) *La “limpieza social” es una práctica común en 9 ciudades del país; el DF presenta casos desde 1998*. Disponible en: [<https://www.sinembargo.mx/17-08-2013/722539>], consultado el 20 de julio de 2019.

SNSP (2019). *Instrumento para el registro, clasificación y reporte de delitos y las víctimas* CNSP/38/15.

Solicitud de Información: INFOMEX 00756019, Secretaría General del Registro Civil de Puebla.

Solicitud de Información: Plataforma Nacional de Transparencia 2210000116219, Instituto Nacional Electoral.

Solicitud de Información: Plataforma Nacional de Transparencia DTB4494/2019, Folio 03733919, Secretaría General del Registro Civil de Guadalajara.

STPS (2019). *Salarios Mínimos*. México: STPS

Strickland, D. (2012), “Poblaciones callejeras: de la asistencia a la represión”, en *Desacatos*, 28, pp. 105-120.

UDLAP (2018). *Índice Global de Impunidad en México. La impunidad subnacional en México y sus dimensiones. IGI-MEX 2018*. Puebla: Fundación Universidad de las Américas.

UNICEF (1989). *Nuevas alternativas de atención para el niño de y en la calle de México*, Colombia: UNICEF/DIF-Veracruz.

UNESCO (1994). *Declaración Mundial sobre Educación para Todos y Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje*. Nueva York: UNESCO.

(2019). Educación e Igualdad de Género. Disponible en: [<https://es.unesco.org/themes/educacion-igualdad-genero>], consultado el 15 de julio de 2019.



CNDH
M É X I C O

Directorio

Presidente

Luis Raúl González Pérez

Consejo Consultivo

María Ampudia González
Alberto Manuel Athié Gallo
Michael William Chamberlin Ruíz
Angélica Cuéllar Vázquez
Mónica González Contró
David Kershenobich Stalnikowitz
María Olga Noriega Sáenz
José de Jesús Orozco Henríquez

Primer Visitador General

Ismael Eslava Pérez

Segundo Visitador General

Enrique Guadarrama López

Tercera Visitadora General

Ruth Villanueva Castilleja

Cuarta Visitadora General

María Eréndira Cruzvillegas Fuentes

Quinto Visitador General

Edgar Corzo Sosa

Sexto Visitador General

Jorge Ulises Carmona Tinoco

Titular de la Oficina Especial para el “Caso Iguala”

José T. Larrieta Carrasco

Directora Ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Ninfa Delia Domínguez Leal

Secretaría Ejecutiva

Consuelo Olvera Treviño

Secretario Técnico del Consejo Consultivo

Joaquín Narro Lobo

Oficial Mayor

Raymunda G. Maldonado Vera

Coordinador General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos

Rubén Francisco Pérez Sánchez



Ciudad de México, noviembre de 2019